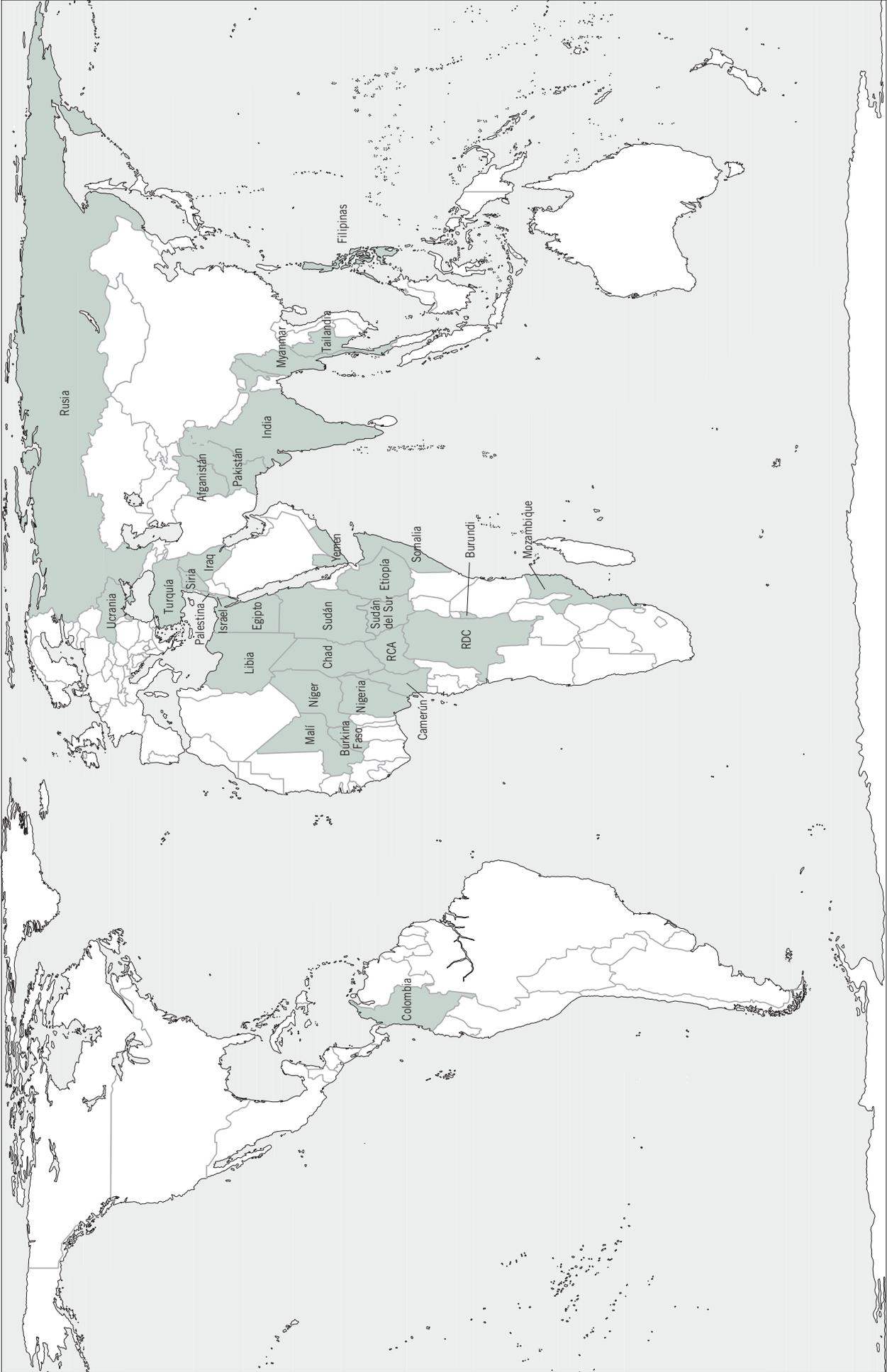


Mapa 1.1 Conflictos armados



Países con conflicto armado

1. Conflictos armados

- Durante 2022 se registraron 33 conflictos armados, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno).
- Los conflictos armados de alta intensidad representaron más de la mitad (52%) del total de casos a nivel mundial.
- Durante 2022 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Etiopía apoyados por las milicias amháricas Fano y el grupo armado OLA con graves consecuencias contra la población civil en la región etíope de Oromiya. En paralelo, se redujo la violencia en la vecina región de Tigré a raíz de la firma del acuerdo de paz en noviembre, lo que podría poner fin a uno de los conflictos armados más graves de los últimos años.
- Los ataques de al-Shabaab y la ofensiva del Gobierno Federal de Somalia y de sus aliados locales e internacionales provocaron una escalada de la violencia en 2022 sin precedentes en años anteriores.
- En Malí se multiplicaron por cuatro los ataques contra civiles perpetrados por parte de los dos principales grupos yihadistas activos en la región: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS o ISWAP).
- La región de la Triple Frontera en el Sahel occidental (Malí, Burkina Faso y Níger) experimentó la mayor escalada de eventos violentos vinculados a grupos yihadistas que cualquier otra región de África, con un aumento del 36% con relación a 2021.
- Se intensificó la ofensiva en el este de RDC por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Rwanda, lo que a su vez agravó las relaciones entre ambos países.
- En Sudán del Sur persistieron las dinámicas de violencia debido a enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, entre las facciones Kitgwanj disidentes del SPLA-IO, y a la continuidad de episodios de violencia intercomunitaria que afectaron a múltiples regiones del país.
- En Pakistán se produjo un deterioro del conflicto, a pesar del intento de negociaciones, en un contexto de grave crisis política e impacto del cambio climático.
- El conflicto armado en Myanmar entre el Ejército de la Junta Militar y los grupos armados étnicos y las Fuerzas de Defensa Popular se intensificó, con graves consecuencias humanitarias.
- Rusia lanzó una invasión militar contra Ucrania en febrero de 2022, que llevó a un conflicto armado internacional, una grave crisis humanitaria e impactos multidimensionales globales.
- Iraq continuó siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, en un contexto caracterizado también por tensiones políticas que dificultaron durante meses la formación de un nuevo gobierno.
- Tras más de una década de conflicto armado, la crisis humanitaria en Siria estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra.
- En 2022 Yemen registró un significativo descenso en las hostilidades y el número de víctimas mortales de la violencia como resultado de la tregua que estuvo vigente durante seis meses

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2022. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2022, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2022.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2022

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	3
	Autogobierno, Identidad		=
Etiopía (Oromiya) -2022-	Interno	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia progubernamental amhárica Fano	3
	Autogobierno, Identidad, recursos		↑
Etiopía (Tigré) -2020-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↓
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli; gobierno con sede en Tobruk; grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner; Turquía	1
	Gobierno, Recursos, Sistema		=
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2022 con la del 2021, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2022 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales "Naparama"	3
	Sistema, Identidad		=
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Mali, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaissona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Rusia, Grupo Wagner	2
	Gobierno, Recursos		↓
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (EACRF)	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		=
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Turquía, AMISOM/ATMIS, EUNAVFOR Somalia, Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		↑
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, milicias comunitarias, UNITAMS	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		=
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony ("Agwalek"), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, grupos surgidos de las FARC, grupos paramilitares	2
	Sistema		↓
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno talibán, Frente Nacional de Resistencia (NRF)	2
	Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		=
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán (entre ellas, Tehrik-e Taliban Pakistan -TTP), insurgentes internacionales	2
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Ajoji Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
EUROPA			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia – Ucrania -2022-	Internacional	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania	3
	Gobierno, Territorio		↑
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)	1
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes Unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional ⁶	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLF, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, Israel	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU)	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

6. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como "internacional" y no como "interno" por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

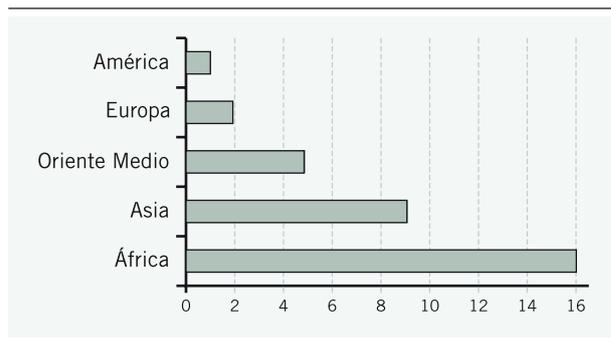
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2022

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2022, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

En 2022 se registró un ligero aumento en el número de conflictos armados respecto al año anterior. En total se contabilizaron 33 casos, frente a los 32 conflictos de 2021 y los 34 en 2020, 2019 y 2018. La escalada de la violencia en la región de Oromiya (Etiopía) llevó a considerar este escenario como conflicto armado, en el que combatían fuerzas de seguridad federales apoyadas por las milicias amháricas Fano y el grupo armado

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2022



oromo OLA. Otro cambio significativo en 2022 fue la transformación del escenario de violencia en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022 desbordó la situación anterior de conflicto armado en el este del país dando paso a un conflicto internacional, con graves consecuencias multidimensionales.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, se mantuvo la tendencia de períodos precedentes y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (16) y Asia (nueve), seguido de Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno). El continente africano, por tanto, concentraba prácticamente la mitad de los casos (49%) a nivel global.

En cuanto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internacionales y, en su gran mayoría, internos internacionalizados. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2022 cuatro de los 33 casos (12%, 9% en 2021) eran conflictos armados internos y tres de esos cuatro transcurrían en Asia. Se trata de los casos de Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El otro caso de conflicto armado interno fue el de Etiopía (Oromiya), en África. Otros tres casos, que suponen un 9% (6% en 2021) del total de contextos, fueron de carácter internacional: el conflicto en la región africana del Sahel occidental, la disputa palestino-israelí en Oriente Medio y la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, la invasión de Rusia a Ucrania llevó a un incremento de la tipología de conflictos internacionales. Aunque las guerras interestatales continuaron siendo minoritarias, algunos análisis señalaron que la invasión había puesto fin a supuestos del orden internacional de la post-Guerra Fría, como la excepcionalidad de la guerra entre Estados.⁷

Los 26 casos restantes, que representan un 79% de los casos (85% en 2021), fueron internos internacionalizados. Estos casos se caracterizan porque

7. Haas, Richard, "The Dangerous Decade. A Foreign Policy for a World in Crisis", *Foreign Affairs*, septiembre/octubre de 2022.

alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza –como ISIS, al-Qaeda o Boko Haram, entre otros.

En línea con lo observado en años previos, durante 2022 se mantuvo una presencia destacada de misiones internacionales de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, especialmente en el marco de conflictos armados en África. A lo largo del año la ONU continuó operando en contextos como RCA (MINUSCA), RDC (MONUSCO), Malí (MINUSMA) y Sudán del Sur (UNMISS). En algunos de estos escenarios participaron en confrontaciones con actores armados. El ámbito de las misiones internacionales y su participación en conflictos se vio afectado por las proyecciones de tensiones internacionales entre Rusia y actores occidentales. Así, en 2022 se extendió el mandato de la MINUSCA, aunque con abstención de Rusia, China y Gabón por desacuerdos que involucraban la presencia del Grupo Wagner en RCA. En Malí y la región del Sahel Occidental, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar y los aliados tradicionales, a causa del acercamiento del Gobierno militar maliense a Rusia y al Grupo Wagner, tuvo repercusiones en el complejo militar regional-internacional, como el bloqueo de Malí a las operaciones de la MINUSMA. Además, varios países retiraron sus tropas de esta misión (Alemania, Reino Unido, Costa de Marfil). Ese deterioro diplomático impactó también sobre otras misiones y operaciones de organizaciones regionales y países: la UE suspendió sus misiones EUCAP y EUTM Mali; varios países retiraron tropas de la operación europea Takouba; Francia finalizó su operación Barkhane; o Malí se retiró de la fuerza militar conjunta del G5 Sahel.

Organizaciones regionales continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Africana (UA) –con la misión AMISOM en Somalia, que en 2022 fue transformada en la Misión de Transición de la UA en Somalia, ATMIS– o la Unión Europea (UE) – EUNAVFOR en Somalia. Por otra parte, en 2022 países de la Comunidad Africana Oriental (EAC) aprobaron el despliegue de una misión militar en el este de RDC para combatir al grupo armado M23. Asimismo, la

Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y las autoridades de Mozambique acordaron extender el mandato de la misión SAMIM y aprobaron su transición a una misión multidimensional. En 2022, la SAMIM y tropas ruandesas desplegadas en Mozambique ampliaron sus acciones contra la insurgencia en la región de Cabo Delgado.

También continuaron operativas misiones híbridas, que involucran a organizaciones regionales y Estados, como la operación militar marítima en el Cuerno de África y el Océano Índico, la Combined Task Force 151,⁸ liderada por EEUU, en colaboración con EUNAVFOR. En esta misma línea se inscribe la coalición internacional contra el grupo armado ISIS (Daesh), formada en septiembre de 2014 bajo el liderazgo de EEUU, que desde entonces ha desplegado sus acciones en Iraq y Siria. En diciembre de 2021, ante la mayor actividad de grupos vinculados a ISIS en el continente, la coalición estableció un grupo especial de trabajo sobre África. Esta coalición cuenta con 85 integrantes, entre Estados y organizaciones, entre ellas la Liga Árabe y la UE.⁹

La invasión de Rusia a Ucrania incrementó el número de conflictos internacionales (9% del total) en 2022, aunque la mayoría de conflictos armados eran internos internacionalizados (79%)

Respecto a la implicación de terceros países, esta dimensión continuó presente en numerosos conflictos internos internacionalizados, lo que agravó su complejidad. En 2022 este aspecto estuvo presente en casos como RDC (este). Allí Rwanda apoyó al M23, insurgencia congoleña que reinició sus acciones tras casi una década inactiva. RDC y Rwanda llevaron a cabo incursiones militares recíprocas, lo que provocó una escalada de la tensión. También en RDC, en relación al conflicto en torno a la insurgencia yihadista de las ADF, Uganda dio a conocer en 2022 su participación militar en la Operación Shuja contra esa insurgencia e informes señalaron intereses económicos en ese involucramiento. Diversos escenarios de conflicto continuaron caracterizándose por una multiplicidad de terceros países involucrados militarmente en las dinámicas de violencia, como Yemen, Iraq y Siria. En 2022 Turquía intensificó sus acciones militares contra actores kurdos en Iraq (PKK) y Siria (YPG), con impactos también sobre poblaciones civiles. Además, en Siria continuaron las incursiones aéreas de Rusia; Israel prosiguió con ofensivas en distintos puntos del país; y también EEUU lanzó ataques contra milicias con supuestos vínculos con Irán y siguió con incursiones contra ISIS, como la que acabó con la vida del líder del grupo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi en febrero de 2022. Por otra parte, en numerosos conflictos, grupos armados no estatales llevaron a cabo acciones ofensivas transfronterizas. Fue el caso del conflicto de Yemen, entre muchos otros. En relación a este conflicto,

8. Existen cuatro operaciones internacionales operadas por las Combined Maritime Forces (coalición de 34 países liderada por EEUU). Véase [Combined Maritime Forces](#) [en línea, consultado el 15 de enero de 2023].

9. Más información en [The Global Coalition Against Daesh](#).

a principios de 2022 las fuerzas al-houthistas lanzaron ataques contra Arabia Saudita y EAU, que respondieron a estas ofensivas en una escalada que generó inquietud por su impacto regional. Grupos armados de RCA cruzaron con regularidad la frontera con Camerún y se involucraron en secuestros contra civiles. La insurgencia de al-Shabaab realizó ataques en Etiopía y Kenia durante el año, poniendo de manifiesto objetivos regionales. En la región del Sahel Occidental se siguieron registrando acciones armadas de grupos yihadistas que afectaron a países como Malí, Burkina Faso, Níger, Benín, Togo o Ghana.

En cuanto a las causas de los conflictos armados en 2022, el panorama de conflictividad continuó marcado por la multicausalidad. Un 67% de los conflictos armados tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos. En todo caso, tuvo mayor relevancia la dimensión de disputa contra el sistema, aspecto presente junto a otras causas en 17 conflictos (52% de los casos), en gran parte vinculado a la elevada presencia de actores armados con una agenda de línea yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos.

Fue el caso de conflictos como Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Malí, RDC (este-ADF), Somalia, Mozambique (norte), Libia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen. En otros tres casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con otro tipo de línea ideológica.

Adicionalmente, otro elemento a resaltar entre las motivaciones principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, que estuvieron –una de ellas o ambas– en 20 de los 33 de los casos (61%). De estas, tuvo mayor relevancia la dimensión de demandas identitarias (61%). Las disputas en torno a demandas de autogobierno estuvieron presentes en un 42% de los casos. Entre estos sobresalió en 2022 el caso de Etiopía (Oromiya), por la escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad etíopes –apoyados por las milicias amháricas Fano– y el grupo armado oromo OLA. Esta motivación también estuvo presente en otros casos como el conflicto que enfrenta al Gobierno de Camerún con los movimientos secesionistas político-militares en las regiones anglófonas del oeste del país (Ambazonia/Noroeste y Suroeste). También los conflictos de Etiopía (Tigré), Filipinas (Mindanao), Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Turquía (sudeste), por mencionar solo algunos, involucraron –entre otros elementos causales– aspectos de disputa en torno a la identidad y/o el autogobierno.

Los conflictos armados tenían naturaleza multicausal y un 61% de ellos tenían entre sus causas principales disputas en torno a demandas identitarias

Por último, también hubo numerosos conflictos armados que tuvieron entre sus causas principales el control de territorio y/o de recursos. Estos casos ascendieron a un 39% –13 de los 33– del total de conflictos. En este binomio, sobresalió la dimensión de disputa en torno a recursos (presente en el 33% del total de conflictos), mientras el elemento de control de territorio como una de las causas principales se evidenció en un menor porcentaje (en el 6% de los conflictos armados). Los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos, con numerosos enfrentamientos relacionados con la extracción de oro y coltán, entre otros minerales.

Zonas de actividad minera también fueron escenario de hechos de violencia en Pakistán (Baluchistán), otro conflicto armado en el que pesa la disputa por recursos como una de sus causas, y también en la India, en el marco del conflicto con la insurgencia naxalita. En Sudán y Sudán del Sur disputas intercomunitarias en torno al acceso de recursos se entrecruzaban con otras dinámicas de violencia. Las cuestiones vinculadas al control del territorio, en tanto, fueron especialmente significativas en el caso de Palestina-Israel. En todo caso, los conflictos se vieron sostenidos e influidos por las dinámicas de las economías de guerra. En el caso de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) fuentes locales advirtieron en 2022 que la dinámica de la violencia estaba cambiando, de la mano del crecimiento de una economía de guerra que involucraba secuestros y otras formas de extorsión de la población civil y que esa economía de la guerra reducía los incentivos para la búsqueda de arreglos negociados.

En materia de **evolución**, un 30% de los conflictos en 2022 presentaron un aumento de los niveles de violencia en comparación con el año anterior. Fue el caso de Etiopía (Oromiya), Malí, Región Sahel Occidental, RDC (este), Somalia, Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Rusia-Ucrania. Algunos de estos casos asistieron a graves dinámicas de escalada. Entre ellos, en Sahel Occidental el aumento de la violencia contra la población civil causó un 49% más de muertes que las registradas en 2021 y en el conflicto en Malí se multiplicaron por cuatro los ataques contra civiles por los dos principales grupos yihadistas. En Somalia se asistió a una escalada de la violencia sin precedentes en años anteriores. En la región de Oromiya, el incremento de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el grupo armado OLA llevó a considerarlo como un conflicto armado en 2022. La invasión de Rusia a Ucrania llevó a un conflicto armado internacional de carácter interestatal de alta

intensidad, causante de una grave crisis humanitaria. Otros 15 conflictos armados –que representan un 46% del total de casos– se observaron niveles de violencia y confrontación similares a los registrados en 2021. En ocho contextos –24% de los conflictos armados a nivel mundial– se identificó una disminución en los niveles de violencia armada y sus impactos: Etiopía (Tigré), RCA, Colombia, Afganistán, Filipinas (Mindanao), India (CPI-M), Tailandia (sur) y Yemen. En algunos de estos casos la reducción de los incidentes violentos estuvo relacionada con acuerdos de alto el fuego –Etiopía (Tigré), Yemen– en el marco de procesos de negociación, o a la evolución o perspectiva positiva de estos –Tailandia (sur), Colombia.¹⁰ No obstante, en casos como Afganistán, pese a la reducción de la violencia armada directa, continuaron produciéndose graves vulneraciones de derechos humanos de la población.

En cuanto a la **intensidad de los conflictos armados**, durante 2022 se acentuó la tendencia observada en los últimos diez años de incremento de casos graves. Es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas mortales anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si hace una década los conflictos armados de alta intensidad representaban en torno a un cuarto del total de casos, en los últimos años esta proporción se ha ido incrementando hasta representar la mitad de los contextos (ver gráfico 1.4). En el marco del último lustro, los conflictos armados graves supusieron un 40% en los años 2016 y 2017, descendieron entre 2018 y 2019 –a 27% y 32%, respectivamente–, y aumentaron de manera significativa en 2020, cuando alcanzaron el 47%. En 2021, la prevalencia de casos de alta intensidad fue incluso más elevada, llegando al 53% y superando la mitad de los casos por primera vez en la última década. **En 2022 se mantuvo esta tendencia y fueron 17 los conflictos armados de alta intensidad (52% del total de casos).** En

línea con lo observado en 2021, durante 2022 el mayor porcentaje de casos graves se concentró en África. El continente albergó 12 de los 17 conflictos armados de alta intensidad que se identificaron a nivel global, es decir, el 70% del total de casos de alta intensidad. Respecto al número de casos del continente africano, 12 de sus 16 conflictos armados (75%) eran de alta intensidad, ligeramente inferior al 2021 (80%), pero un porcentaje muy superior al observado en años recientes –en 2019, solo un 44% de los conflictos armados africanos eran de intensidad elevada. Después de África, la segunda región en albergar el mayor número de casos de alta intensidad fue Oriente Medio,

Un 30% de los conflictos armados en 2022 registraron mayores niveles de violencia respecto al año anterior

En 2022 el 52% de los conflictos armados fueron de alta intensidad

con un total de tres contextos –6% del total global de casos de alta intensidad, pero 60% de los conflictos de la zona. En Asia y en Europa se identificó un conflicto armado de alta intensidad respectivamente, mientras que en América no se registró casos de este tipo. Los 17 casos de conflictos armados graves en 2022 fueron:

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este/ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Rusia-Ucrania, Iraq, Siria y Yemen.

Cabe destacar que en algunos de los conflictos armados de alta intensidad las hostilidades y múltiples dinámicas de violencia causaron unos niveles de letalidad muy superiores al umbral de mil víctimas mortales anuales. Solo en la invasión de Rusia a Ucrania, el Departamento de Defensa de EEUU estimaba a finales de 2022 en torno a 100.000 militares fallecidos o heridos en cada bando, cifras no verificables.¹¹ Respecto a las víctimas civiles, ACNUDH cifraba en al menos 6.884 personas fallecidas y 10.947 heridas entre el inicio de la invasión y finales de diciembre de 2022, aunque advertía que las cifras reales podían ser considerablemente más elevadas. En el conflicto del Sahel Occidental se incrementó la letalidad significativamente, con en torno a 9.700 víctimas mortales (frente a cerca de 5.300 en 2021). En cambio, en 2022 algunos conflictos que en años anteriores habían tenido niveles muy elevados de víctimas mortales, como Afganistán, Yemen y Siria, asistieron a una reducción de la letalidad, si bien mantuvieron graves niveles de impactos en otras dimensiones de seguridad humana. Así, en Afganistán hubo 3.970 víctimas mortales según datos de ACLED, niveles muy inferiores a las casi 42.000 víctimas mortales en 2021 (y a las 20.000 de 2020 y las 40.000 de 2019). No obstante, durante el año se produjeron múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo contra las mujeres, lo que llevó a defensoras a calificar la situación en Afganistán como apartheid de género. En Yemen el conflicto armado se cobró la vida de al menos 6.721 personas, según datos de ACLED (22.000 fallecidos en 2021, 20.000 en 2020, 23.000 en 2019), descenso debido principalmente a un acuerdo de alto el fuego que estuvo vigente durante parte importante del año. No obstante, más del 80% de la población yemení tenía problemas para satisfacer sus necesidades básicas. En Siria, en 2022 se mantuvo el nivel de letalidad de 2021, de entre 3.800 y 5.700 fallecidos, cifras significativamente más reducidas que en años precedentes (30.000 en 2018; más de 50.000 en 2016 y 2015, respectivamente; más de 70.000

10. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.
11. Lamothe, Dan, Liz Sly y Annabelle Timsit, “‘Well over’ 100,000 Russian troops killed or wounded in Ukraine, U.S. says,” *The Washington Post*, 10 de noviembre de 2022.

en 2014), pero la crisis humanitaria en el país estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra. Otros conflictos armados que destacaron por sus niveles de letalidad en 2022 fueron el de Somalia, con más de 6.400 víctimas mortales (en torno a 3.200 en 2021); Malí, donde se estimaban en torno a 4.842 víctimas mortales ese año (1.887 en 2021); Etiopía (Oromiya), con en torno a 4.500 fallecidos; RDC (este), con más de 5.600 personas fallecidas por la violencia; y la Región Lago Chad (Boko Haram), con 3.782 víctimas mortales, según diversos recuentos.

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2022

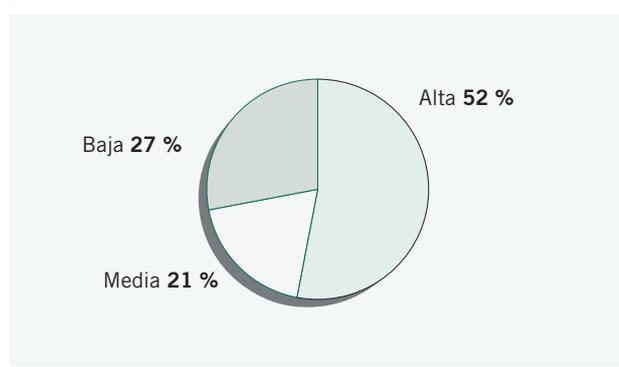


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones

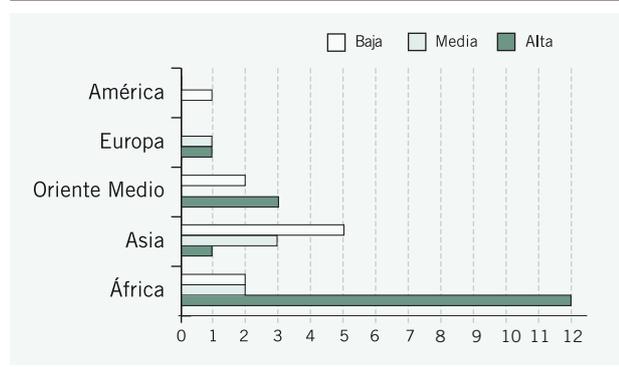


Gráfico 1.4. Proporción de conflictos armados graves en la última década



1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Siguiendo la tónica de años previos, y tal y como vienen denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, en 2022 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. Además, los impactos de los conflictos armados continuaron entrecruzándose con otras crisis, agravando la situación de seguridad humana y de vulneraciones de derechos en contextos de conflicto. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2022 y que analiza los hechos de 2021 -e inicios de 2022-, alertó de desafíos como el conflicto en Ucrania, causante de graves impactos en civiles en Ucrania –en víctimas, desplazamiento forzado, grave destrucción de infraestructura civil, entre otros efectos– e impactos globales, con interrupción de suministros globales y afectaciones sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en otros contextos de conflicto.¹² En su informe, el secretario general también señaló otros desafíos como la combinación entre pandemia de la COVID-19 y conflictos armados, así como también, en diversos países, intersecciones entre conflictos armados y violencia intercomunal, protestas de carácter violento, crimen organizado u otras formas de violencia y crecientes preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y abusos, que dificultaban las distinciones entre conflicto armado y otras formas de violencia. Otras amenazas a la protección de civiles señaladas en el informe incluían los impactos de la crisis climática en los conflictos, en forma de intensificación de inseguridad alimentaria y escalada de crisis humanitarias. El análisis del estado global de la protección de civiles en conflictos armados contenido en el informe pone de manifiesto que los conflictos armados han continuado caracterizándose por altísimos niveles de víctimas mortales civiles, además de numerosas personas heridas y seriamente afectadas por traumas psicológicos; torturas; desapariciones; violencia sexual; destrucción de viviendas, escuelas, mercados, hospitales y otras infraestructuras civiles esenciales como sistemas de agua potable y electricidad.

La evolución de los diversos conflictos armados en 2022 permite confirmar la persistencia de este patrón de abusos sistemáticos contra la población civil. Sobresalieron casos como la invasión de Rusia contra Ucrania, que causó miles de víctimas mortales civiles y en que fuerzas militares rusas llevaron a cabo vulneraciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, deportaciones forzadas -incluyendo de menores-, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, entre otros impactos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició en marzo de 2022 la recopilación de pruebas

12. Secretario general de la ONU, *Protection of civilians in armed conflicts*, S/2022/381, 10 de mayo de 2022.

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo la tendencia registrada en períodos precedentes, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 16 casos, que representan el 49% del total. • Se redujo ligeramente el porcentaje de casos de conflicto armado de alta intensidad en el continente, pasando de representar el 80% en 2021 (12 de los 15 casos de esa región en ese año) al 75% (12 de los 16 casos). Siguió siendo una cifra muy por encima del 44% que representaban en 2016 (siete de los 16 casos de entonces). • Solo dos casos asistieron a una reducción de las hostilidades, mientras que un 50% de los conflictos se mantuvieron en niveles similares y un 37,5% afrontaron una escalada de la violencia. Uno de esos dos casos de reducción de violencia fue el conflicto en Etiopía (Tigré), guerra que entre 2020 y 2021 fue escenario de graves vulneraciones de derechos humanos. • Todos los conflictos armados de África fueron internos internacionalizados, a excepción del que transcurre en la Región Sahel Occidental, que se considera de carácter internacional y del conflicto en Etiopía (Oromiya), de carácter interno. • En el trasfondo de los conflictos armados en África se identifican múltiples causas, entre las cuales destacan las disputas en torno a demandas identitarias, elemento presente en 10 de los 16 casos (63%). Sobresalió también la competencia por recursos, causa presente en nueve de los conflictos (56% del total de casos de la región).
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. • El inicio de negociaciones de paz con el ELN, así como acercamientos con otros grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro llevaron a una reducción de la violencia en el país. No obstante, se siguieron registrando enfrentamientos y otros actos de violencia, como asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, y se alertó de un deterioro de la situación humanitaria. • Si bien en América solo se contabilizó un conflicto armado, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Después de África, el continente concentró el mayor número de conflictos armados, albergando nueve casos, es decir 27% del total global. • En materia de intensidad, sobresalió el conflicto armado en Myanmar. En 2022 se intensificaron los enfrentamientos tanto entre el Ejército y varios grupos armados étnicos, como entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados surgidos tras el golpe de Estado militar de 2021, y se dobló el número de personas desplazadas internas. • En continuidad con el año anterior, los conflictos Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Myanmar evolucionaron hacia mayores niveles de violencia y hostilidades. El caso de Afganistán, que en 2021 fue escenario de una escalada de violencia, en 2022 se redujo la violencia armada, pero se asistió a la consolidación del poder talibán y de graves vulneraciones de derechos humanos, incluyendo de las mujeres. A excepción de América, Asia fue la región con mayor porcentaje regional de casos que asistieron a una reducción de la violencia (44% de los casos en la zona). • Asia continuó siendo la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno, a excepción del conflicto de Etiopía (Oromiya) en África. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región. • En términos de causas, en Asia se observaron porcentajes similares de presencia de causas relativas a disputas en torno al sistema, políticas del gobierno, demandas de autogobierno, o identidad, presentes alguna de ellas en el 56% de los casos.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó dos conflictos armados, que representaron un 6% de los casos a nivel mundial. • La invasión de Rusia a Ucrania desencadenó uno de los dos conflictos armados internacionales en el mundo en 2022 así como un escenario de violencia de alta intensidad, una grave crisis humanitaria y repercusiones globales en múltiples ámbitos, como alza global de precios de combustible y alimentos e inseguridad alimentaria. • Si bien en Europa solo se contabilizaron dos conflictos armados, la región asistió en 2022 a una mayor militarización y gasto militar, tendencia previa a la invasión rusa pero acentuada desde entonces.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la región se contabilizaron cinco conflictos armados, que representaron un 15% del total de casos a nivel mundial. En cifras totales la región se mantuvo en los mismos niveles que en 2021. • Oriente Medio fue la segunda zona del mundo, después de África, en la que se produjeron más conflictos armados de alta intensidad. Más de la mitad de los casos de la región –tres de cinco, equivalentes a 60%– fueron de intensidad elevada: Iraq, Siria y Yemen. En esos tres conflictos, los niveles de letalidad fueron significativamente más reducidos en 2022 que en años anteriores, pero fueron escenarios que continuaron afectados por graves impactos en seguridad humana. • La gran mayoría de conflictos en la región (un 80%) eran de naturaleza interna internacionalizada, con participación de actores externos, lo que incrementaba la complejidad de las disputas y las perspectivas de resolución, como en Siria y Yemen. • Los conflictos de la región fueron multicausales, con una presencia destacada de casos donde las motivaciones estaban vinculadas –junto a otros factores– a la búsqueda de un cambio de sistema (80%) o a demandas identitarias (80%). En tres de los casos (60%), las disputas en torno a políticas internas o internacionales eran una de las causas principales. En dos de los casos (40%) había motivaciones vinculadas al control de recursos y territorios.

para una investigación sobre alegaciones pasadas y presentes de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en Ucrania desde 2013.¹³ Por su parte,

el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2022 una comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario

13. En marzo de 2023 -fecha fuera del periodo de análisis de este capítulo-, la CPI emitió una orden internacional de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra por la deportación de menores.

en Ucrania. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron y documentaron graves vulneraciones de los derechos humanos por las fuerzas rusas, constitutivas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Muchos otros conflictos armados en 2022 fueron también escenario de graves ataques contra civiles. Entre otros casos, en Sahel Occidental se asistió a un incremento de los ataques contra civiles por parte de las fuerzas de seguridad, el Grupo Wagner y los dos principales grupos yihadistas y se registraron varias masacres. En el contexto de escalada en la región de Oromiya en Etiopía, tanto las Fuerzas Armadas apoyadas como las milicias Fano y el grupo armado OLA fueron acusados de ataques deliberados contra población civil, atrapada entre el fuego cruzado y objeto de ejecuciones extrajudiciales y en masa, detenciones arbitrarias y secuestros, entre otras formas de violencia en base a criterios étnicos o a opiniones políticas. Otros conflictos escenarios de masacres y matanzas de civiles fueron RDC (este), Colombia y Myanmar, entre otros.

El uso de armas explosivas tuvo un especial impacto en la población civil. Estudios recientes apuntan a que las víctimas civiles a causa del uso de este tipo de armamento en áreas pobladas representaron el 89% del total de víctimas de armas explosivas en 2020.¹⁴ Ejemplos de ello fueron los casos de Somalia y de RDC (este-ADF), donde los grupos armados incrementaron el uso de artefactos explosivos contra la población civil en entornos urbanos.

Como parte de los ataques contra población e infraestructural civil, durante 2022 continuaron las agresiones y amenazas contra personal médico, así como los ataques contra infraestructuras hospitalarias, prácticas que se consideran atentatorias contra el derecho internacional humanitario. Según datos de la coalición Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC), en 2022 se produjeron al menos 1.892 ataques en este ámbito en todo el mundo, que incluyeron 215 personas trabajadoras sanitarias fallecidas, 287 secuestradas y 628 instalaciones dañadas. Más de un tercio de los ataques al ámbito sanitario en 2022 se produjeron en Ucrania en el marco de la invasión rusa. A su vez, una investigación conjunta de diversas organizaciones identificó 707 ataques contra hospitales, trabajadores sanitarios y otras infraestructuras médicas en Ucrania entre el inicio de la invasión y finales de diciembre.¹⁵ La investigación señala una media de dos ataques diarios contra el ámbito sanitario en ese país y apunta a

ataques deliberados e indiscriminados de Rusia contra el sistema sanitario de Ucrania como parte de ataques más amplios contra la población e infraestructura civil.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o empeorando situaciones de crisis humanitarias, en un contexto agravado por otros condicionantes como la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, la crisis económica o la emergencia climática. Las necesidades humanitarias globales continuaron incrementándose, alcanzándose un umbral récord. Según el informe anual Panorama Global Humanitario 2023,¹⁶ de la agencia humanitaria de Naciones Unidas OCHA, una de cada 23 personas en el mundo necesita asistencia humanitaria y se preveía para 2023 una cifra récord de 339 millones de personas que necesitarán asistencia humanitaria, en contraste con los 274 millones de personas a inicios de 2022. Como parte del preocupante panorama humanitario, OCHA alertó de que se estaba desarrollando la mayor crisis alimentaria global de la historia moderna, causada por conflictos, shocks climáticos y la amenaza de recesión global. Según el informe, se asiste a una escalada de inseguridad global, con al menos 222 millones de personas en 53 países a finales de 2022 en situación de grave inseguridad alimentaria. OCHA advirtió de diferentes tendencias, incluyendo el impacto del

cambio climático en las crisis humanitarias. De los 15 países más vulnerables a la crisis climática, 12 eran escenario de respuestas humanitarias. Durante 2022 muchos escenarios de conflicto continuaron agravando situaciones de emergencia humanitaria. Uno de los contextos que sobresalió durante el año fue la región de Sahel Occidental, con impactos combinados de inestabilidad, violencia, desplazamientos forzados, pérdida de medios de subsistencia, inseguridad alimentaria, cambio climático y enfermedades. La OMS estimaba que 37,7 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2023 en esa región, y la considerada una de las crisis de más rápido crecimiento y la más olvidada. En Ucrania, se asistió a una crisis humanitaria de rápida escalada, con 3 millones de personas al inicio del año en situación de necesidad de asistencia humanitaria y protección y cerca de 17,7 millones de personas al finalizar el año. En Yemen, 17 millones de personas hacían frente a inseguridad alimentaria al finalizar el año y más del 80% de la población tenía problemas para satisfacer las necesidades básicas, incluyendo alimentación, agua potable y acceso a servicios de salud. En Siria, 12 millones de personas afrontaban inseguridad alimentaria a finales de 2022 y se estimaba que en 2023 el 70%

OCHA alertó del desarrollo de la mayor crisis alimentaria global de la historia moderna, causada por conflictos, shocks climáticos y la amenaza de recesión global, así como de una escalada de la inseguridad global

14. Dathan, Jennifer, *Explosive Violence Monitor 2020*, Action on Armed Violence, 2021.

15. De Vos, Christian et al., *Destruction and Devastation One Year of Russia's Assault on Ukraine's Health Care System*, eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Media Initiative for Human Rights, Physicians for Human Rights y Ukrainian Healthcare Center, febrero de 2023.

16. OCHA, *Global Humanitarian Overview 2023*, diciembre de 2022.

de la población del país necesitaría ayuda humanitaria y que el 90% de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza. En Pakistán, el impacto de las graves inundaciones provocadas por el cambio climático se sumó a las consecuencias de la violencia armada. En RDC, 26,4 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave en enero de 2023.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En lo que respecta a los efectos en los niños y las niñas, el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado a mediados de 2022 documentó casi 23.982 violaciones graves contra menores (de las cuales 22.645 correspondían a 2021 y otras 1.337 fueron cometidas previamente, pero solo se pudieron documentar en 2021).¹⁷ El informe alertó de que factores como el agravamiento de los conflictos armados, la proliferación de actores armados, el uso de minas, artefactos explosivos improvisados y armas explosivas en zonas pobladas, la intensificación de crisis humanitarias y vulneraciones del DIH y del derecho internacional de derechos humanos tuvieron impactos graves en la protección de menores. El informe, que cubre los hechos de 2021, señala en particular el impacto en menores de la violencia y conflictos de las regiones del Sahel central y cuenca del lago Chad, así como de los golpes de Estado y toma de poder por la fuerza en Afganistán, Burkina Faso, Malí, Myanmar y Sudán. Asimismo, afirma que los mayores niveles de violaciones graves tuvieron lugar en Afganistán, Israel y Palestina, Siria, RDC, Somalia y Yemen. Entre los indicadores preocupantes, señala el incremento de un 20% en el número de secuestros, el aumento del 20% de la violencia sexual contra menores y la subida de un 5% de ataques contra escuelas y hospitales. El 55% de las violaciones de derechos documentadas estuvieron perpetradas por grupos armados no estatales, un 25% por fuerzas estatales, mientras las restantes se debieron a fuego cruzado, artefactos explosivos improvisados, restos explosivos de guerra y minas terrestres o cometidas por autores no identificados. Los datos desagregados por género mostraban que la mayoría de menores afectados por violaciones graves de derechos eran varones (70%) y que estaban en descenso, mientras que se identificó un incremento en las violaciones contra niñas que implicaban fallecimiento o mutilación, secuestro y violencia sexual, con especial repercusión en la cuenca del lago Chad.

Los datos sobre los conflictos armados en 2022 del informe *Alerta 2023!* apuntan a una persistencia de estos abusos, con ejemplos en diversos contextos. En

Afganistán el régimen talibán fue responsable en 2022 de múltiples violaciones de derechos humanos de las niñas, como la prohibición del derecho a la educación. Durante el año la violencia armada en ese país continuó afectando a menores, incluyendo un atentado contra un centro educativo en un barrio de mayoría de población hazara en el que murieron 53 personas, la mayoría niñas y mujeres jóvenes estudiantes. En Camerún, el conflicto armado ha privado a unos 600.000 menores de la escolarización y durante 2022 actores armados secesionistas continuaron atacando escuelas, a estudiantes y a profesorado. Por otra parte, las políticas de Israel de expulsión de población de Palestina, demolición de viviendas y construcción de colonias siguieron impactando en menores palestinos, incluyendo en forma de desplazamiento forzado. En ese escenario, menores palestinos se vieron también afectados por prácticas de detención. Hasta mediados de diciembre de 2022, Israel había detenido a 452 menores palestinos. En Siria, aunque las cifras de letalidad en 2022 se redujeron de forma significativa, continuaron produciéndose víctimas mortales de menores, con 319 menores fallecidos en 2022 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, a lo que se añade una multiplicidad de vulneraciones de derechos humanos de niños y niñas en el país.

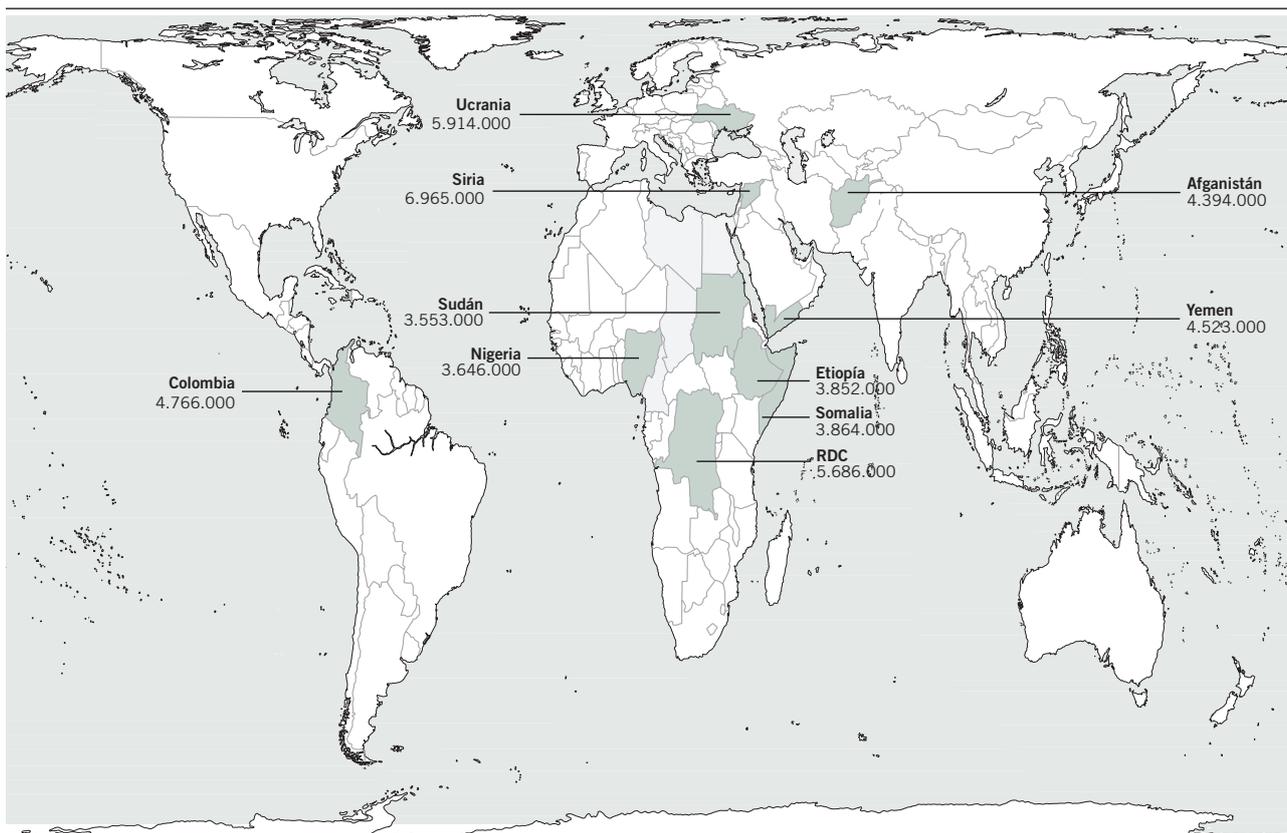
En numerosos conflictos armados se perpetró violencia sexual. El informe anual de 2022 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos identificó 49 actores armados sobre los que existían sospechas fundadas de haber cometido o de ser responsables de violaciones u otras formas de violencia sexual en contextos de conflicto armados en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.¹⁸ La mayoría de actores señalados por Naciones Unidas en su anexo eran actores armados no estatales (37) y otros 12 eran actores armados gubernamentales, en un total de diez contextos (RCA, RDC, Iraq, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Nigeria). Según Naciones Unidas, el 70% de los actores en conflicto señalados eran considerados perpetradores persistentes, debido a su inclusión en el anexo de Naciones Unidas durante cinco o más años. Más allá del anexo, el informe anual analizaba también la evolución de la problemática del uso de violencia sexual en los escenarios de conflicto de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen; abordaba cuestiones relativas a crímenes de violencia sexual en los contextos posbélicos de Balcanes occidentales, Nepal y Sri Lanka; así como abordaba otros contextos de preocupación en relación a la violencia sexual (Etiopía y Nigeria). En conjunto, el informe señaló cómo la intersección de crisis humanitarias,

RDC, la Región de Sahel Occidental, Somalia, Pakistán, Ucrania, Yemen y Siria, entre muchos otros, fueron escenario de graves crisis humanitarias en 2022

17. Secretario general de la ONU, *Los niños y los conflictos armados*, A/76/871-S/2022/493, 23 de junio de 2022.

18. Secretario general de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos*, S/2022/272, 29 de marzo de 2022.

Mapa 1.2. Los diez países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflicto y violencia en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre, *Global Report on Internal Displacement 2023. Internal displacement and food security*, IDMC, 2023.

de seguridad y políticas intensificaba las causas de fondo de la violencia sexual vinculada a los conflictos armados, incluyendo la militarización, la proliferación de armas, la impunidad, el colapso institucional, la desigualdad de género estructural y las normas sociales dañinas. En cuanto al transcurso de los conflictos armados en 2022, se continuó cometiendo violencia sexual en diversos conflictos. Sobresalió el caso de Ucrania, donde las fuerzas rusas llevaron a cabo violencia sexual como arma de guerra en áreas bajo ocupación militar en el marco de la invasión. También en el conflicto en la región de Tigré la violencia sexual tuvo un impacto especialmente grave. En Camerún, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que tanto las fuerzas de seguridad como los combatientes secesionistas habían cometido graves abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, violaciones, secuestros y torturas.

Entre las repercusiones de los conflictos armados también cabe mencionar el desplazamiento forzado. Según los datos de ACNUR, este fenómeno continuó intensificándose y batiendo cifras récord. El informe del primer semestre de 2022 de ACNUR cifraba en

Durante el año 2022, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas

32,5 millones de personas la población en situación de refugio y en 53,1 millones desplazadas internas (datos de IDMC referidos a finales de 2021). El 76% de la población refugiada y población en necesidad de protección internacional procedía de seis países: Siria (6,8 millones de personas), Venezuela (5,6), Ucrania (5,4), Afganistán (2,8), Sudán del Sur (2,4) y Myanmar (1,2); y el 69% vivía en países vecinos a sus países de origen, según datos de ACNUR. En ese primer semestre de 2022 se produjeron 1,1 millones de nuevas solicitudes de asilo. En todo caso, el cómputo total de 2022 arrojará una cifra mayor de desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Así, durante el año numerosos conflictos fueron escenario de graves situaciones de desplazamiento forzado. Entre otras, en relación a la crisis de Ucrania, a finales de 2022 se estimaba en 5,9 los millones de personas desplazadas internas, 7,9 millones las personas registradas como refugiadas en Europa y en 4,9 millones las personas refugiadas de Ucrania registradas para recibir protección temporal en Europa o en otros mecanismos de protección nacional similares. Ucrania se situaría así como principal país emisor de población refugiada a nivel global, según los datos de ACNUR,

desplazando a Siria que ha ubicado esta posición en los últimos años. En la región de Sahel Occidental, 2,9 millones de personas estaban desplazadas por la violencia, incluyendo desplazamiento interno y externo. En Etiopía a comienzos de 2023 se cifraban en 2,7 millones de personas las desplazadas internas, cifra que no incluía la población desplazada de la región de Tigré ni tampoco zonas de la región de Afar, debido a los obstáculos de acceso. En el noreste de Nigeria, el país más afectado por las acciones de las facciones de Boko Haram, se estimaba en 2,2 millones las personas desplazadas internas por la violencia, cifra que en conjunto del país ascendía a 3,2 millones. En Somalia, la población desplazada interna como consecuencia del conflicto, la inseguridad y los efectos del cambio climático alcanzaba los tres millones de personas. En RDC había 5,76 millones de personas desplazadas internas en 2022, cifra ligeramente superior a los 5,6 de 2021 y que incluía a unos 3 millones de menores. En ese país, entre marzo y diciembre se desplazaron más de 510.000 personas dentro del país y otras 7.000 buscaron refugio en Uganda. En Sudán a mediados de 2022 se estimaba en más de 3 millones las personas desplazadas internas y en 844.260 las refugiadas fuera del país a causa de la violencia –a lo que habría que añadir el millón de personas refugiadas que el país acoge provenientes de las crisis en Sudán del Sur, RDC o Etiopía, entre otros. En el continente asiático sobresalieron, entre otros casos, Myanmar, donde a finales de 2022 había 1,5 millones de personas desplazadas internas, más del doble que en 2021. En Pakistán, al escenario de violencia y crisis política y económica se sumaron graves inundaciones causadas por el cambio climático que afectaron a millones de personas y que llevaron al desplazamiento a casi ocho millones de personas.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP)—anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

El año estuvo caracterizado por un aumento de los episodios violentos contra la población civil en la provincia de Cabo Delgado, aunque en términos comparativos con el año anterior se produjo un ligero descenso de la mortalidad provocada por la violencia armada. Según datos de ACLED, en 2022 se registraron

905 muertes en el norte del país, concentradas en la provincia de Cabo Delgado, lo que supone un ligero descenso frente a las muertes producidas por la violencia en 2021 (1.067).¹⁹ Sin embargo, el Africa Center for Strategic Studies (ACSS) destacó que el número de incidentes violentos vinculados a grupos yihadistas en la provincia aumentó en un 29% en 2022 (437), volviendo a los niveles de 2020 antes de la intervención de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) y las fuerzas de Rwanda. Estos episodios se distinguieron por los altos niveles de violencia contra la población civil, cuyas muertes aumentaron en un 57% en relación con el año anterior. La violencia contra civiles supuso el 66% de todos los eventos violentos en el norte de Mozambique, que según ACSS representó el mayor porcentaje registrado en el continente.²⁰ Desde el inicio de la violencia en la región a finales de 2017, se estima que el conflicto se ha cobrado la vida de unas 4.400 personas. Cabo Delgado sigue siendo uno de los cinco epicentros de la violencia perpetrada por grupos con agendas yihadistas en África, que también incluyen el Sahel, Somalia, la cuenca del Lago Chad y el norte de África. Como resultado del aumento y expansión de la violencia contra la población civil, a finales de 2022 más de un millón de personas se encontraban desplazadas internamente en las cuatro provincias norteñas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula y Zambézia.

Los escenarios más significativos registrados durante el año estuvieron caracterizados por las acciones armadas de grupos afiliados al Estado Islámico dirigidas contra la población civil y las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales desplegadas en el país desde mediados de 2021; las acciones contrainsurgentes llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas mozambiqueñas (FADM), las fuerzas desplegadas ruandesas y Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) en Cabo Delgado de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC); así como por las operaciones contrainsurgentes de las milicias locales de autodefensa, conocidas localmente como “Naparama”. En relación con las primeras, durante todo el año se mantuvieron las acciones armadas de grupos vinculados con el Estado Islámico en gran parte de la provincia de Cabo Delgado (distritos de Meluco, Maconia, Nangade, Namuno), que pusieron en entredicho la narrativa de “normalización” de la situación de seguridad del Gobierno. Si bien estas acciones habían sido reivindicadas por el autodenominado Estado Islámico en la Provincia de África Central (ISCAP) –una rama de ISIS que incluye

también a RDCongo y Uganda– en mayo ISIS reivindicó los ataques refiriéndose a Mozambique como una rama separada “Wilayah de Mozambique” (Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP), lo cual generó dudas sobre si se ha otorgado un estatus independiente, tal y como sucedió en marzo con su grupo afiliado del Sahel.

El Gobierno mozambiqueño mantuvo durante el año una narrativa de control de la situación en Cabo Delgado, pero muchos analistas locales e internacionales sostuvieron que se está lejos del final del conflicto

De manera paralela, durante el año las fuerzas ruandesas y de la SAMIM mantuvieron y ampliaron sus operaciones contra la insurgencia. El 12 de abril los jefes de Estado de la SADC, los representantes de los países que apoyan a SAMIM y el presidente mozambique Filipe Nyusi, acordaron extender el mandato de SAMIM y aprobaron la transición de la misión de “despliegue rápido” a una fuerza “multidimensional” que asume mayores responsabilidades de mantenimiento de la paz. Sudáfrica también extendió su propio mandato de tropas para la intervención de la SADC por 12 meses, mientras que Rwanda amplió sus tropas en el país, así como su área de operación en la provincia de Cabo Delgado. En agosto se acordó una nueva ampliación del mandato de SAMIM por 12 meses. A finales de año se contabilizaban en Cabo Delgado alrededor de 4.500 militares y policías extranjeros, de los cuales alrededor de 2.000 han sido desplegados por SAMIM –más de la mitad de ellos de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica– y el resto procede de Rwanda.

Finalmente, el año también se caracterizó por el surgimiento de un nuevo actor en el conflicto, las milicias locales conocidas como “Naparama”. El resurgimiento de estas milicias, que habían sido parte del conflicto armado en el país en la década de los ochenta, se produjo después de que la secretaría del FRELIMO en Cabo Delgado las animase a tomar un papel activo en el conflicto, instalando puestos de control en las principales vías de acceso y realizando operativos de patrullaje. Para posibilitar su operacionalización, el Gobierno mozambiqueño propuso su legalización como una fuerza temporal y de transición para ser utilizada en el contexto del conflicto de Cabo Delgado, aprobando en el Parlamento la modificación del artículo 7 de la Ley de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de Mozambique con el fin de incorporar las fuerzas locales a la estructura de las FADM. La aprobación de la ley no contó con el apoyo de los partidos de oposición RENAMO y Movimiento Democrático de Mozambique (MDM). La mayoría de los miembros de estas milicias están afiliados a Asociación de Combatientes de la Lucha de Liberación Nacional (ACLIN), una organización vinculada al FRELIMO que reúne a los veteranos de la guerra de liberación de Mozambique.

19. ACLED, [Dashboard](#). [Consultado el 6 de enero de 2023].

20. Africa Center for Strategic Studies, “Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent”, 6 de febrero de 2023.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

El conflicto armado que enfrenta a los cuerpos de seguridad del Estado y a los movimientos político-

militares secesionistas desde 2017 en las dos provincias anglófonas del suroeste del país continuó activo y, según el International Crisis Group, ya ha causado la muerte de unas 6.000 personas. Además, ha provocado el desplazamiento forzado de más de 710.000 personas, cifra que incluye más de 87.000 personas refugiadas en Nigeria, según datos de ACNUR de diciembre de 2022. Según la ONU, 2,2 millones de los cuatro millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitaban asistencia humanitaria durante 2022 mientras que unos 600.000 menores se han visto privados de la escolarización a causa del conflicto. Los grupos armados cometieron en 2022 algunos ataques en las provincias aledañas de Litoral, Centro y Oeste, con el objetivo de ampliar el conflicto más allá de las dos regiones secesionistas. Del balance del año, cabe destacar especialmente el incremento de la tensión y la violencia en vísperas del 20 de mayo –Día Nacional, considerado un aniversario clave que marca el inicio del conflicto cuando el referéndum constitucional derogó los estados federales de Camerún Occidental (anglófono) y Camerún Oriental (francófono) en 1972–, así como en vísperas del 1 de octubre – aniversario de la autoproclamada República Federal de Ambazonia. En esta última fecha los movimientos separatistas anglófonos realizaron marchas armadas en las provincias de Noroeste y Suroeste, y las fuerzas gubernamentales el 1 al 2 de octubre llevaron a cabo acciones punitivas tras las manifestaciones a favor de la independencia en diversas localidades, incendiando casas y arrestando a decenas de civiles.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que tanto las fuerzas de seguridad como los combatientes secesionistas habían cometido graves abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, violaciones, secuestros y torturas.²¹ Los movimientos secesionistas continuaron atacando escuelas, así como a estudiantes y profesorado, destruyendo edificios y privando a cientos de miles de menores de su derecho a la educación. En febrero, a raíz de un ataque al dormitorio de una escuela secundaria de niñas en Okoyong, Mamfe (provincia de Suroeste), diplomáticos internacionales condenaron conjuntamente el ataque y parte del liderazgo político-militar secesionista, el Ambazonian Governing Council (AGovC), pidió el mismo día que cesaran los ataques a las escuelas. Meses después el hospital del distrito de Mamfe fue destruido como consecuencia de un ataque de las milicias secesionistas. Una de las pocas organizaciones humanitarias todavía presentes en el territorio, Médicos Sin Fronteras, confirmó el 29 de marzo que abandonaba la región Suroeste, citando acoso del Gobierno. Fuentes locales advirtieron, además, que la dinámica de la violencia estaba cambiando en los últimos tiempos con el crecimiento de una lucrativa economía de guerra,

21. Human Rights Watch, "Cameroon, Events of 2022", *World Report 2023*, HRW, 13 de enero de 2023.

que generalmente involucra secuestros y otras formas de extorsión de la población civil. El botín político y económico de la guerra ha reducido el incentivo para encontrar un arreglo negociado, según destacaban análisis.²² En paralelo, aumentaron las deserciones entre las fuerzas de seguridad; en particular, la policía anunció el 5 y el 16 de febrero que un total de doce funcionarios no se presentaron en diferentes partes de la provincia de Noroeste. Como en años anteriores, diversos líderes insurgentes y comandantes de milicias fueron ejecutados durante el año, como el general Ebube en febrero en la aldea de Alabukam (Noroeste), o el “Mariscal de campo” Lekeaka Olivier Fongunueh en julio, que fue exhibido por los cuerpos de seguridad en la ciudad de Kumba. Cabe destacar también la muerte en julio del comandante del batallón de intervención rápida de las fuerzas especiales, mayor Eyenga Essama, durante enfrentamientos en Kumba. Essama es el oficial militar de mayor rango que ha muerto en batalla desde el comienzo del conflicto en 2017. El ministro de Defensa, Joseph Beti Assomo, el 19 de julio condenó los abusos de los militares contra los civiles anglófonos y ordenó a los soldados que cesaran las violaciones de los derechos humanos.

En el ámbito político, cabe destacar que continuaron las especulaciones en torno a la salud y a la sucesión del octogenario Paul Biya, que en mayo realizó un viaje privado de cinco días a Suiza. En medio del 89º aniversario de Biya el 13 de febrero, surgieron especulaciones sobre los planes de sucesión, incluido el creciente poder de la primera dama Chantal Biya. En paralelo, se realizaron celebraciones y ceremonias oficiales en noviembre en conmemoración de los 40 años de Biya en el poder, actos en los que se puso de manifiesto los planes para que su hijo Franck Biya le sucediera. Las autoridades tradicionales, los funcionarios del partido gobernante y los residentes de la región norte, un bastión del partido gobernante, recibieron con honores el 6 de noviembre a su hijo Franck.

En noviembre el grupo de trabajo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias pidió la liberación “inmediata e incondicional” del líder separatista Sisiku Julius Ayuk Tabe y otros nueve prisioneros, afirmando que su arresto en Nigeria en 2018 fue arbitrario. Como muestra de reconocimiento de la grave situación que padecen las regiones anglófonas, y después de años de campañas de activistas y decenas de grupos de la sociedad civil, el 15 de abril la administración estadounidense otorgó el Estatus de Protección Temporal a todos los inmigrantes cameruneses, permitiéndoles una estadía de 18 meses hasta que se determine el estatus individual.

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendida las dinámicas de la misma a la región central del país (Mopti).

Durante el año Malí padeció un nuevo deterioro de la situación de seguridad en medio del incremento de las tensiones entre la Junta Militar maliense y el complejo militar regional-internacional de seguridad desplegado

22. R. Maxwell Bonne, “Why the spoils of war may outweigh incentives for peace in Cameroon”, *The New Humanitarian*, 19 de julio de 2022.

en el país y conformado por misiones encabezadas por Francia, ONU, UE o el Sahel G-5. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el 2022 se registraron 1.340 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) en todo el país, concentrados en las regiones norte y centro, que dejaron un balance de 4.842 personas fallecidas.²³ Estos datos representan un aumento significativo de la violencia con relación al año anterior (2021) cuando se registraron 1.887 muertes, situando el año como uno de los más intensos desde el origen del conflicto en 2012. El aumento de las víctimas mortales se debió a dos factores. Por un lado, aumentaron los ataques mortales contra civiles perpetrados por las fuerzas de seguridad malienses, junto con miembros del Grupo Wagner, como parte de una campaña antiterrorista sin precedentes. Por otro, también hubo un aumento de casi cuatro veces de los ataques contra civiles por parte de los dos principales grupos yihadistas activos en la región: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS o ISWAP). Estos hechos generaron que Malí pasara del séptimo al segundo lugar en la lista de países con los niveles más altos de ataques contra civiles, solo detrás de la República Democrática del Congo.²⁴

Malí se convirtió en el segundo país del mundo con los niveles más altos de ataques dirigidos contra población civil

El aumento de la inestabilidad y la inseguridad siguió forzando el desplazamiento de miles de personas e incrementando la crisis humanitaria. Según datos del secretario general de la ONU sobre la situación humanitaria en el país, el número de personas desplazadas internas se situó en octubre en las 442.620; 1.950 escuelas permanecieron cerradas, afectando a más de 587.000 niños y niñas, particularmente en la región de Mopti; 5,3 millones de personas necesitaban atención humanitaria y solo se había logrado el 34% de la financiación necesaria; y más de 2 millones de menores de 5 años padecían malnutrición aguda. En relación a la población refugiada en los países vecinos, ACNUR cifró a mediados de 2022 en 200.471 el número de personas que habían buscado refugio fuera del país, principalmente en Burkina Faso y Mauritania.

Con relación al desarrollo de **los escenarios de conflictividad armada, la situación siguió siendo compleja especialmente en el norte y centro del país, así como en la zona de la triple frontera que comparte con Burkina Faso y Níger.**²⁵ Entre los eventos más destacados del año, en el norte de Malí, en las regiones de Ménaka y Gao, en los primeros meses de 2022 organizaciones yihadistas provocaron más asesinatos de civiles que en cualquier año anterior del conflicto. En respuesta, el Ejército maliense, juntamente con organizaciones signatarias del acuerdo

de paz de 2015, lanzaron entre el 4 y 5 de junio una ofensiva en Ménaka para tratar de recuperar la ciudad estratégica de Andéramboukane en manos del ISGS. Los enfrentamientos dejaron al menos 115 personas asesinadas, entre ellos 90 presuntos yihadistas. El 12 de junio las fuerzas francesas de Barkhane arrestaron al líder del ISGS, Oumeya Ould Albakaye, en el distrito de Ansongo de la región de Gao. El 7 de agosto un ataque del ISGS en la ciudad de Tessit (región de Gao) dejó 42 soldados malienses muertos, en lo que fue el ataque más mortífero contra militares desde 2019. En julio, grupos afiliados a JNIM extendieron sus operaciones lanzando diversos ataques cerca de la capital Bamako. En la región central de Malí (Mopti y Ségou) los grupos yihadistas siguieron aprovechando los conflictos intercomunitarios para ampliar su influencia y lograr nuevos reclutamientos. El 4 de marzo se registró el ataque más mortífero contra militares en meses, con al menos 27 soldados asesinados en una base militar en la ciudad de Mondoro, cerca de la frontera con Burkina Faso. Durante el año también se registraron diversas masacres contra la población civil, entre las cuales destacaron la registrada a finales de marzo en la ciudad de Morra (Mopti), donde el Ejército afirmó haber matado a más de 200 yihadistas en una operación conjunta con fuerzas rusas –hecho que fue desmentido por organizaciones de derechos humanos, que acusaron al Gobierno de haber ejecutado sumariamente a 300 civiles–; o la producida el 18 de junio en Diallassagou (Mopti), donde 132 personas fueron asesinadas en un ataque atribuido a Katiba Macina.

La crisis de seguridad volvió a coincidir con el **deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus aliados tradicionales de seguridad**, en parte motivado por la decisión de asociarse con la empresa rusa de seguridad privada Grupo Wagner.²⁶ Estas desavenencias impactaron profundamente en el complejo de seguridad internacional, traducándose, por ejemplo, en la finalización de la misión antiterrorista Barkhane en el país; el anuncio de la retirada de diferentes países europeos de sus tropas en la operación europea Takouba y de la suspensión por parte de la UE de las misiones EUCAP y EUTM en Malí tras la masacre de Mopti atribuida al Ejército y fuerzas rusas en abril; el bloqueo por parte de las autoridades malienses a las operaciones de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y la retira de tropas de diferentes países de la misma (Costa de Marfil, Alemania o Reino Unido); o la retirada de Malí de todos los órganos e instancias del G5 Sahel, incluida la fuerza militar conjunta. En respuesta a estos desafíos, y particularmente a los

23. ACLED, *Dashboard*. [Consultado el 6 de febrero de 2023].

24. ACLED, "Year in Review. Global Disorder in 2022. Escalating Violence and the Worsening Civilian Burden", ACLED, enero de 2023.

25. Véase resumen de Sahel Occidental en este capítulo.

26. Véase resumen de Malí en el capítulo 2 (Tensiones)

que atañen al mandato de la MINUSMA, el secretario general de la ONU presentó al Consejo de Seguridad -que el 29 de junio había prorrogado su mandato un año más (resolución 2640)- diversas opciones para su reconfiguración: 1) aumentar el personal uniformado -actualmente fijado en 13.289 militares y 1.920 policías- con entre 3.680 o 2.000 efectivos adicionales; 2) consolidar la presencia de la misión para optimizar el uso de sus recursos en la implementación más efectiva de las prioridades estratégicas de MINUSMA, centrándose principalmente en apoyar la implementación del acuerdo de paz concentrando sus fuerzas en el norte de Malí, reduciendo el personal en el centro; 3) retirar al personal uniformado y convertir a la MINUSMA en una misión política especial con sede en Bamako.²⁷

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo -cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”- se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la cuenca del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto

de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province (ISWAP), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

Durante el año continuaron las actividades de las diferentes facciones de Boko Haram (BH) en la región de la cuenca del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria, la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad, a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos desplazamientos de población y violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados implicados, tal y como señalaron diferentes organismos de defensa de los derechos humanos. **Además, se constataron diferentes enfrentamientos y acciones de represalia entre actores armados insurgentes.** En paralelo, cabe destacar, en el caso de Nigeria, **la ampliación del radio de acción de los grupos insurgentes más allá de los estados del noreste de Nigeria, hacia otros estados del centro-norte y noroeste del país.** En el noreste de Nigeria, el país más afectado por las actividades de las facciones de BH, se estima que había 2,2 millones de personas desplazadas por la violencia, y 8,3 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria a finales de 2022, según OCHA. En el conjunto del país, el IDMC elevaba la cifra de desplazamiento interno a finales de 2021 a 3,2 millones de personas.²⁸

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)²⁹ señaló que durante el año 2022 se estabilizó la violencia por parte de los grupos armados islamistas después de una marcada disminución del 32% entre 2020 y 2021. De acuerdo con el centro de investigación ACLED, en 2022 se registraron 3.782 víctimas mortales en la región de la cuenca del Lago Chad (los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa; la región de Extrême Nord en Camerún; Diffa en Níger; y la provincia de Lac en Chad), cifra ligeramente inferior a las víctimas del año 2021 (4.163). Durante 2022 se produjeron 1.002 eventos violentos, cifra muy similar a los 982 del año 2021. ACSS señaló que la región de la cuenca del lago Chad sigue siendo la tercera más mortífera del continente, y comprende el 20% de todas las muertes vinculadas a militantes islamistas. Cabe destacar, además, que la región experimentó el resurgimiento de JAS³⁰ en 2022.

27. Secretario general de la ONU, *La situación en Malí*, S/2023/21, 6 de enero de 2023.

28. IDMC, *Figures Analysis 2021- Nigeria*, 19 de mayo de 2022.

29. Africa Center for Strategic Studies, “Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent”, 6 de febrero de 2023.

30. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

Desde 2017, JAS había estado disminuyendo en su amenaza relativa frente a ISWAP, que se intensificó tras la muerte del histórico líder Abubakar Shekau en 2021. Sin embargo, durante el año 2022, BH estuvo relacionado con un aumento del 57% en eventos violentos y un aumento del 70% en muertes. Si bien ISWAP continúa asociándose con más violencia en la región, los niveles ahora son comparables. Estos cambios coinciden con una expansión geográfica de los ataques de la insurgencia fuera de los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en el noreste de Nigeria.³¹ Según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST), el número de víctimas mortales en los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa aumentó ligeramente respecto a años anteriores (2.078 en 2022, frente a 1.810 en 2021, 2.603 en 2020, 2.607 en 2019, 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017).³²

El año 2022 hubo ataques vinculados a ISWAP en los estados de Kano, Kogi, Níger y Taraba, en el centro-norte del país. También fue responsable del bombardeo de una iglesia en el estado de Ondo (región suroeste), ataques contra un cuartel militar y una prisión en las afueras de Abuja, y un intento de ataque contra un cuartel militar cerca de la frontera de Benin en el estado de Níger en el oeste. Asimismo, se vinculó a JAS e ISWAP con hechos violentos en diversos estados del noroeste de Nigeria, como Kaduna, Katsina y Zamfara, entre otros. En paralelo, en octubre diversos países occidentales, inicialmente EEUU y Reino Unido, alertaron de posibles ataques de grupos armados de corte yihadista en la capital, Abuja, lo que provocó una escalada de la tensión y un despliegue sin precedentes de cuerpos de seguridad que derivó en la detención de decenas de sospechosos en lo que fue descrito como la más importante operación de contrainteligencia desarrollada en Abuja. El presidente Buhari intentó rebajar el clima de pánico desatado, aunque fuentes locales alertaron de la salida del país de “oleadas” de extranjeros. Medios locales citando a fuentes militares alertaron de posibles células durmientes de grupos armados instaladas en Abuja y alrededores ocultas entre la población civil. La violencia de JAS e ISWAP también se vinculó con escaladas relativas de violencia en Chad y el sureste de Níger. En paralelo, las fuerzas de seguridad fueron responsables de la muerte de diversos comandantes de JAS y de ISWAP, entre ellos de Abubakar Sarki, comandante de JAS, en mayo, y de Alhaji Modu, comandante de ISWAP, en agosto.

Los grupos armados de corte yihadista ampliaron su radio de acción geográfica más allá de los estados del noreste de Nigeria y de la región de la cuenca del Lago Chad hacia otros estados del centro-norte y del noroeste de Nigeria

Además, cabe remarcar la escalada de enfrentamientos entre los grupos armados de corte yihadista durante el año, principalmente entre ISWAP y JAS, especialmente en diciembre, destacando la muerte de un comandante de JAS, Aboubakar Munzir a manos de ISWAP en diciembre, así como de otros 200 combatientes, en enfrentamientos entre ambas facciones en ese mismo mes. Fuentes señalaron que tras la muerte en 2021 del líder de JAS, Abubakar Shekau, y el debilitamiento de JAS,³³ durante 2022 el grupo se reorganizó y consiguió amenazar la preeminencia de ISWAP en la región. Además, se señaló que JAS estaría actuando bajo el liderazgo de Ibrahim Bakura Doron (alias Abu Umayah), el histórico líder de la facción Bakura, grupo que actuaría en alianza con JAS.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la

31. Por la complejidad para diferenciar los actos de violencia cometidos por JAS, ISWA y otras facciones de grupos armados de agenda yihadista respecto a otros tipos de violencia, no se han incluido en los recuentos de víctimas mortales los cometidos en otros estados del país, por lo que las cifras reales serían superiores a las anteriormente citadas. Estos datos sirven para identificar tendencias respecto al grado creciente de expansión geográfica de los grupos armados con agenda yihadista.

32. Nigeria Security Tracker, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

33. Véase el resumen de región Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2022.

región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011³⁴. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

Un año más la situación de inseguridad en la región de la triple frontera (Malí, Burkina Faso y Níger) continuó deteriorándose debido a la persistencia de los episodios de violencia, las crisis de gobernanza en la región y las tensiones en el complejo militar regional-internacional de seguridad. Durante el año, según datos facilitados por ACLED, se registraron 3.357 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que causaron la muerte a 9.702 personas en la región (casi el doble de las muertes registradas en 2021, 5.279). Por país, en Burkina Faso se registraron 1.640 episodios de violencia que dejaron un balance de 4.214 muertes frente a las 2.290 víctimas mortales registradas en 2021; en Malí se produjeron 1.340 eventos violentos concentrados en las regiones norte centro y sur del país que costaron la vida a 4.842, casi el tripe que las registradas en 2021, cuando se contabilizaron 1.887 muertes; mientras que en Níger, en la zona suroeste del país, en las regiones de Tillaberi –principal zona afectada por la violencia– Dosso y Tahoua, se habrían registrado 289 eventos violentos, ocasionando 649 muertes, representando en este caso un descenso de la letalidad frente a las 1.102 víctimas mortales de 2021.³⁵

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)³⁶ señaló que la región del Sahel occidental experimentó la mayor escalada de eventos violentos vinculados a grupos yihadistas (2.737 eventos violentos) que cualquier otra región de África, con un aumento del 36% con relación a 2021. En total, la región acumuló el 40% de todos los episodios violentos reportados en África en 2022, concentrándose el 90% de ellos en Burkina Faso

y Malí. Detrás de este incremento de la violencia se encuentran principalmente los grupos vinculados a la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), mientras que el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS), siguiendo la tendencia de 2021, siguió teniendo un impacto menor. Del total de muertes registradas, 7.899 se asociaron a este tipo de grupos, principalmente al JNIM, responsable del 67% de las muertes. Ello representa un 63% más de letalidad provocada por estos grupos que el año anterior. Una tendencia preocupante es el aumento de la violencia contra la población civil, que durante el año generó un 49% más de muertes que las registradas en 2021. El 60% de todas las muertes dirigidas contra población no combatiente relacionadas con el extremismo violento en África, que incluye, además, los escenarios de Lago Chad, Somalia, Mozambique norte y el norte de África, se produjeron en la zona de la triple frontera. En este sentido, el ACSS subrayó que la presencia del Grupo Wagner intensificó más la violencia contra los civiles, estando vinculado con 726 muertes de civiles reportadas. Asimismo, si bien los episodios de violencia perpetrados por estos actores irregulares se concentraron en Burkina Faso y Malí, el año también registró un aumento en los Estados litorales: Benín registró 37 eventos (frente a los 5 de 2021), mientras que en Togo se pasó de 1 evento en 2021 a 17 en 2022. En el oeste de Níger se registró un aumento del 43% de este tipo de eventos (214) pero, sin embargo, ocasionaron la mitad de las muertes que el año anterior (539).

Como consecuencia del aumento de la violencia **se mantuvo la tendencia del desplazamiento forzado de personas, registrando más de 2,9 millones de personas desplazadas de sus hogares. Burkina Faso siguió concentrando la mayor parte del desplazamiento**, con más de 1,8 millones de personas desplazadas. La situación humanitaria en toda la región siguió siendo muy preocupante debido a los impactos combinados de la inestabilidad, la violencia, los desplazamientos forzados, la pérdida de medios de subsistencia, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud denunció que la crisis del Sahel es una de las crisis de más rápido crecimiento y, sin embargo, la más olvidada del mundo. Según sus estimaciones, en 2023, más de 37,7 millones de personas en Burkina Faso, Malí, Níger, el extremo norte de Camerún, Chad y el noreste de Nigeria necesitarán asistencia humanitaria. En Burkina Faso un total de 2,8 millones de personas necesitarán atención médica urgente; en Malí el nivel de necesidad se encuentra en su punto más alto desde que comenzó la crisis del conflicto en 2012, con 7,5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria (frente a los 3,8 millones de 2017); y en Níger la combinación de crisis en 2022 llevó al país a experimentar cuatro

34. Véase resumen de Malí en este capítulo.

35. ACLED, *Dashboard* [Consultado el 06/01/2023].

36. Africa Center for Strategic Studies, "Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent", 6 de febrero de 2023.

crisis de salud relacionadas con epidemias (meningitis, sarampión, poliomielitis y cólera).³⁷

Este periodo de incremento de la inseguridad coincidió con la llegada al poder mediante **golpes de Estado** de sendas juntas militares en Malí (agosto de 2020) y Burkina Faso (enero y octubre de 2022), justificadas en ambos casos con el fin de abordar la amenaza de seguridad en ambos países.³⁸ Sin embargo, en lugar de disminuir, la tendencia de la violencia se ha acelerado en ambos Estados. Por ejemplo, en Burkina Faso, en los cinco meses desde que el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba asumió el poder (enero 2022) se registró un aumento del 23% de los ataques perpetrados por grupos armados en comparación con los cinco meses anteriores al golpe. En respuesta al aumento de la violencia, la asamblea de transición burkinesa otorgó el 6 de junio poderes de intervención rápida a la Junta militar, decretando esta la creación de dos zonas militares en las regiones del este y el Sahel -las más afectadas- obligando a la población civil a desalojar sus hogares para permitir las acciones de las fuerzas de seguridad.

La presencia de las juntas castrenses, así como el despliegue de fuerzas rusas vinculadas a la compañía privada de seguridad Wagner Group, volvió a marcar el deterioro de las relaciones en el **complejo de seguridad internacional en la región**.³⁹ A mediados de agosto Francia anunció la retirada definitiva de las últimas tropas francesas en Malí, poniendo fin a la operación Barkhane en el país tras nueve años de misión. Anteriormente, el 1 de julio París ya había anunciado el final de su participación en la fuerza europea Takouba Task Force, de la cual otros países europeos también anunciaron retirada de sus fuerzas. Las tropas francesas seguirán en la región con un contingente reducido a la mitad (2.500 soldados), pero operando desde Níger, gracias a que el Parlamento nigerino aprobó en abril, no sin movilizaciones populares en contra, el proyecto de ley que autoriza el despliegue de fuerzas francesas para ayudar a combatir a los grupos armados en el país. Durante el año también se produjeron continuas tensiones y desencuentros entre la Junta militar maliense y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Malí (MINUSMA). Entre los episodios más destacados resaltaron el bloqueo por parte de las autoridades malienses a las operaciones de la MINUSMA, la retira de tropas de diferentes países de esta (Costa de Marfil, Alemania o Reino Unido) o la crisis desatada entre Malí y Costa de Marfil debido a la detención de 49 soldados costamarfileños de la misión bajo acusación de ser mercenarios. En el mes de mayo la junta militar maliense anunció la retira del país de

La llegada de las juntas militares a Malí y Burkina Faso significó un aumento de la inseguridad y violencia en ambos Estados

todos los órganos e instancias del G5 Sahel, incluida la fuerza militar conjunta. En agosto, Níger y Burkina Faso firmaron un acuerdo de cooperación militar destinado a incrementar las operaciones conjuntas sobre el terreno, y solicitaron al Gobierno de Malí que volviera a la cooperación militar en el marco de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. El deterioro de la situación de seguridad en Níger obligó al Gobierno a extender el estado de emergencia en partes de las regiones de Tillabery, Tahoua y Diffa a finales de julio, y motivó que el Ministerio de Defensa nigerino anunciara planes para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas de 33.000 a 100.000 soldados para 2030.

Cuerno de África

Etiopía (Oromiya)	
Inicio:	2022
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia progubernamental amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Etiopía es escenario de movimientos secesionistas desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surgió entre 1973 y 1974 en la región de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participaron junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, en 1992 el OLF se desmarcó del Gobierno de coalición del EPRDF e inició una rebelión contra este y contra otros movimientos nacionalistas oromos exigiendo la independencia de la región. En paralelo, Oromiya ha vivido un ciclo de protestas –iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo– que fueron fuertemente reprimidas y que causaron miles de víctimas mortales. La movilización contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018 y la designación de Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, quien emprendió una serie de reformas políticas encaminadas a la unidad y la reconciliación nacional, alcanzando un acuerdo de paz con el OLF y otros grupos político-militares lo que facilitó su retorno del exilio. Además, el nacionalismo oromo asumió que la llegada al poder de Abiy Ahmed, de su misma comunidad, significaría un impulso a la autonomía de la región; no obstante, Abiy se ha decantado por un Estado más centralizado en lugar de promover el federalismo

37. WHO, *Appel-Sahel*, febrero de 2023.

38. Véase resumen de Malí y Burkina Faso en el capítulo 2 (Tensiones).

39. Véase resumen de Malí en este capítulo.

étnico. Además, aunque el OLF se convirtió en partido político, su ala militar, el Oromo Liberation Army (OLA), rechazó el acuerdo e inició una nueva rebelión, lo que llevó al Gobierno a designarle en mayo de 2021 como grupo terrorista. Desde entonces la violencia ha ido en aumento. También cabe destacar los recurrentes enfrentamientos entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo en las zonas fronterizas entre Oromiya y Somalí por la competencia de recursos y la demarcación de los territorios de ambas comunidades, donde la emergencia climática y la intervención represiva del cuerpo policial gubernamental Liyu contribuye a exacerbar la situación.

La situación en la región etíope de Oromiya se agravó significativamente durante el año 2022, constatándose una escalada de los enfrentamientos y de acciones de contrainsurgencia de los cuerpos de seguridad federales apoyados por las milicias progubernamentales de la región vecina de Amhara, las milicias Fano, contra el grupo armado OLA. A la vez, se produjeron numerosos actos de violencia por parte de los cuerpos de seguridad y milicias progubernamentales contra la población civil de la comunidad oromo, que se aceleraron a finales de año al calor del acuerdo de paz entre el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré, negociaciones que habrían centrado la atención de la comunidad internacional en detrimento de la situación en Oromiya, según diversos análisis.

En 2022 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales apoyados por las milicias amháricas Fano y el grupo armado OLA con graves consecuencias contra la población civil en la región etíope de Oromiya

Según datos de ACLED,⁴⁰ durante el 2022 se registraron 707 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Oromiya que costaron la vida a 4.533 personas. Esta cifra debe tomarse con cautela ya que combina violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil. En esta cifra también se incluyen actos de violencia contra la minoría de la comunidad amhara presente en la región de Oromiya perpetrados por elementos del gobierno regional de Oromiya y del OLA, así como enfrentamientos entre milicias de carácter comunitario de las comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo que cada año se cobran cientos de víctimas mortales. El Gobierno lanzó una operación militar en abril para expulsar al grupo armado OLA que estaba operando en el oeste, el centro y el sur de la región. La escalada de los enfrentamientos se intensificó en octubre, coincidiendo con las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz en noviembre entre el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré.⁴¹

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, condenaron la escalada de la violencia y las campañas de contrainsurgencia, que incluían cortes y bloqueo de telecomunicaciones, y señalaron cómo los enfrentamientos habían conducido a graves abusos cometidos por parte de los cuerpos de seguridad gubernamentales, que incluían ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias. HRW también denunció que los grupos armados habían secuestrado o ejecutado a miembros de comunidades minoritarias de la región y representantes del Gobierno. Además, destacaron que el conflicto armado y las negociaciones de paz de en relación con la región de Tigré habrían eclipsado el conflicto en la región vecina y la necesidad de negociaciones de paz para reducir esta escalada de la tensión y el clima de creciente violencia.⁴² Un informe de la organización gubernamental independiente Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) publicado en diciembre alertó que la población civil en la región se habría encontrado atrapada entre el fuego cruzado y sujeta a alarmantes delitos, como ejecuciones extrajudiciales y en masa que constituirían violaciones graves de los derechos humanos en el transcurso de los ataques por parte de los grupos armados, las fuerzas gubernamentales y la milicia amhárca Fano. Las acciones del OLA incluyeron la destrucción de localidades e insumos agrícolas, infraestructuras civiles y saqueo de propiedades del Estado, así como la interrupción de servicios esenciales. Los

enfrentamientos habrían causado centenares de víctimas mortales y heridos. El informe, relativo al periodo entre agosto y diciembre, señaló que la población civil se habría convertido en objetivo de forma deliberada en base a criterios étnicos o a opiniones políticas, y que los enfrentamientos y acciones de limpieza étnica habrían causado el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas que se encontrarían en condiciones deplorables y sin acceso a la asistencia humanitaria.⁴³ El portavoz del OLA señaló que los cuerpos de seguridad federales llevaron a cabo ataques con drones en zonas pobladas que causaron la muerte de más de 300 civiles entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, coincidiendo con las negociaciones en Sudáfrica. Un recuento de ACLED en cinco de esos días identificaba la muerte de más de 55 civiles en bombardeos en tres localidades.⁴⁴ Las negociaciones de paz facilitadas por la UA en relación al conflicto armado en la región etíope de Tigré habrían centrado la atención de la comunidad internacional desviando la atención de las acciones bélicas en Oromiya, según estos análisis. La organización con sede en EEUU, Amhara Association of America, declaró haber recibido informaciones de

40. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

41. Gbadamosi, Nosmot, "Ethiopia's Other War", *Foreign Policy*, 16 de noviembre de 2022.

42. Bader, Laetitia, "Ethiopia's Other Conflict. Ethiopia's Tigray War Overshadows Ongoing Cycles of Violence in Oromia", *HRW*, 4 de julio de 2022.

43. Ethiopia Observer, "Serious human rights violations in Oromia region: EHRC report", 8 de December de 2022.

44. ACLED, *EPO Weekly, 29 October - 4 November 2022*, ACLED, 8 de noviembre de 2022, en Gbadamosi, Nosmot, "Ethiopia's Other War", *Foreign Policy*, 16 de noviembre de 2022.

que en Oromiya, donde la comunidad amhara es un grupo étnico minoritario, se habría llevado a cabo un esfuerzo deliberado y concertado por parte del OLA y elementos dentro del gobierno regional de Oromiya para cometer un proceso de limpieza étnica de la población amhara de la región.

Etiopía (Tigré)	
Inicio:	2020
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope desembocaron en su debilitamiento. Dieron un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente llevaron al poder a Abiy Ahmed, así como fuertes resistencias de actores clave como el partido Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF, por sus siglas en inglés), otrora principal partido de la coalición que ha gobernado en Etiopía desde 1991, la Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus siglas en inglés), que estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder. El liderazgo de la comunidad tigré percibió una pérdida de poder y privilegios en los cambios promulgados por Abiy Ahmed. El TPLF se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP), lo que implicaría diluirse en un nuevo partido. Estas tensiones se intensificaron bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF redujo su estricto control, surgieron nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. Esta situación desencadenó una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré. La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación de Eritrea, así como de milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara.

Dos años después del inicio de uno de los conflictos armados más graves de los últimos años en el continente africano, el Gobierno federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré alcanzaron un acuerdo

de paz que podría poner fin al grave clima de violencia y violaciones de los derechos humanos cometidos en la región por todas las partes contendientes y que ha causado una de las principales crisis de desplazamiento en el Cuerno de África de los últimos años. Las graves vulneraciones de los derechos humanos identificadas –ejecuciones extrajudiciales, graves atrocidades como violencia sexual de forma generalizada y utilizada como arma de guerra, esclavitud sexual y violaciones en masa, actos de limpieza étnica según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y HRW– podrían ser consideradas crímenes de guerra y contra la humanidad cometidas por todos los actores implicados en el conflicto, según diversos análisis. Además del cese de hostilidades, el acuerdo de paz alcanzado el 2 de noviembre incluyó importantes concesiones por parte del TPLF, como un desarme sistemático y coordinado de sus cuerpos de seguridad. El Gobierno federal aceptó retirar al TPLF de la lista de organizaciones terroristas e iniciar (artículo 10.2) un diálogo político sobre el futuro político de Tigré, sin que el acuerdo defina algún tipo de supervisión o monitoreo del diálogo.⁴⁵

Según datos de ACLED,⁴⁶ durante el 2022 se registraron 145 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Tigré, que costaron la vida a 698 personas. Si se incluyen las regiones de Amhara y Afar, donde también se protagonizaron graves enfrentamientos entre el TPLF y la coalición de cuerpos de seguridad federales, fuerzas de seguridad y las milicias regionales de ambas provincias y las Fuerzas Armadas eritreas desplegadas en el país, la cifra asciende a 388 eventos violentos que costaron la vida a 1.359 personas. Estas cifras son sensiblemente inferiores a las registradas desde el inicio del conflicto en noviembre de 2020 y finales de 2021, cuando se contabilizaron más de 800 episodios de violencia y 4.075 víctimas mortales solo en la región de Tigré. Si se incluyen las provincias adyacentes de Amhara y Afar, la cifra de episodios de violencia en ese periodo asciende a 1.473 y 8.436 víctimas mortales, aunque estas cifras deben ser tomadas con cautela debido a las dificultades para disponer de registros de víctimas mortales fiables ante las restricciones de acceso a personal humanitario y a medios de comunicación y fuentes independientes.

Según ACNUR había más de 2,7 millones de personas desplazadas internas en el país a inicios de 2023, cifra que no incluye la población desplazada en Tigré, debido a las dificultades para operar en la región, ni incluye la cifra de partes de la región de Afar, que también continuaban inaccesibles como consecuencia del conflicto y la inseguridad.⁴⁷ UNFPA señalaba en enero de 2023 que más de 26 millones de personas, más de un 20% de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave y

45. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

46. ACLED, *en línea*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

47. UNHCR, Operational Data Portal - Ethiopia, 31 de enero de 2023.

dependía de la ayuda humanitaria, cifra que incluye a 20 millones de personas afectadas por la sequía y otros desastres climáticos en las regiones del este y el sur del país. La conflictividad y el desplazamiento, la severa sequía, las enfermedades y los impactos socio-económicos derivados de la pandemia de la COVID-19 son los principales detonantes de esta situación. A raíz del acuerdo alcanzado en noviembre, los actores humanitarios pudieron aumentar la respuesta ante las mejoras relativas al acceso a las poblaciones afectadas por el conflicto. Los vuelos comerciales entre Mekelle y Shire, la electricidad, telecomunicaciones y servicios bancarios fueron restaurados en diversas partes de Tigré lo que supuso un positivo impacto.⁴⁸

El acuerdo de paz alcanzado en noviembre estuvo precedido por una ruptura de la tregua humanitaria vigente entre marzo y agosto de 2022, tras la que se produjo una grave escalada de la violencia entre las partes. En octubre la mediación liderada por la UA consiguió que las partes aceptaran su invitación para desplazarse a Sudáfrica para discutir en torno a un cese de hostilidades, pero se pospuso por motivos logísticos. Este retraso pudo haber sido utilizado por Etiopía para acelerar la ofensiva militar junto a Eritrea de cara a acceder a la mesa de negociación en una posición de fuerza, según algunos análisis.

Tras dos años del estallido de un conflicto armado que ha causado miles de víctimas mortales en la región, más de dos millones de personas desplazadas y que abocó a prácticamente un millón de personas de los seis que habitan Tigré a una situación de hambruna, a finales de agosto se desencadenó una nueva escalada de los enfrentamientos entre las milicias y cuerpos de seguridad de la región de Tigré y las tropas federales etíopes apoyadas por Eritrea y los cuerpos de seguridad de la región de Amhara. El incremento de violencia activó todas las alarmas por las graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil y comportó una intensificación de las iniciativas diplomáticas para convencer a las partes de la necesidad de alcanzar un alto el fuego. No obstante, desde marzo hasta finales de agosto había estado vigente una tregua humanitaria de cuya ruptura ambas partes se acusaron mutuamente, lo que reabrió los enfrentamientos y el bloqueo humanitario. Tras la firma del acuerdo de cese de hostilidades de noviembre, se produjeron algunos enfrentamientos esporádicos y continuaron los abusos por parte de las tropas eritreas, así como actos de saqueo y ataques contra la población civil. En este sentido, las autoridades de Tigré acusaron a los cuerpos de seguridad federales de haber llevado a cabo ataques contra civiles en la localidad de Maychew desde la firma del acuerdo. No obstante, en general las partes respetaron el acuerdo y a finales de diciembre Eritrea inició la retirada de sus tropas de diversas localidades de la región, incluidas las estratégicas localidades de Shire y Axum, coincidiendo con la llegada

de la misión de monitoreo de la UA incluida en el acuerdo. Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la región de Tigré iniciaron la entrega de armamento pesado en cumplimiento del acuerdo.⁴⁹ A su vez, los enfrentamientos registrados durante 2021 en la zona fronteriza entre los Ejércitos de Etiopía y Sudán y milicias sudanesas, que dificultaron los desplazamientos de población que huía del conflicto, también remitieron durante el año y Etiopía y Sudán en diciembre de 2022 alcanzaron un acuerdo de cooperación sobre paz y seguridad.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna al Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM/ATMIS, EUNAVFOR Somalia, Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia registró una intensidad muy superior a la del período anterior. El año se vio

48. UNFPA, *UNFPA Ethiopia Humanitarian Response Situation Report*, 31 de diciembre de 2022.

49. BBC, "Ethiopia's Tigray conflict: TPLF forces hand over weapons in peace move", BBC, 11 de enero de 2023.

marcado por el incremento de los ataques por parte del grupo armado al-Shabaab, por las operaciones de la misión africana en el país (AMISOM, transformada en la Misión de Transición de la UA en Somalia, ATMIS, en abril) y del Ejército Nacional Somalí así como de sus aliados internacionales y por la culminación del proceso electoral. Las fuerzas de seguridad somalíes y la ATMIS seguían siendo el blanco principal de los atentados, que se perpetraban sobre todo con artefactos explosivos improvisados. Los estados más afectados por la actividad de al-Shabaab y las operaciones contrainsurgentes del Gobierno Federal y sus aliados fueron las zonas rurales y núcleos urbanos centrales y del sur del país, en especial en el estado de Hirshabelle (especialmente las regiones de Hiraan y Middle Shabelle); el estado de Galmudug (la región de Galgudug); el estado del Suroeste (especialmente las regiones de Benadir, que incluye la capital, Mogadiscio, y también Lower Shabelle, Bay y Bakool); y Jubalandia (en especial, la región de Gedo, fronteriza con Etiopía). El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)⁵⁰ señaló que durante el año 2022 se produjo un aumento del 133% en el nivel de muertes vinculadas a la violencia de grupos islamistas militantes, principalmente al-Shabaab. Hubo 6.484 muertes violentas reportadas en Somalia en 2022, según datos de ACLED, un aumento con respecto a las 3.181 del año anterior. Este es un nivel récord de muertes y supera el total de 2020 (3.232) y 2021 (3.181) combinados.⁵¹ Esto se reflejó en un aumento en la actividad armada con respecto al año anterior, con un total de 2.936 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), respecto a los 2.545 eventos del año anterior, pero la leve diferencia pone de manifiesto que las acciones en 2022 fueron mucho más letales.

La escalada de los enfrentamientos y acciones de combate gubernamentales se incrementaron tras la elección del presidente Hassan Sheikh Mohamud en mayo y su llamamiento a una ofensiva total contra al-Shabaab. Esta ofensiva expulsó a al-Shabaab de las principales ciudades que anteriormente controlaba, lo que provocó ataques de represalia. La ofensiva gubernamental contra al-Shabaab provocó un incremento de acciones por parte del grupo en la retaguardia perpetrando actos de respuesta persiguiendo objetivos fáciles, como los atentados de octubre en Mogadiscio que causaron un centenar de víctimas mortales e hirieron a cientos más.

El conflicto también estuvo marcado por un aumento del 34% en los ataques con artefactos explosivos improvisados en 2022 y una duplicación de las muertes

Los ataques de al-Shabaab y las operaciones contrainsurgentes del Gobierno Federal y de sus aliados locales e internacionales provocaron una escalada de la violencia en 2022 sin precedentes en años anteriores

resultantes de los artefactos explosivos improvisados. La ONU informó que 613 civiles murieron y 948 resultaron heridos ese año, la mayoría por artefactos explosivos improvisados colocados por al-Shabaab, lo que exacerbó la ya de por sí grave situación humanitaria y de derechos humanos de la población civil, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.⁵² Las fuerzas de seguridad del Estado, las milicias de clanes y otros actores no identificados también fueron responsables de víctimas civiles. Cabe destacar también las operaciones aéreas con drones de EEUU y Turquía.

En términos humanitarios el ACSS destacó que Somalia en 2022 experimentó su quinta temporada de lluvias escasas y se esperaba que vea una sexta temporada de lluvias por debajo del promedio en marzo-junio de 2023, que podría afectar a 8,3 millones de personas. Gran parte del área que enfrenta la inseguridad alimentaria más extrema, incluida la posible hambruna, se encuentra en territorio que al-Shabaab controla o disputa. Esto subraya los desafíos del acceso humanitario y, en ocasiones, el sabotaje total de las entregas de ayuda alimentaria. ACNUR informó que había 3 millones de personas desplazadas internas en el país como consecuencia del conflicto, la inseguridad y los efectos del cambio climático.⁵³

En paralelo a las actividades de al-Shabaab y a la grave sequía y la hambruna que afecta al país, cabe destacar la culminación de las elecciones legislativas y presidenciales en el marco de la implementación del acuerdo electoral alcanzado el 27 de mayo de 2021. Los comicios dieron como resultado la elección de Hassan Sheikh Mohamud como nuevo presidente del país y pusieron fin al grave clima de tensión entre sectores del Gobierno y de los estados federados y sectores opositores, que habían desencadenado múltiples negociaciones para superar el contencioso.⁵⁴ En paralelo, la misión de la UA en Somalia finalizó su mandato el 31 de marzo de 2022, y fue sustituida por la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS), establecida el 1 de abril. La misión tiene el mandato de fortalecer la autonomía tanto militar como institucional del Gobierno somalí a medida que proceda a su retirada del país. Su mandato finalizará a finales de 2024, cuando se espera que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Somalia asuman plenamente las responsabilidades de seguridad del país, guiadas por el Plan de Transición de Somalia. La primera reducción de tropas de la ATMIS tuvo lugar en diciembre de 2022.

El proceso electoral concluyó también con la formación del Parlamento.⁵⁵ El presidente saliente, Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo", reconoció su derrota y

50. Africa Center for Strategic Studies, "Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent", 6 de febrero de 2023.

51. ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

52. OHCHR, "Somalia: Türk decries steep rise in civilian casualties amid surge in Al-Shabaab attacks", OHCHR, 14 de noviembre de 2022.

53. UNHCR, Operational Data Portal, Somalia, 31 de enero de 2023.

54. Véase Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

55. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre Somalia*, S/2022/665, 31 de agosto de 2022.

el presidente Mohamud juró inmediatamente el cargo. El proceso de elección presidencial fue considerado transparente y tuvo gran aceptación entre las partes interesadas del país. Mohamud asumió plenos poderes presidenciales el 23 de mayo y fue investido el 9 de junio. Desde su nombramiento, el presidente intensificó los contactos con los líderes de los estados federados, con el objetivo de mejorar las relaciones entre el Gobierno Federal y los estados federados. El presidente Mohammed destacó que pretendía debilitar a al-Shabaab en la dimensión militar, económica e ideológica. En línea con la determinación presidencial de combatir a al-Shabaab más allá de los métodos militares, un nombramiento destacado del nuevo Gobierno fue el del antiguo número 2 de al-Shabaab, Mukhtar “Abu Mansour” Robow Ali, desertor de al-Shabaab en 2017, como nuevo ministro de Asuntos Religiosos. Abu Mansour estaba amenazado por ser considerado miembro del sector crítico en el seno de la organización que abogaba por entablar negociaciones de paz con el Gobierno, y fue detenido en diciembre de 2018 cuando optaba a la presidencia del estado del Suroeste, y privado de libertad sin juicio hasta su nombramiento. Previamente, a diferencia de declaraciones públicas anteriores, el número 2 de al-Shabaab y líder de los servicios de inteligencia de la insurgencia, Mahad Karate, afirmó en el medio británico Channel 4, el 15 de junio, que el grupo podría considerar negociaciones con el Gobierno cuando fuera el momento adecuado.⁵⁶ El presidente Mohamud, en una entrevista con The Economist publicada días antes, afirmó su intención de hacer retroceder a al-Shabaab y luego entablar conversaciones de paz.

Según el informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Somalia publicado en octubre,⁵⁷ a pesar de los esfuerzos que realizan fuerzas somalíes e internacionales para reducir la capacidad de al-Shabaab, este seguía mostrándose capaz de llevar a cabo ataques complejos y asimétricos en Somalia, y las ofensivas transfronterizas del grupo en Etiopía y Kenya durante el año ponían de relieve su interés en ampliar su capacidad de ataque en el exterior y revelaban sus ambiciones regionales. Al-Shabaab mantenía bajo su control amplias zonas del centro y el sur de Somalia y seguía ejerciendo su influencia sobre zonas en que se han desplegado fuerzas de seguridad, por lo que el grupo insurgente conservaba su libertad de circulación, lo que le permitía organizar emboscadas y colocar artefactos explosivos improvisados que obstaculizaban el despliegue de la administración. Las investigaciones del Grupo de Expertos sobre las finanzas de al-Shabaab -economía basada en la extorsión en varios sectores, como la ganadería y la propiedad- ponían de manifiesto una

sólida posición financiera, capaz de sostener su campaña insurgente, con capacidad de generar ingresos y ejercer control sobre empresas y particulares en zonas que no controla físicamente, especialmente en grandes centros urbanos como Mogadiscio. Ello se veía facilitado por las amenazas de violencia contra personas o comunidades, así como por la ausencia de una presión constante sobre su aparato financiero. Además, el Grupo de Expertos no ha observado suficientes indicios de que el Gobierno Federal haya intentado frenar la estrategia de extorsión de al-Shabaab al margen de operaciones militares tradicionales por sus fuerzas de seguridad.⁵⁸

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder Pierre Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Évariste Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

Como en años anteriores, el clima de violencia política y los ataques esporádicos por parte de actores armados

56. Jamal Osman, “Inside Al Shabaab: The extremist group trying to seize Somalia”, *Channel 4*, 15 de junio de 2022.

57. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 10 de octubre de 2022 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia por el Grupo de Expertos sobre Somalia, Naciones Unidas, S/2022/754*, 10 de octubre de 2022.

58. Op, cit, 10 de octubre de 2022.

y las acciones de contrainsurgencia gubernamentales continuaron en 2022, así como actos de represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de miembros de la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). El centro de investigación ACLED dio un balance de 245 víctimas mortales durante el año 2022 en el país como consecuencia de estas acciones.⁵⁹ Estos datos muestran una ligera mejora en comparación con 2021, cuando se registraron 285 muertes. Entre las principales acciones armadas del año cabe destacar la ofensiva perpetrada a finales de septiembre por los cuerpos de seguridad contra el grupo FNL en el bosque de Kibira (provincia de Cibitoke), de la que a mediados de octubre se informó de la muerte de 42 rebeldes y de una decena de soldados. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento forzado de centenares de personas. Como muestra del clima de represión y silenciamiento de la oposición política, el Gobierno prohibió a diversos candidatos opositores concurrir a las elecciones locales e irrumpió en reuniones y mítines electorales de la oposición. Además, en el marco de las elecciones locales, el ala juvenil del CNDD-FDD, las Imbonerakure, perpetraron ataques violentos de motivación política. En agosto, el secretario general del partido en el poder, el CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, ratificó que ejecutar a cualquiera que amenazara la seguridad nacional era legítimo, e instó a las Imbonerakure a continuar llevando a cabo patrullas nocturnas, lo que dio alas a las acciones de intimidación y represión de la oposición por parte de las Imbonerakure con total impunidad. Al finalizar 2022 había 259.279 personas burundesas refugiadas, sobre todo en RDC, Rwanda, Tanzania y Uganda, según ACNUR.⁶⁰ Más de 206.000 refugiados burundeses han regresado a su país de origen desde septiembre de 2017, entre ellos 20.348 de enero a octubre de 2022. Otra consecuencia vinculada al conflicto armado que generó un grave clima de tensión y movilizaciones fueron las expropiaciones de tierras por la fuerza que llevaron a cabo grupos de Imbonerakure en octubre para entregar estas tierras a miembros del partido en el poder y también para construir una base militar (proceso iniciado en agosto contra más de 5.000 familias).

Cabe añadir que el Gobierno llevó a cabo una campaña nacional de entrenamiento en la que grupos de miembros de las Imbonerakure recibieron formación militar en septiembre para posteriormente, según fuentes militares, unirse a la ofensiva contra el grupo armado RED-Tabara en la provincia congoleesa de Kivu

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi afirmó que el historial de derechos humanos del país no había mejorado significativamente desde 2015

Sur. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Fortuné Gaétan Zongo, dijo a mediados de septiembre que el historial de derechos humanos del país no había mejorado significativamente desde 2015. A pesar de ello, a finales de octubre la UE anunció el levantamiento de sanciones contra tres altos funcionarios, incluido el nuevo primer ministro, Gervais Ndirakobuca, y el asesor presidencial principal, el general Godefroid Bizimana, tras un “diálogo intensificado” con Bujumbura sobre el historial de derechos humanos. En febrero, tanto Bruselas como Washington restablecieron los flujos de ayuda a la nación después de levantar las sanciones de 2015, citando el progreso político bajo Ndayishimiye. En su decisión de reestablecer las ayudas, ambas capitales señalaron que los grupos de la sociedad civil habían regresado. Por otra parte, durante el año la BBC recibió autorización para transmitir de nuevo desde el país. Finalmente, la UE, el mayor donante extranjero de Burundi, elogió los esfuerzos para combatir la corrupción.⁶¹

Burundi continuó profundizando en la mejora de las relaciones con los países vecinos y las organizaciones regionales con el objetivo de acabar con el aislamiento internacional y mejorar su imagen en relación a la situación de violencia e inseguridad que padece el país. El 22 de julio, el presidente, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente de la Comunidad de África del Este (EAC) para un mandato de un año. El 15 de agosto, Burundi anunció el despliegue de al menos 600 militares en el este de la RDC como parte de un acuerdo bilateral entre los dos países. La ONG Burundi Human Rights Initiative afirmó el 27 de julio que Burundi había enviado secretamente centenares de soldados e Imbonerakure a combatir al grupo RED-Tabara en Kivu Sur desde finales de 2021. Fuentes congoleesas afirmaron que los contingentes militares burundeses llevaban a cabo sus operaciones en el marco de la fuerza regional de la EAC, aunque fuentes militares burundesas remarcaron la existencia de un acuerdo bilateral. Además, se produjeron cambios en varios puestos claves del Gobierno, en el marco de la lucha por el poder entre el presidente Évariste Ndayishimiye y el secretario general del CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo. En septiembre se produjo una escalada de la tensión como consecuencia de una importante purga derivada del anuncio del presidente de un supuesto intento de golpe de Estado. El primer ministro, Alain Guillaume Bunyoni, hasta el momento importante aliado del presidente, fue sustituido por el entonces ministro del Interior, Gervais Ndirakobuca, y otros cinco ministros también fueron apartados de su cargo. Ndayishimiye también sustituyó al general Gabriel Nizigama, su

59. ACLED, [en línea](#). [Consultado el 10 de enero de 2023]. ACLED, [Dashboard](#). [Consultado el 31 de enero de 2023].

60. UNHCR, [Operational Data Portal, Burundi](#), 31 de enero de 2023.

61. Kuwait Times, “Burundi president sacks PM after warning of coup plot”, *Kuwait Times*, 7 de septiembre de 2022.

jefe de gabinete presidencial –puesto que en el país se describe como un superprimer ministro– por el coronel Aloys Sindayihebura, quien estaba a cargo de la inteligencia interna dentro del Servicio Nacional de Inteligencia, y también apartó de su cargo o redesplicó a 54 comisarios provinciales de policía.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Grupo Wagner, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los 10 años anteriores había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“antibalaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada, forzando un gobierno de transición que condujo a las elecciones de 2015-2016. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos (que apenas controlaban Bangui) ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación, por lo que se promovieron nuevos contactos de la mano de la UA y de la CEEAC, que contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019.

Durante el año 2022 persistió la ofensiva por parte de los grupos armados que retiraron en diciembre de 2020 su firma del acuerdo de paz de 2019 y se deterioró la situación política en el país debido a la polarización derivada del proceso para intentar reformar la Constitución. Según el centro de investigación ACLED, en 2022 se produjeron 256 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 837 personas. Esta cifra es sensiblemente inferior a la del año 2021, que se elevó a 1.700 víctimas mortales, coincidiendo con el intento de golpe de Estado y la ofensiva rebelde que cobró un fuerte impulso a finales de 2020 y principios de 2021. Según datos de ACNUR, a finales de 2022 más de 739.134 personas se encontraban refugiadas en los países vecinos, y más de 515.665 estaban desplazadas en el interior del país.⁶²

La situación de seguridad en todo el país siguió siendo muy inestable, con continuos ataques por parte de los grupos armados que forman parte de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), así como por acciones perpetradas por los mercenarios del grupo de seguridad privada ruso Wagner y los cuerpos de seguridad centroafricanos, denunciados por cometer graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil. La CPC consolidó su presencia en la prefectura de Vakaga, en el noreste del país, convirtiendo la comuna de Ouandja en su feudo. La escasez de combustible a raíz de las restricciones de las cadenas mundiales de suministro, especialmente en junio, limitaron las operaciones de los cuerpos de seguridad estatales y de la MINUSCA, lo que fue aprovechado por los grupos armados para atacar las zonas donde la autoridad del Estado estaba menos presente o completamente ausente, según destacó el informe del secretario general de la ONU de octubre. Los grupos recuperaron el control de algunas zonas de extracción, cometieron abusos contra civiles e impusieron una tributación ilegal. Además, cabe añadir que rebeldes de RCA habrían cruzado con regularidad la frontera con Camerún con el fin de secuestrar a civiles para pedir rescate. El 22 de junio, funcionarios de Camerún y de RCA se reunieron para examinar la situación de la seguridad en su frontera común y poner freno a las actividades de bandas delictivas, grupos armados y salteadores de caminos implicados en el tráfico de armas y recursos naturales.

El 14 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la MINUSCA por un año, aunque con la abstención de Rusia, China y Gabón, por el desacuerdo en relación al levantamiento de la prohibición a los vuelos nocturnos de la MINUSCA, cuestión incluida en la resolución. Bangui había ordenado esta medida años atrás para limitar las interacciones con los vuelos operados por Wagner, pero el 3 de octubre tres soldados heridos de la MINUSCA no pudieron ser evacuados de noche y murieron como consecuencia de sus heridas, lo

62. UNHCR, Operational Data Portal - CAR Situation. [Consultado el 31 de enero de 2023].

que fue recogido por el informe del secretario general de la ONU de octubre como un obstáculo a la labor de las fuerzas de la ONU. Así, los dos miembros permanentes se abstuvieron en el voto de la resolución al no conseguir quitar la referencia a la prohibición gubernamental, lo que pone de manifiesto las tensiones entre los países occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia, que cuenta con el apoyo chino. Las tensiones entre Francia y RCA se incrementaron a finales de noviembre cuando se produjo un ataque aéreo a una base militar en Bossangoa del que una organización local progubernamental responsabilizó a Francia, y Rusia señaló que RCA estaba bajo la amenaza de algún actor externo y acusó a la comunidad internacional de apoyar a la rebelión. El 16 de diciembre el jefe del centro cultural ruso de Bangui recibió un paquete bomba que le causó heridas y del que el propietario del grupo Wagner responsabilizó a Francia, como promotor de acciones terroristas, acusación calificada por Francia de propaganda. En este sentido, cabe destacar la retirada a mediados de diciembre del último contingente de la operación francesa Sangaris. Las últimas tropas francesas desplegadas en RCA partieron tras el enfriamiento de las relaciones provocado por el estrechamiento de los lazos entre Bangui y Moscú. Francia, la antigua potencia colonial, envió a RCA hasta 1.600 soldados con el mandato de contribuir a estabilizar el país después de que un golpe de estado en 2013 desatara el conflicto armado que aún sufre el país en la actualidad. La operación Sangaris era la séptima intervención militar de Francia en RCA desde que el país obtuvo su independencia en 1960. Terminó en octubre de 2016 después de las elecciones, dejando una presencia francesa residual.

Tras múltiples retrasos, el proceso de diálogo nacional conocido como Diálogo Republicano anunciado tras el intento de golpe de Estado de enero de 2021 se celebró entre el 21 y el 27 de marzo de 2022, aunque con la ausencia de la oposición política y de los grupos armados que se retiraron en diciembre de 2020 del acuerdo de paz de 2019. Tras la conclusión del Diálogo Republicano, el Gobierno creó en 2022 el comité de seguimiento, formado por representantes de la mayoría presidencial, partidos de la oposición, incluido Gabriel Jean-Edouard Koyambounou como coordinador para dirigir el comité, organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos.⁶³ A partir de la celebración del diálogo, la polarización entre el Gobierno, los partidos progubernamentales y la oposición política y social fue creciente, debido al intento de los primeros de promover un referéndum para reformar la Constitución que permitiera al actual presidente presentarse a un tercer mandato. En julio se creó una plataforma amplia en contra de la reforma constitucional, conocida como el Grupo de Acción de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Defensa de la Constitución del 30 de Marzo de 2016. Se creó también el Bloque Republicano para la

Defensa de la Constitución, que incluía a figuras clave de la oposición, que pidieron la movilización contra la reforma constitucional. En agosto organizaciones y partidos políticos progubernamentales organizaron manifestaciones de apoyo a la reforma y la Mesa de la Asamblea Nacional solicitó al Gobierno que iniciara el proceso de referendo constitucional y estableciera una asamblea constituyente inclusiva para redactar una nueva constitución. El Gobierno respondió creando un comité de redacción que debía presentar a la presidencia un proyecto de propuesta para una nueva constitución en un plazo de tres meses tras su establecimiento, y nombró a sus miembros. Varios actores políticos y de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica, rechazaron un puesto en el comité. El partido PATRI, el Bloque Republicano y el Grupo de Acción de la Sociedad Civil presentaron ante el Tribunal Constitucional recursos contra el decreto presidencial para emprender la reforma constitucional. El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los procesos emprendidos para redactar una nueva constitución, lo que le supuso amenazas por parte de partidarios de la reforma. La emisora independiente Ndeke Lukae también sufrió amenazas por informar sobre la cuestión. Aunque el Gobierno aceptó el dictamen constitucional, en diciembre la Asamblea Nacional aprobó una ley para regular la celebración de referéndums en el país, abriendo la puerta a la celebración de un referéndum para impulsar nuevamente la reforma constitucional.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (EACRF)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas

63. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

extranjerías y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP de origen tutsi integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

Durante el año se agravó la situación en el este del país como consecuencia de la ofensiva por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Desde noviembre de 2021 este grupo reinició sus actividades tras prácticamente una década inactivo y a partir de mayo de 2022 llevó a cabo una fuerte ofensiva ampliando su presencia y control del territorio en la provincia de Kivu Norte. **Esta escalada y las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y otros grupos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur contribuyeron aún más a un deterioro general de la situación de la seguridad.** A esta situación se unió el incremento de la tensión entre RDC y Rwanda. Según datos de ACLED,⁶⁴ durante el 2022 se registraron 2.660 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en las cinco provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika) que costaron la vida a 5.681 personas. En el conjunto del país, fueron 6.145 las víctimas mortales consecuencia de la violencia. Estas cifras son superiores a las registradas en 2021, cuando se contabilizaron más de 2.300 episodios de violencia y 4.723 víctimas mortales solo en estas cinco provincias, y 4.865 personas en el conjunto del país.

Según ACNUR había 5,76 millones de personas desplazadas internas en 2022, cifra ligeramente superior a los 5,6 millones de personas desplazadas internas de 2021, lo que pone de manifiesto la persistencia de la situación de inseguridad y violencia que impide a la población retornar a sus lugares de origen. Esta cifra incluye unos 3 millones de menores. Además había 1.016.000 personas refugiadas en los países vecinos en 2022, cifra superior a las 942.000 de 2021, lo que sigue situando a RDC en la mayor crisis de desplazamiento en África de los últimos años. RDC acogía también a más de medio millón de personas refugiadas y demandantes de asilo de los países vecinos. El Programa Mundial de los Alimentos (PMA) señalaba en enero de 2023 que 26,4 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave.⁶⁵

Durante el año se agravó la ofensiva por parte del Movimiento 23 de Marzo (M23) con la toma de

diferentes localidades, y en especial de Rumangabo, la principal base militar congoleña de Kivu Norte en mayo. Ante la ofensiva, el Ejército se retiró, calificándola de retirada estratégica. Además, el M23 tomó la ciudad de Bunagana, en la frontera con Uganda, en el territorio de Rutshuru (Kivu Norte) el 12 de junio. Desde entonces, el grupo operó el puesto fronterizo con Uganda y fue ampliando la toma de localidades vecinas en el territorio de Rutshuru. Esta escalada del M23 y las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y otros grupos armados en las provincias de Ituri y Kivu Norte (como las facciones Nyatura, milicias Mai Mai, el grupo APCLS, el grupo Nduma Défense du Congo-Rénové, el grupo de origen ruandés FDLR, de entre los 120 grupos armados presentes en el este del país) contribuyeron aún más a un deterioro general de la situación de la seguridad. OCHA estimó que más de 510.000 personas se habrían desplazado desde marzo hasta finales de año y otras 7.000 habrían buscado refugio en Uganda como consecuencia de los ataques del M23. La ofensiva del M23, iniciada a finales de 2021, habría contado con el apoyo de Rwanda, según señaló en agosto la ONU, y junto a los bombardeos transfronterizos e incursiones de soldados de RDC en Rwanda y de Rwanda en RDC, provocó una escalada de la tensión entre ambos países. La crisis llevó a esfuerzos regionales para intentar desescalar el conflicto y para promover contactos que condujeran a negociaciones de paz entre RDC y el M23 y entre RDC y Rwanda. En agosto el Grupo de Expertos de la ONU señaló que disponía de sólidas evidencias sobre el apoyo de Rwanda al M23. El informe, rechazado por Rwanda, destacaba que el Ejército ruandés habría lanzado intervenciones militares en territorio congolés desde noviembre de 2021 proporcionando apoyo militar a acciones específicas del M23.

En abril los países de la EAC, incluido RDC (que se incorporó a la organización en marzo) aprobaron el despliegue a partir de agosto de una misión militar en el este de RDC para combatir al grupo armado M23 y apoyar al Gobierno a poner fin al clima de violencia como consecuencia del reinicio de las hostilidades por parte del M23, decisión ratificada en junio. Sin embargo, además del retraso en el despliegue –que se hizo parcialmente efectivo en noviembre– siguieron abiertas algunas incógnitas, como la financiación de la misión, la protección de la población civil y la coordinación con la MONUSCO. Burundi, en agosto, se convirtió en el primer país en enviar tropas a la RDC, que formarán parte de la fuerza regional de la EAC, aunque fuentes expertas manifestaron su preocupación ya que Burundi, como otros vecinos de la RDC, tiene sus propios intereses y agenda de seguridad, y Uganda y Rwanda han sido acusados de dar apoyo al M23. Solo Tanzania, Sudán del Sur y Kenia no tienen conflictos de intereses en RDC. RDC vetó la participación de Rwanda en la misión.

64. ACLED, *en línea*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

65. WFP, *Democratic Republic of the Congo. December Situation Report #44*, 17 de enero de 2023.

Ante la escalada de la ofensiva en octubre –con nuevas victorias territoriales con la toma de las localidades de Kiwanja y Rutshuru y el corte de la RN2, la principal arteria que comunica la capital provincial, Goma, con la zona norte de la provincia y con Uganda–, el Gobierno congolés expulsó al embajador ruandés. El 31 de octubre se produjo una movilización de miles de personas en Goma contra Rwanda, pidiendo armas para combatir ante la preocupación de que el grupo armado pudiera ocupar la capital, tal y como hizo en 2012, manifestando su rechazo y frustración ante la pasividad internacional y exigiendo a la comunidad internacional sanciones contra Rwanda por el apoyo al M23 evidenciado por los informes de la ONU. El 30 de octubre la UA hizo un llamamiento a un alto el fuego y a entablar negociaciones durante la tercera ronda del diálogo intercongolés que debía celebrarse en Kenya entre el 4 y el 13 de noviembre, que se pospuso a diciembre y en la que no participó el M23.⁶⁶ El 23 de noviembre los líderes de RDC, Rwanda (a través de su ministro de Exteriores), Burundi y Angola, reunidos en Angola, acordaron establecer un alto el fuego a partir del 25 de noviembre, exigieron al M23 la retirada a sus posiciones iniciales y alertaron que si el M23 rechazaba frenar los enfrentamientos, la fuerza de la EAC desplegada en Goma utilizaría todos los medios a su alcance para desarticular al grupo. Sin embargo, en la reunión no estuvo presente ningún representante del M23. Su líder, Bertrand Bisimwa, realizó un comunicado ese mismo día agradeciendo a los líderes regionales su contribución a promover una solución pacífica al conflicto, y aunque inicialmente anunció que respetaría el alto el fuego, horas más tarde el grupo señaló que dicho acuerdo no le incumbía ya que no estuvieron presentes en la reunión. El M23 exige un diálogo directo con el Gobierno congolés mientras que este rechaza este diálogo directo, por mandato de la Asamblea Nacional, y considera al M23 un grupo terrorista y exige su retirada de territorio congolés antes de entablar un diálogo. Entre el 29 y el 30 de noviembre se produjo una matanza por parte del M23 en las localidades de Kishishe y Bambo, en el territorio de Rutshuru, que el grupo intentó minimizar atribuyéndose una decena de víctimas mortales, mientras que el Gobierno congolés anunció la muerte de unos 50 civiles. Dicha masacre recibió la condena unánime de la comunidad internacional, y numerosos países exigieron a Rwanda poner fin al apoyo al grupo armado. Una investigación preliminar de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) determinó la muerte de 131 personas (102 hombres, 17 mujeres y 12 menores), además de saqueos, violaciones y secuestros como represalia a acciones previas de milicias de la zona. La UNJHRO posteriormente elevó la cifra a 171 personas. Desde entonces, persistieron los enfrentamientos entre el grupo y las fuerzas congoleesas. A la vez, algunos grupos armados y milicias Mai Mai y coaliciones de grupos, como el CODECO, el Nduma Défense du Congo-Rénové, el APCLS o el Coalition of Movements for Change (CMC)

firmaron acuerdos con el Gobierno para unirse en su lucha contra el M23, en el marco de la política de alianzas e instrumentalización de apoyos que caracteriza la volátil situación de seguridad y crisis de gobernanza que afecta al este del país.

En paralelo, la situación en la provincia de Ituri, al norte de Kivu Norte, continuó siendo muy volátil, con acciones armadas durante el año de las milicias CODECO y Zaire contra la población civil para ejercer el control de recursos mineros, y de otras milicias Mai Mai. Se produjeron también operaciones militares de las Fuerzas Armadas ugandesas y congoleesas contra las ADF, entre los actores más destacados. Por último, en la provincia de Kivu Sur, actores armados locales y extranjeros continuaron llevando a cabo ataques contra la población civil y los cuerpos de seguridad, principalmente en los territorios de Fizi, Mwenga y Uvira, en paralelo a las operaciones militares de las Fuerzas Armadas burundesas en la provincia en persecución de los grupos armados burundeses que tienen sus bases en ella.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolees que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleesa, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congoleesas en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

66. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

Tras un año desde el inicio de la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) en territorio congolés contra el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en represalia por las explosiones perpetradas en la capital ugandesa y reivindicadas por las ADF el 16 de noviembre de 2021, persistieron las operaciones militares de las UPDF y la ofensiva conjunta de estas y las Fuerzas Armadas congoleesas contra las ADF. Este operativo militar ugandés, conocido como Operación Shuja, continuó sus actividades aunque diferentes análisis cuestionaron el éxito de la operación. En abril, el presidente ugandés Yoweri Museveni reveló que 4.000 soldados de las UPDF formaban parte de la Operación Shuja. Las tropas ugandesas pertenecían a la Fuerza Especializada de la División de Montaña que había sido entrenada por las Fuerzas Especiales francesas “en la guerra de montaña” desde 2016. En 2019, se inauguró oficialmente la División de Montaña.

Diferentes análisis cuestionaron la operación militar ugandesa en territorio congolés y evidenciaron la expansión territorial del grupo armado ADF

En la dirección de la operación se produjeron diversos cambios en 2022. En octubre hubo cambios en la estructura de mando de la Operación Shujaa. Su comandante, el teniente general Kayanja Muhanga, fue trasladado al cuartel general del ejército como comandante de las fuerzas terrestres de las UPDF. Su predecesor, el general Muhoozi Kainerugaba, hijo de Yoweri Museveni, promocionó el éxito de la operación, volvió a su puesto predeterminado como asesor presidencial principal sobre operaciones especiales. Reemplazando a Kayanja estaba en 2022 el mayor general Dick Olum, que había sido agregado de defensa en la embajada de Uganda en Kinshasa, y también había comandado operaciones contra Joseph Kony en la RCA, y al igual que Kayanja, Olum se desempeñó como comandante del contingente de las UPDF en la lucha contra los militantes de al-Shabaab en Somalia.

No obstante, a pesar de los cambios en la dirección de la operación, las ADF continuaron perpetrando ataques contra la población civil en la provincia de Kivu Norte y profundizaron su **expansión en la provincia de Ituri, donde cometieron múltiples ataques en los territorios de Mambasa y de Irumu**, territorios donde se enfrentaron a las UPDF y las Fuerzas Armadas congoleesas. En febrero las UPDF anunciaron que habían desalojado a las ADF del conocido como “Triángulo de la Muerte” en Mukakati, Erigeti, Kainama, Tchabi, River Semliki Bridge y Burasi. En junio, la organización Congo Research Group y el instituto congolés Ebuteli⁶⁷ publicaron un informe en el que señalaban la posibilidad de que las UPDF estuvieran impulsadas por fines de lucro en lugar del cometido inicial de su intervención, desarticular al grupo armado ADF, responsable de acciones insurgentes y de captación de seguidores no solo en territorio congolés

sino también en Uganda. Este informe también cuestionó los logros militares del Ejército de Uganda, y señaló cómo la operación militar probablemente también tuvo como objetivo promover los intereses económicos de Uganda, y en concreto, proteger los depósitos de petróleo y la infraestructura de Uganda alrededor del Lago Alberto y la construcción de carreteras para ampliar el mercado de mercancías de Uganda. Dott Services, una empresa de construcción de Uganda, y Total Energies, la multinacional petrolera francesa, estaban directamente implicadas en el desarrollo de sus intereses alrededor del Lago. Análisis habían señalado que Rwanda era reticente a la presencia de Uganda en territorio congolés y también habían situado a Uganda como actor que había prestado apoyo al resurgimiento del M23. No obstante, la ofensiva del grupo armado M23 sí evidenció la retirada de efectivos congoleeses hacia el territorio de Rutshuru, en el sur de la provincia de Kivu Norte, para hacer frente a este nuevo frente militar que debilitó las actividades contra el grupo armado ADF.

Según el informe del Grupo de Expertos de RDC publicado en diciembre,⁶⁸ a pesar de la Operación Shuja, las ADF continuaron su expansión territorial y llevaron a cabo ataques contra la población civil en el territorio de Beni y Lubero, en Kivu Norte y en el sur de Ituri. Las ADF siguieron operando en pequeños grupos, lanzando ataques simultáneos en varios frentes. Además, utilizaron artefactos explosivos improvisados en entornos urbanos, optando por realizar ataques más visibles a través de redes bien establecidas. Sus ataques y movimientos tenían como objetivo principal el reabastecimiento, la búsqueda de emplazamientos adecuados para la instalación de nuevos campamentos, apartar la atención de las ADF como objetivo principal de las operaciones militares o las acciones de represalia por esas operaciones, entre otras cosas, con el fin de socavar el apoyo popular a la Operación Shuja.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, milicias comunitarias, UNITAMS
Intensidad:	3
Evolución:	=

67. Congo Research Group y Ebuteli, *Uganda's Operation Shujaa in the DRC, Fighting the ADF or Securing Economic Interests?*, junio de 2022.

68. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 16 de diciembre de 2022 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Naciones Unidas, S/2022/967, 16 de diciembre de 2022.

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario, concluyendo su despliegue a finales de 2020.

La región de Darfur continuó siendo el epicentro de la violencia armada en el país. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año se registraron en Darfur 409 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 951 personas. Estos datos muestran una ligera disminución en comparación con el año anterior, cuando se registraron 1.027 muertes, pero siguen lejos de años previos: 555 muertes en 2020 y 268 en 2019.⁶⁹ Los enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de distintas comunidades árabes y no árabes –principalmente debido a disputas por la propiedad de las tierras o el acceso a los recursos–, las acciones de las milicias progubernamentales Janjaweed integradas en las Rapid Support Forces (RSF) –grupo paramilitar liderado por el general Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti)–, o los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sudanesas y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al Nur (SLM/A-AW), siguieron concentrando las causas principales del mantenimiento de la violencia en la región, que se añade a la situación de desprotección derivada de la retirada definitiva de la UNAMID.

Estas dinámicas de violencia mantuvieron la tendencia del año anterior con relación al desplazamiento forzado en Sudán. Según los datos de ACNUR, **a mediados**

de 2022 más de 844.260 personas se encontraban refugiadas fuera del país debido a la violencia, la mayoría provenientes de la región de Darfur, y 3.036.593 se hallaban desplazadas internas.⁷⁰ Estas cifras colocan al país en el octavo puesto a nivel global, y el tercero en África en relación al número de personas que han abandonado el país por la violencia, por detrás de Sudán del Sur y RDC; y en el noveno a nivel global en cuanto a mayor número de personas desplazadas internas. Asimismo, **Sudán se mantenía entre los diez principales países del mundo en relación con el número de personas acogidas como refugiadas, con 1.112.300 personas procedentes principalmente de las crisis de Sudán del Sur, RCA, RDC o Etiopía**–, siendo el segundo en África por detrás de Uganda (1.489.600 personas acogidas).⁷¹ ACNUR también denunció la persistencia de la crisis humanitaria en el país, que afecta principalmente a las personas desplazadas, debido a los efectos combinados de la violencia en Darfur y Kordofán Sur y Nilo Azul, el aumento del coste de vida debido al efecto dominó de la guerra en Ucrania, el persistente impacto de la pandemia de COVID-19 y la crisis climática. Según datos de OCHA, 15,8 millones de personas se encuentran en situación de necesidad, lo cual representa un tercio de la población del país.⁷²

La retirada definitiva de la misión de mantenimiento de la paz de la UA y la ONU en Darfur (UNAMID) a principios de 2021, cuyo mandato –proteger de la población civil, facilitar el acceso a la asistencia humanitaria y garantizar la seguridad– fue transferido a una fuerza conjunta para Darfur desplegada por el Gobierno en septiembre de 2021 –compuesta por unos 20.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, el Servicio General de Inteligencia, las RSF, las fuerzas policiales, así como miembros de los grupos armados signatarios del acuerdo de paz de octubre de 2020–, no logró reducir las dinámicas de violencia. En el mes de enero, estas fuerzas fueron acusadas de saquear el antiguo cuartel general de la UNAMID en la capital de Darfur del Norte, El Fasher, robando vehículos y equipos. Días antes, hombres armados habían saqueado en la misma ciudad los almacenes del Programa Mundial de Alimentos, lo que llevó a la agencia a suspender las operaciones en Darfur del Norte. Estos incidentes se saldaron con nuevos enfrentamientos armados entre las fuerzas militares y los grupos armados alrededor de la antigua sede de la UNAMID en El Fasher en el mes de febrero. Posteriormente, en abril enfrentamientos armados entre pastores árabes y miembros de tribus massalit no árabes en la zona de Kreinik, Darfur Occidental,

Sudán se situó como el octavo país a nivel global, y el tercero en África, con mayor número de personas que han abandonado el país por la violencia, siendo a su vez el octavo del mundo en relación con el número de personas acogidas como refugiadas, el segundo en África por detrás de Uganda

69. ACLED, *Dashboard*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

70. UNHCR, *Refugee Data Finger*. [Consultado 31 de enero de 2023].

71. UNHCR, *Mid-Year Trends. 2022*, octubre de 2022.

72. OCHA, *Sudan Situation Report*, 12 de febrero de 2023.

dejaron un balance de al menos 200 personas asesinadas, en lo que representó el peor evento del año. Los enfrentamientos se extendieron posteriormente a la capital regional El Geneina, entre las milicias progubernamentales Janjaweed integradas en las RSF y una milicia local conocida como la coalición de fuerzas sudanesas, liderada por Khamis Abdullah Abakar, gobernador de Darfur Occidental y antiguo líder rebelde. La violencia provocó que más de 37.000 personas tuvieran que huir hacia la frontera con Chad. Si bien la violencia disminuyó en el mes de mayo, en junio se volvió a registrar un rebrote debido a enfrentamientos por la disputa de tierras entre las comunidades no árabe gimir y árabe rizeigat que dejaron al menos 126 muertes, en su mayoría gimir, en el distrito de Kulbus, y dejó alrededor de 50.000 desplazados. En medio de la oleada de violencia, representantes de los grupos rizeigat y misseriya, por un lado, y de grupos árabes y massalit, firmaron entre junio y julio diversos acuerdos de reconciliación en la capital del estado, El Geneina. Estos acuerdos lograron contener en los siguientes meses la violencia en Darfur Occidental y Meridional, contribuyendo a aumentar la estabilidad en la zona. Por otro lado, en Darfur Central, en la zona de Jebel Marra, se registraron enfrentamientos entre facciones del grupo armado no signatario del acuerdo de paz, SLA/AW y las RSF durante todo el año.

Finalmente, en otros aspectos destacados en la región, en el mes de abril se inició el **juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman**, también conocido como “Ali Kushayb”—primer procesamiento que inicia la CPI a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. Abd-Al-Rahman está acusado de 31 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de Darfur que comenzó en 2003, enfrentando a las fuerzas del Gobierno sudanés, respaldadas por las milicias Janjaweed, contra los movimientos rebeldes.

La región meridional sudanesa de Nilo Azul se convirtió en el epicentro de la violencia en la región con 484 muertes producidas por el incremento de la violencia intercomunitaria

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Durante el año se intensificó la violencia y la inestabilidad en la región, principalmente en la región de Nilo Azul, debido a enfrentamientos intercomunitarios.

En 2022 ACLED registró 562 muertes provocadas por enfrentamientos armados en Kordofán Sur y Nilo Azul, la mayoría registrados en el segundo semestre del año que tuvieron como epicentro la región de Nilo Azul con 484 muertes producidas, mientras que en Kordofán Sur se contabilizaron 78 muertes. Estos datos representan un aumento significativo de la inestabilidad con relación al año anterior, cuando se registraron 193 muertes asociadas al conflicto armado, la mayoría de ellas en la región de Kordofán Sur (182). Este incremento de la violencia, que produjo miles de nuevos desplazamientos forzados, se debió al aumento de disputas intercomunitarias, que también se trasladaron a la región de Kordofán Occidental, que registró durante el año 214 muertes, casi la mitad de ellas producidas en el mes de octubre.

Entre los episodios más destacados del año, en **Kordofán Sur** se registraron diversos incidentes debidos, principalmente, a disputas intercomunitarias, aunque de menor intensidad que los producidos en 2021. Entre ellos, destacó el enfrentamiento producido en junio entre miembros de los grupos kenana y hawazma que dejó al menos 19 muertos en la localidad de Abu Jubayhah. El SPLM-N anunció el 18 de agosto la separación del grupo en dos facciones encabezadas por Malik Agar y Yasir Arman. Días después se anunció la creación del Movimiento Revolucionario Democrático del SPLM-N, dirigido por Yasir Arman. Por otro lado, la crisis nacional en el país y el diálogo abierto para lograr la vuelta a la democracia entre la Junta Militar y los partidos opositores bloqueó durante el año el proceso de negociación que mantenía SPLM-N al-Hilu —uno de los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de octubre de 2020— con el Gobierno de Transición, sin que se produjeran avances durante el año.⁷³

73. Véase resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

También la vecina **Kordofán Occidental** se vio afectada por el incremento de las dinámicas de violencia intercomunitaria en el último periodo del año. El 12 de septiembre estallaron enfrentamientos por la demarcación de la tierra en la ciudad de Abu Zabad entre miembros de los grupos hamar y misseriya.

El 19 de septiembre, representantes de ambos grupos firmaron un acuerdo de cese de las hostilidades. Posteriormente miembros de la comunidad hamar organizaron bloqueos de carreteras para exigir la secesión de Kordofán Occidental y la formación de un nuevo estado de “Kordofán Central”. En el mes de octubre se registraron nuevos enfrentamientos entre miembros de grupos misseriya y nuba por disputas territoriales, que dejaron un balance de al menos 19 personas muertas y 34 heridas, y provocaron el desplazamiento de unas 65.000 personas. En diciembre, enfrentamientos protagonizados entre miembros de grupos hamar y misseriya debido al robo de ganado causaron al menos 30 muertes en el área de Abu Koa.

Finalmente, la región de **Nilo Azul** se convirtió en el epicentro de la violencia en la zona después del estallido de la violencia intercomunitaria a mediados de año. En el mes de julio, enfrentamientos ocasionados por disputas de tierras entre miembros de comunidades berti y hausa dejaron al menos 105 personas asesinadas y 30.000 desplazadas, obligando a declarar el estado de emergencia, la imposición del toque de queda y el despliegue de tropas adicionales. Si bien el 3 de agosto se logró la firma de un acuerdo de cese de las hostilidades entre las comunidades implicadas, en septiembre se volvieron a registrar importantes enfrentamientos en la zona. Las tensiones se intensificaron hasta convertirse en otro importante episodio de violencia el 19 de octubre, cuando miembros de la comunidad hausa lanzaron un ataque contra comunidades hamar, funj, berti y gumuz en la localidad de Wad al-Mahi, dejando más de 257 personas asesinadas y 570 heridos. Estos hechos hicieron que el Gobernador del estado de Nilo Azul declarase el estado de emergencia en toda la región por 30 días, y el Ejército nombró un nuevo comandante en el estado con el objeto de contener la violencia.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony (“Agwalek”), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNANA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyo a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Al igual que años anteriores, persistieron las mismas dinámicas de violencia debido a enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, entre las facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO y también debido a la continuidad de episodios de violencia

intercomunitaria que afectaron a múltiples regiones del país. Según datos de ACLED, durante el 2022 se registraron 597 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 1.898 personas (cifras muy similares a las registradas en 2021, cuando se contabilizaron 699 episodios y 1.936 muertes asociadas).⁷⁴ En el último trimestre del año, según denunció la misión de la ONU en el país (UNMISS), se padeció un importante incremento de la violencia en el país que afectó principalmente a población civil, aumentando en un 87% el número de personas heridas en comparación con el mismo período en 2021. **La persistencia de la violencia, los efectos ocasionados por las graves inundaciones que afectaron al país en 2022, las tensiones comunitarias preexistentes, la inseguridad alimentaria, la interrupción de los medios de vida y la crisis económica, incidieron, un año más, en la situación de emergencia humanitaria que padece el país.** El Programa Mundial de Alimentos (PMA) cifró en 6,6 millones de personas –más de la mitad de la población del país– las que se encuentran afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, la desnutrición, el hambre y la violencia, alertando de que las cifras podrían ascender hasta los 7,8 millones de personas durante el primer semestre de 2023.⁷⁵ Anteriormente, el 14 de junio, el PMA había anunciado una reducción de casi un tercio de la ayuda alimentaria al país a pesar de las crecientes necesidades debido a la escasez de fondos y al aumento de los costes. Por otro lado, OCHA también denunció que Sudán del Sur sigue siendo el contexto más violento para los cooperantes, seguido de Afganistán y Siria. En 2022, nueve trabajadores humanitarios fueron asesinados en el país en el desarrollo de sus tareas de asistencia. Además, según los datos de UNHCR, a mediados de 2022 2.362.756 millones de personas se encontraban refugiadas debido a la violencia.⁷⁶

Más de la mitad de la población de Sudán del Sur se encuentra afectada por la inseguridad alimentaria aguda, la desnutrición, el hambre y la violencia

Si bien durante el año se siguió avanzando lentamente en la aplicación del acuerdo de paz de 2018 entre el Gobierno y el SPLA-IO, y se retomaron brevemente las conversaciones de paz de Roma con los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de 2018,⁷⁷ estos espacios fueron **insuficientes para contener la violencia en el país, que estuvo caracterizada por diversos escenarios:** enfrentamientos durante todo el año entre el Ejército de Sudán del Sur (SSPDF) y las fuerzas del Frente de Salvación Nacional (NAS) liderado por el general Thomas Cirillo en la región de Ecuatoria; episodios de violencia intercomunitaria,

principalmente concentrados en los estados de Jonglei, Alto Nilo, Warrap, Lagos, Unidad, Ecuatoria Central, Ecuatoria Occidental, Área administrativa de Abyei y Área Administrativa del Gran Pibor, motivados por tensiones por el acceso a recursos y por robo de ganado; así como enfrentamientos que implicaron al Gobierno, las fuerzas del SPLA-IO leales al vicepresidente Riek Machar y a las distintas facciones surgidas del SPLA-IO. En relación a estas últimas, que fueron en aumento a lo largo del año, en enero se había producido el anuncio de la adhesión de la facción del SPLA-IO Kitgwang, liderada por el general Simon Gatwech Dual –separada del SPLA-IO encabezado por el vicepresidente Machar en agosto de 2021– al Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) firmado en 2018.⁷⁸

Este acuerdo incluía el cese al fuego permanente y generó que Machar ordenase a sus fuerzas del SPLA-IO detener las hostilidades con las fuerzas de Kitgwang. Sin embargo, el cese al fuego no tuvo recorrido, y en el mes de febrero se empezaron a registrar enfrentamientos entre las fuerzas del SPLA-IO leales a Machar y la facción Kitgwang y tropas gubernamentales en los estados de Alto Nilo y Unidad. Estos enfrentamientos motivaron que el SPLA-IO anunciara a finales de marzo su retirada del mecanismo de monitoreo de la paz, mientras que el SSPDF declaró que se encontraba “oficialmente en guerra” contra el SPLA-IO. Posteriormente, en julio, la facción de Kitgwang volvió a padecer una nueva división cuando su líder adjunto, el general Johnson Olony, intentó reemplazar al general Simon Gatwech como líder de la facción. La crisis abierta, que generó una nueva división de Kitgwang en dos grupos encabezados por Gatwech y Olony respectivamente, motivó una nueva escalada de violencia entre las dos facciones en los estados del Alto Nilo y Jonglei, desplazando a miles de personas. Como en otras ocasiones en la guerra en el país, las disputas fueron instrumentalizadas adquiriendo una dimensión étnica-identitaria, motivando enfrentamientos entre miembros de la etnia nuer, a la que pertenece Gatwech, y de la etnia shilluk (agwalek), origen de Olony. La UNMISS desplegó tropas adicionales para disuadir ataques contra civiles y expresó su profunda preocupación por la violencia, instando a las partes a detener los combates. El Gobierno también reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas que combatieron con las tropas agwalek para detener la ofensiva dirigida por el general Gatwech. Sin embargo, a finales de año se mantenían los enfrentamientos armados.

74. ACLED, *Dashboard*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

75. OCHA, *Violent clashes in South Sudan intensify the humanitarian situation*, 29 de diciembre de 2022.

76. UNHCR, *Refugee Data Finger*. [Consultado el 31 de enero de 2023].

77. Véase resumen sobre Sudán del Sur en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

78. Véase en línea.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli; gobierno con sede en Tobruk; grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner; Turquía
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

La situación en Libia durante 2022 se caracterizó por una **creciente polarización y una nueva fractura institucional, en un contexto de dificultades y bloqueo de las negociaciones sobre el futuro del país.**⁷⁹ Este clima de tensión e *impasse* -que se mantuvo hasta finalizar el año y que se evidenció en el establecimiento de dos gobiernos paralelos-, junto con los choques intermitentes entre actores armados en el país, alentaron preocupaciones sobre el devenir político y la situación de seguridad de Libia. **No obstante, en términos generales los niveles de violencia se mantuvieron similares a los del año anterior y muy por debajo de lo observado en períodos previos.** Siguiendo la tendencia registrada desde el acuerdo de alto el fuego suscrito en octubre de 2020, en 2022 se contabilizó la muerte de 157

personas a causa del conflicto armado, según el centro de estudios ACLED. Esta cifra es ligeramente superior a la de 2021, en la que se registraron 115 muertes; pero significativamente inferior a las de 2020 o 2019, años en los que la cifra anual de personas fallecidas a causa de las hostilidades superaba el millar (1.500 y 2.000, respectivamente). Como en años previos, los protagonistas de la violencia fueron grupos armados alineados con los principales bandos en pugna en el país, grupos armados organizados dedicados a actividades ilícitas, y, en menor medida, la filial de Estado Islámico, involucrada en algunas acciones esporádicas. Su líder, considerado responsable del secuestro y decapitación de 21 ciudadanos egipcios en Sirte en 2015, murió en septiembre a manos de grupos armados que controlan el este del país. Durante 2022 Naciones Unidas y grupos de derechos humanos continuaron alertando sobre el impacto de las hostilidades en civiles, el acoso a actores de la sociedad civil por parte de actores armados y los múltiples riesgos que afronta la población migrante y refugiada en el país, sometida a abusos, malos tratos y detenciones arbitrarias.

La incertidumbre respecto a la evolución del conflicto en Libia se había intensificado ya a finales de 2021, tras la suspensión de las elecciones generales previstas para el 24 de diciembre. Ante la no realización de los comicios, algunos sectores pusieron en entredicho la legitimidad del Gobierno de Unidad encabezado por Abdul Hamid Mohamed Dbeibah, escogido en febrero de 2021 en el marco del proceso de paz liderado por la ONU y con el mandato de liderar al país hasta la votación. Así, en febrero, la Cámara de Representantes con sede en Tobruk (este del país) decidió nombrar a Fathi Bashagha como primer ministro interino. Horas antes de esta votación, el convoy de Dbeibah fue atacado por hombres armados. El dirigente resultó ileso en estos hechos, calificados como intento de asesinato. En marzo, Bashagha -al que se atribuyen acuerdos y vínculos con un antiguo rival, el general Khalifa Haftar, figura de referencia en el este del país- designó su propio gobierno, en un proceso contestado y que no contó con reconocimiento de Naciones Unidas. Tanto Dbeibah como Bashagha anunciaron fórmulas y hojas de ruta dispares para celebrar elecciones y resolver la crisis. En los meses siguientes hubo intentos de mediación para acercar las posiciones entre los diferentes bandos, pero en la práctica la fecha límite de junio de 2022 para poner fin a la fase de transición -establecida en el acuerdo de 2020- venció sin que se consiguiera llegar a acuerdos. Paralelamente, los principales actores optaron por una retórica amenazante y belicista y se produjeron varios incidentes que elevaron la tensión. En abril, fuerzas pro Haftar y Bashagha forzaron el cierre de campos de petróleo y gas y terminales de exportación en un intento por debilitar el acceso de Dbeibah a recursos derivados de la venta de hidrocarburos (la producción no se

79. Véase el resumen sobre Libia en *Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2022: Análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona: 2023.

restableció hasta julio). En mayo, Bashagha intentó sin éxito instalar su gobierno en Trípoli y tras enfrentamientos en la capital sus fuerzas acabaron siendo expulsadas de la ciudad por grupos armados leales a Dbeibah. En julio se produjeron una serie de protestas en Trípoli, Benghazi y Tobruk -incluyendo el asalto e incendio de la sede del parlamento en esta última ciudad- que evidenciaron la frustración de la población ante la incapacidad de los dirigentes políticos para llegar a acuerdos y los problemas en las condiciones de vida. **Los hechos de violencia más graves se produjeron en agosto, cuando los peores enfrentamientos en varios años en la capital libia provocaron la muerte de una treintena de personas y heridas a más de 150.** Dos días de choques entre fuerzas alineadas con Dbeibah y Bashagha concluyeron sin que este último consiguiera expulsar al primero de la capital. Durante el segundo semestre Dbeibah consolidó su control sobre Trípoli, aunque se informó de hechos de violencia entre facciones armadas rivales. En los últimos meses del año las principales partes contendientes hicieron demostraciones de fuerza -a través de desfiles militares-, exhibieron una retórica agresiva y algunas informaciones apuntaban a reclutamientos intensivos por parte de ambos bandos. Al finalizar el año la ONU informó de progresos mínimos en torno a una nueva hoja de ruta para sortear la crisis y se hicieron patentes los obstáculos en las conversaciones encabezadas por representantes de los dos parlamentos rivales.

Aunque a nivel general el acuerdo de cese el fuego se mantuvo en vigor, a lo largo de todo el año el clima de confrontación influyó en la evolución de las negociaciones promovidas por la ONU y otros actores internacionales, incluyendo en el ámbito de la seguridad. La crisis política repercutió en el trabajo de la Comisión Militar Conjunta 5+5, integrada por representantes de las principales coaliciones militares rivales -cinco delegados del Gobierno de Acuerdo Nacional, predecesor del Gobierno de Unidad Nacional, y otros cinco vinculados al grupo armado Ejército Nacional Libio, rebautizado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (conocido como LNA o LAAF, por sus siglas en inglés) del general Haftar. En abril, los miembros de la comisión leales a Haftar anunciaron que suspendían su participación en este espacio e hicieron llamamientos a revertir medidas de confianza establecidas en el marco del acuerdo de cese el fuego. La medida se atribuyó a problemas en el pago de salarios a los miembros de LAAF por parte del Gobierno de Unidad Nacional, pero también fue interpretada como un intento por presionar la entrega del poder de Dbeibah a Bashagha. Las reuniones de la Comisión Militar Conjunta se reanudaron a finales de octubre, en Sirte, tras la designación del nuevo representante especial y jefe de la misión de la ONU en el país (UNSMIL), Abdoluaye Bathily, y desembocaron en el establecimiento de un subcomité de DDR. Paralelamente, se continuó trabajando en un plan para el repliegue de mercenarios y combatientes

foráneos, otro de los puntos relevantes que establece el acuerdo de tregua, dada la proliferación de fuerzas extranjeras en el país en los últimos años en apoyo a uno u otro bando y la proyección de intereses de múltiples actores regionales e internacionales en la contienda. Durante el año se informó de la retirada de algunos centenares de mercenarios de diversas zonas del país. Cerca de 300 mercenarios chadianos abandonaron el este de Libia en enero; mientras que en abril un millar de mercenarios sirios pro-Moscú y otros 200 integrantes de la organización paramilitar rusa Grupo Wagner habrían dejado el país. Este último movimiento se atribuyó a las repercusiones de la guerra en Ucrania. Según medios de prensa, en abril unos 5.000 mercenarios pro-rusos permanecían en el país en apoyo a las fuerzas de Haftar. Cabe destacar que durante 2022 también se generaron tensiones por acuerdos económicos y marítimos entre el Gobierno libio con base en Trípoli y Turquía que abren la puerta a la exploración conjunta de petróleo y gas en una zona del Mediterráneo disputada con Grecia y Egipto. Estos acuerdos entre Trípoli y Ankara -que también suscribieron pactos para fortalecer su cooperación en el ámbito militar- motivaron el rechazo de El Cairo, Atenas y la UE.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, grupos surgidos de las FARC, grupos paramilitares
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del *statu quo* mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

En Colombia continuó activo el conflicto armado, aunque el inicio de negociaciones de paz con el ELN, así como

acercamientos con otros grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro llevaron a una reducción de la violencia en el país.⁸⁰

Tras su victoria en las elecciones presidenciales de junio y ser proclamado presidente en agosto, Gustavo Petro señaló como una de sus principales prioridades políticas el diálogo con los diferentes actores armados del país, para poner fin a los diferentes conflictos. No obstante, se siguieron registrando enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones insurgentes, entre las propias organizaciones insurgentes y otros actos de violencia, como persecución y asesinatos de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y activistas ambientales y ataques contra la población civil. La organización Indepaz registró 94 masacres en el 2022, que causaron 300 víctimas mortales. Especialmente grave fue la masacre que tuvo lugar en marzo en Puerto Leguizamo, en Putumayo, en la que murieron 11 personas. El Ejército señaló que se trató de un operativo contra disidentes de las FARC, pero diversas investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos revelaron que entre las personas muertas había civiles, incluyendo un menor y varios líderes sociales. Además, Indepaz señaló que en 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 42 excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz, lo que eleva a 1.413 líderes y defensores asesinados desde septiembre de 2016 -año en que se firmó el acuerdo de paz- y 348 excombatientes asesinados. Por su parte, la defensoría del pueblo señaló que la cifra de asesinatos de personas defensoras y líderes había sido muy superior a la de 2021, ya que en 2022 se produjeron 199 asesinatos y en 2021, 136.

Por otra parte, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia alertaba en agosto del deterioro en la situación humanitaria en el país, con fenómenos como el desplazamiento, confinamiento, uso de artefactos explosivos y desaparición de personas como consecuencia del conflicto. Este deterioro se producía fundamentalmente en algunas regiones del país como Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Sur de Bolívar, la frontera con Venezuela en Norte de Santander y Arauca. Además, el CICR señaló que durante 2022 hubo activos seis conflictos en el país: el conflicto entre el Gobierno de Colombia y el ELN; entre el Gobierno y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); entre el Gobierno y las estructuras de las antiguas FARC-EP no acogidas al proceso de paz, las de Iván Mordisco; entre las AGC y el ELN; entre la disidencia Segunda Marquetalia y las estructuras de las antiguas FARC; y entre esas estructuras y el grupo disidente Comando de Frontera.⁸¹ El centro de investigación CERAC señaló que, si bien los eventos de violencia armada atribuidos

al ELN habían aumentado en su conjunto durante el año, esto se debió a que durante el mes de febrero se produjo una alta concentración de estos eventos. No obstante, excluyendo este periodo, la actividad violenta del ELN se había reducido con respecto al año anterior. Además, también se produjo una reducción en el número de muertes como consecuencia de acciones en las que el ELN tuvo implicación directa. Así, 53 personas murieron en eventos con participación del ELN, un 22% menos que en 2021, cuando murieron 68 personas. Además, OCHA señaló que, si bien se había registrado una tendencia a la baja en los desplazamientos masivos de población, los grupos armados no estatales estaban optando por otras formas de control social de la población civil, como los confinamientos, las restricciones a la movilidad o los desplazamientos individuales.⁸²

Durante todo el año tuvieron lugar enfrentamientos y acciones armadas, pero tras la toma de posesión del nuevo Gobierno se produjeron diferentes anuncios por parte de los actores armados y del Gobierno respecto a posibles acercamientos y diálogos. Sin embargo, coincidiendo con estos anuncios, los grupos armados también incrementaron su actividad violenta, en lo que podrían ser intentos de consolidar su poder territorial para iniciar las negociaciones desde posiciones de mayor fortaleza. A lo largo del año se anunciaron diferentes altos el fuego. El ELN llevó a cabo un alto el fuego entre el 10 y el 15 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas, situación que no se repitió en las jornadas electorales presidenciales, en las que sí se produjeron algunos incidentes violentos. Tras la proclamación de Petro como presidente, el ministro de Defensa anunció que se suspendían los bombardeos aéreos contra los grupos insurgentes. El 19 de diciembre el ELN decretó un alto el fuego entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. El 31 de diciembre el presidente Petro anunció un acuerdo bilateral de cese al fuego con varios grupos insurgentes de seis meses, pero dos días después el ELN negó que se hubiera alcanzado un acuerdo de forma bilateral.

Por otra parte, cabe destacar que el conflicto armado continuó teniendo Venezuela como uno de sus escenarios, y se repitieron los enfrentamientos armados en zonas fronterizas de ambos países, con ataques por parte del ELN y de otros grupos armados insurgentes y criminales y operativos de las fuerzas de seguridad de los dos países. Human Rights Watch (HRW) denunció que había constancia de operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad venezolanas con el ELN. Las zonas de Arauca en Colombia y Apure en Venezuela fueron escenario de múltiples enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente, disidencia de las antiguas FARC. Gentil Duarte, uno de los líderes de las disidencias murió en Venezuela en enfrentamientos. No

80. Véase el resumen sobre Colombia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

81. Catalina Oquendo, La Cruz Roja Internacional: "En Colombia hay seis conflictos armados", *El País*, 9 de agosto de 2022.

82. OCHA, *Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022. Enero - Noviembre de 2022*, 19 de diciembre de 2022.

obstante, tras el cambio de Gobierno y la nominación de Petro como presidente, se produjo un acercamiento entre los dos países, dando fin a la crisis diplomática que se había vivido en los últimos años.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno talibán, Frente Nacional de Resistencia (NRF)
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión "Resolute Support", con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión "Freedom Sentinel". En 2021, tras una importante intensificación de la violencia, los talibanes ascendieron de nuevo al poder y se produjo la retirada de todas las tropas internacionales en el país.

Durante 2022 se produjo la consolidación del poder talibán en Afganistán y aunque persistió la violencia en el país, la situación de conflictividad cambió completamente con respecto a los años anteriores. El conflicto armado en Afganistán pasó a estar centrado en los enfrentamientos entre el Gobierno talibán y la oposición armada protagonizada fundamentalmente por el National Resistance Front (NRF). Además, también se registraron múltiples atentados por parte de ISIS-KP, la rama local de ISIS que actúa en Afganistán y

Pakistán, así como en algunas zonas de la India. Aunque se registraron enfrentamientos, atentados y operaciones militares, **la intensidad de la violencia armada disminuyó considerablemente con respecto a la fase anterior del conflicto** en la que se enfrentaba la entonces insurgencia talibán contra las Fuerzas Armadas afganas y las tropas internacionales desplegadas en el país asiático. Durante el año se produjeron múltiples violaciones a los derechos de las mujeres, como la prohibición del derecho a la educación para las niñas y la prohibición de la participación de las mujeres en todos los ámbitos públicos del país, en una situación que defensoras de los derechos de las mujeres calificaron de apartheid de género. ACLED señaló que durante 2022 se registraron 3.970 muertes como consecuencia de la violencia en el país, muy por debajo de las casi 42.000 personas que murieron en 2021. No obstante, a lo largo de 2022 la situación de seguridad del país se deterioró con respecto a los primeros meses tras la toma del poder por los talibanes y así lo recogió el Secretario General de la ONU en sus informes sobre el país. Naciones Unidas señaló que tenía constancia de la existencia de 23 grupos armados de oposición en el país y que el NRF, el Afghanistan Freedom Front (AFF) y el Afghanistan Liberation Movement (ALM) habían reivindicado acciones armadas en las provincias de Helmand, Kabul, Kandahar, Kapisa, Nangarhar, Nuristan y Panjshir. La actividad del NRF, principal grupo armado de oposición activo en el país, se concentró fundamentalmente en las provincias de Panjshir y Baghlan y el grupo afirmó haber tomado el control de algunos distritos y zonas del país. Aunque los líderes del grupo, establecidos en Tayikistán, demandaron apoyo externo y provisión de armas, la negativa de Rusia a que se transfirieran armas a Afganistán imposibilitaría cualquier apoyo por parte de otros Gobiernos. Ahmad Massoud, dirigente del grupo armado, participó en septiembre en Viena en un encuentro con diversos dirigentes de la oposición política al régimen talibán, organizado por el Austrian Institute for International Affairs. El grupo armado señaló que contaba con 3.000 combatientes. Los enfrentamientos armados se intensificaron con la finalización del invierno y en septiembre las fuerzas talibanes iniciaron una gran ofensiva contra el NRF, en la que afirmaron haber matado a 40 integrantes del grupo armado en la provincia de Panjshir, incluyendo cuatro comandantes, aunque el NRF negó haber sufrido tantas bajas. En octubre y noviembre se produjeron nuevos enfrentamientos incluyendo en zonas cercanas a la frontera con Tayikistán, lo que llevó a un incremento de las tensiones entre ambos países.

Además, aunque Naciones Unidas señaló que se había constatado una reducción en la actividad armada del ISIS-KP y se produjeron menos atentados, esta organización expandió sus acciones a más provincias y se registraron algunos atentados de importancia. En septiembre se produjo uno de los atentados más graves del año, con una explosión suicida en un colegio de Kabul. Se trataba de un centro educativo situado en un barrio habitado mayoritariamente por población hazara,

que ha sido objeto de persecución constante por parte de la organización armada. Naciones Unidas señaló que 53 personas murieron como consecuencia del atentado, la mayoría de ellas, niñas y mujeres jóvenes que estudiaban en el colegio. El atacante hizo detonar los explosivos en un aula ocupada por centenares de estudiantes que preparaban los exámenes de ingreso a la universidad, en la zona en la que se situaban las mujeres. Tras el atentado, decenas de mujeres hazara se manifestaron en las calles en protesta por la persecución que sufren. Seis integrantes del ISKP murieron posteriormente en un operativo de las fuerzas de seguridad afganas contra un escondite del grupo armado en Kabul en el que se produjo un tiroteo. Además, el ISIS-KP también llevó a cabo un atentado contra la embajada rusa en Kabul, en el que murieron seis personas, incluyendo dos diplomáticos rusos y posteriormente, un atentado también en Kabul contra la mezquita Wazir Akbar Khan, en la conocida como *green zone*, barrio donde se sitúan las embajadas, causó la muerte a siete personas y dejó más de 20 heridos.

En Afganistán se produjeron múltiples violaciones a los derechos de las mujeres, en una situación que defensoras de los derechos de las mujeres calificaron de apartheid de género

de seguridad indias y grupos insurgentes durante todo el año y los niveles de mortalidad asociados al conflicto fueron muy similares a los del año anterior, con una ligera disminución. De acuerdo con los datos recopilados por el South Asia Terrorism Portal, un total de 253 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos armados en el estado indio de Jammu y Cachemira, mientras que en 2021 murieron 274 personas. Según los datos de este centro de investigación, la mayoría eran insurgentes, 193. Además, también murieron 30 integrantes de las fuerzas de seguridad indias y 30 civiles. El centro de investigación ACLED registró cifras de mortalidad asociadas al conflicto armado muy similares, señalando que

en 2022 murieron 287 personas, frente a 290 en 2021. Así pues, el conflicto armado se mantuvo en bajos niveles de intensidad. El Gobierno señaló que desde la retirada de la condición de estado a Jammu y Cachemira se había registrado una reducción de la violencia. Sin embargo, los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición fueron constantes a lo largo de todo el año, con numerosas operaciones por parte de las fuerzas indias, que continuaron señalando las infiltraciones en territorio administrado por la India por parte de grupos acusados de proceder de Pakistán. Se produjeron enfrentamientos a lo largo de todo el año y persistió la actividad armada de grupos como LeT –que continuó siendo la organización insurgente más activa–, Hizb-ul-Mujahideen o Jaish-e-Muhammad. No obstante, International Crisis Group (ICG) advirtió de la emergencia de nuevos grupos como The Resistance Front, Kashmir Tigers, People’s Anti-Fascist Front y United Liberation Front of Kashmir. Las fuerzas de seguridad indias señalaron que se trataba de escisiones de LeT y que tenían como principal objetivo eludir la legislación sobre blanqueo de dinero.⁸³ En agosto, tres soldados y dos insurgentes murieron como consecuencia del tiroteo que se produjo después de que un grupo de insurgentes atacara instalaciones de las Fuerzas Armadas indias en el distrito de Rajouri en vísperas de la celebración del Día de la Independencia de la India. En octubre, durante una visita del ministro del Interior indio a la región se produjo la explosión de dos bombas cuya autoría fue atribuida por la policía a LeT.

Además, **cabe destacar que el asesinato de cerca de 20 trabajadores hindúes durante los meses de mayo y junio, varios de ellos trabajadores públicos, en el valle de Cachemira, desembocó en protestas por parte de los trabajadores públicos, que exigieron ser reubicados fuera de esta zona hasta que se pudiera garantizar su seguridad.** Durante la década de 1990, miles de cachemires hindúes –conocidos como pandits–, abandonaron la zona como consecuencia de la violencia

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

Persistió la situación de conflicto armado en Jammu y Cachemira con enfrentamientos entre las fuerzas

83. International Crisis Group, *Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend* Q&A/Asia, 28 de junio de 2022.

que los grupos armados dirigieron contra este grupo de población. Desde 2010 se produjo el retorno de algunas personas a la zona, pero durante 2022 cientos de pandits abandonaron sus lugares de residencia por temor a nuevos ataques y organizaciones como Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti hicieron un llamamiento a que toda la población pandit abandonara Cachemira. También persistieron las tensiones en torno a la nueva legislación electoral que el Gobierno presentó y que estaba pendiente de aprobación desde la retirada de la condición de estado a Jammu y Cachemira. Esta legislación conllevaría una reordenación de los distritos electorales favorable al BJP, partido en el Gobierno, y permitiría que cualquier persona que resida en la región pudiera participar en las elecciones aun sin ser residente permanente, lo que fue interpretado como una maniobra electoral para favorecer al Gobierno. En mayo también se produjeron numerosas protestas después de que un tribunal condenara a cadena perpetua a Yasin Malik, líder del grupo armado de oposición JKLF, que había sido detenido en 2019. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando la situación de represión en la región. El International Press Institute (IPI) señaló que la libertad de prensa se hallaba en grave peligro y denunció las graves restricciones y el acoso a los profesionales de la comunicación desde la retirada del estatus de estado a Jammu y Cachemira. Human Rights Watch (HRW) también denunció las graves restricciones a la libertad de prensa y a la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, así como la impunidad en la que permanecen graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indias y la insurgencia continuó activo, pero se redujo la intensidad de los enfrentamientos, así como la mortalidad como consecuencia de la violencia.

De acuerdo con los datos registrados por el South Asia Terrorism Portal, durante el año 2022 se produjeron 136 muertes en el marco del conflicto armado, casi la mitad de las registradas en los dos años anteriores, cuando murieron 237 (2021) y 239 (2020). No obstante, el conflicto continuó teniendo un importante impacto en la población civil, ya que, del total de personas fallecidas a consecuencia de la violencia en 108 incidentes letales, 53 eran civiles, 15 eran miembros de las fuerzas de seguridad y 68 eran integrantes del grupo armado CPI-M. No obstante, cabe señalar que más de la mitad de las víctimas mortales se produjeron en el estado de Chhattisgarh, donde también se produjeron la mayoría de enfrentamientos, con 62 incidentes violentos durante 2022. Por otra parte, según datos ofrecidos por el Ministerio de Interior indio, los incidentes de violencia naxalita se redujeron en el país un 77% entre 2009 y 2021.

Los datos oficiales también mostraban una reducción del 85% de las muertes en el periodo comprendido entre 2010 y 2021. En este sentido, el director general de la policía, Kuldiep Singh, señaló que se había puesto fin a la presencia naxalita en el estado de Bihar y que las fuerzas de seguridad estaban accediendo a zonas del estado de Jharkhand que anteriormente eran inaccesibles debido a la presencia de la insurgencia. El Gobierno también señaló que la actividad naxalita se había reducido de 96 distritos en 2010 a 46 en 2021. Durante todo el año se repitieron enfrentamientos esporádicos en diferentes estados entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado. Además, persistieron las detenciones de naxalitas, así como los ataques contra civiles acusados de ser informantes de las fuerzas de seguridad y también las muertes de civiles acusados de pertenecer al grupo insurgente. Cabe destacar que en mayo, el ministro jefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, señaló que estarían dispuestos a iniciar un diálogo con la insurgencia naxalita siempre que el grupo armado estuviera dispuesto a entregar las armas y expresar lealtad a la Constitución india.

El grupo armado respondió señalando que podrían iniciar un diálogo siempre que se dieran varias condiciones: la retirada de las fuerzas de seguridad desplegadas en las zonas de conflicto, la puesta en libertad de los líderes del grupo armado detenidos y la revocación de la ilegalización del CPI-M. El Gobierno señaló que el diálogo tendría que ser incondicional.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán (entre ellas, Tehrik-e Taliban Pakistan -TTP), insurgentes internacionales
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno pakistaní con la insurgencia talibán empeoró en 2022 a pesar de las negociaciones entre Gobierno y talibanes y el alto el fuego vigente durante unos meses. Este deterioro se produjo en un contexto de agravamiento de la crisis política y económica que atraviesa el país, con un accidentado cambio de Gobierno fruto de una moción de censura en abril contra el primer ministro Imran Khan y un atentado contra Khan meses después de haber sido depuesto. A esta situación se sumaron las graves inundaciones que sufrió el país como consecuencia del cambio climático y que afectaron a millones de personas. Según las cifras de Naciones Unidas al menos 1.700 personas murieron, cerca de 13.000 resultaron heridas –entre ellas al menos 4.000 menores– y casi 8 millones de personas tuvieron que desplazarse. Con respecto al conflicto armado, de acuerdo con las cifras recogidas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2022 murieron 1.714

El conflicto armado se deterioró en Pakistán a pesar del intento de negociaciones, en un contexto de grave crisis política e impacto del cambio climático

personas como consecuencia de la violencia y los diferentes conflictos en el país. Este balance representa un repunte con respecto a las cifras de mortalidad por la violencia armada con respecto al año anterior. El centro de investigación ACLED constató un aumento de los eventos violentos durante el año, especialmente los enfrentamientos armados, así como un incremento en las cifras de mortalidad, que fueron de 2.995 personas muertas en 2022 en el conjunto del país y 1.241 en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, frente a las 457 muertes registradas en esta zona en 2021. Las zonas fronterizas con Afganistán, y especialmente Khyber Pakhtunkhwa, fueron las más afectadas por la violencia, y epicentro de la acción armada de la insurgencia talibán y de las operaciones por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Les siguió la provincia de Baluchistán, donde se registró violencia tanto por parte de los talibanes como de la insurgencia baluchi.

El año se iniciaba con una escalada de la violencia en el país como consecuencia del fortalecimiento de la insurgencia talibán después del ascenso de nuevo al poder de los talibanes afganos en 2021. Pakistán acusaba a Afganistán de servir de base para las operaciones del TTP en suelo pakistaní y se incrementaron las tensiones entre ambos países por la construcción de una valla en la frontera por parte de Pakistán. Los distritos de Dera Ismail Khan y Waziristán Sur fueron escenario de atentados y enfrentamientos en enero en los que resultaron muertos policías, soldados e insurgentes. En febrero prosiguieron las acusaciones de Pakistán a Afganistán y cinco soldados resultaron muertos en el distrito de Kurram después de un ataque por insurgentes que habían llegado a Pakistán desde Afganistán. En abril se constató una importante escalada en el conflicto cuando drones de las fuerzas de seguridad pakistaníes llevaron a cabo ataques contra emplazamientos que servían de refugio al TTP en las provincias de Khost y Kunar en Afganistán. Estos ataques pakistaníes en territorio afgano se habrían producido ante la intensificación de la ofensiva talibán contra objetivos militares pakistaníes y en los días previos siete soldados pakistaníes murieron como consecuencia de un ataque talibán en Waziristán Norte. Los ataques de los drones pakistaníes habrían provocado la muerte de al menos 47 civiles. Tras esta escalada de la violencia se produjo un anuncio de alto el fuego de diez días en el marco de la festividad religiosa de Eid. En junio Gobierno y TTP, con la mediación del Gobierno afgano, acordaron convertir en indefinido el alto el fuego. No obstante, a lo largo de los siguientes meses persistieron las operaciones de seguridad contra la insurgencia, así como los enfrentamientos y ataques contra las fuerzas de seguridad por parte de los talibanes. Khyber Pakhtunkhwa fue escenario de numerosos episodios de violencia en los que resultaron muertos insurgentes e integrantes de las fuerzas de seguridad.

Después de que el TTP anunciara el 28 de noviembre que ponía fin al acuerdo de alto el fuego que había acordado con el Gobierno, se recrudeció la violencia. Tras el anuncio de reinicio del conflicto, se produjeron diferentes atentados en varias zonas del país que causaron decenas de víctimas mortales y algunos de ellos fueron atribuidos al TTP. El grupo apuntó a las operaciones militares por parte de las fuerzas de seguridad como motivo principal para poner fin al alto el fuego y en el comunicado en el que se produjo el anuncio hizo un llamamiento a los insurgentes a llevar a cabo atentados siempre que pudieran y donde pudieran. No obstante, el 6 de noviembre el TTP había llevado a cabo uno de los ataques más mortíferos de los últimos meses, cuando seis policías murieron en el transcurso de una emboscada talibán en el distrito de Lakki Marwat en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Previamente a este atentado se habían producido otros de menor gravedad y la población local había denunciado un incremento en las extorsiones y que la insurgencia talibán se estaba reagrupando en las antiguas áreas tribales. Tras la ruptura del alto el fuego se incrementó también la violencia en la provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán y que durante décadas sirvió de refugio para los talibanes afganos, además de ser escenario de otro conflicto entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y la insurgencia nacionalista baluchi.

Con respecto a la actividad de ISIS en el país, en marzo tuvo lugar el mayor atentado perpetrado por esta organización en Pakistán, cuando un ataque suicida llevado a cabo por ISIS-KP (rama de ISIS que opera en la denominada provincia de Khorasan) contra una mezquita chií causó la muerte de 63 personas en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, e hirió a otras 200. En diciembre, las fuerzas de seguridad afirmaron que habían matado a cuatro integrantes del ISIS-KP cuando trataban de infiltrarse desde Afganistán. El enfrentamiento se produjo días después de un atentado contra la embajada pakistaní en Kabul que fue atribuido al ISIS-KP, dirigido contra el Embajador y en el que una persona resultó herida.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Síntesis:	Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948,

1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Continuó activo el conflicto armado en la provincia de Baluchistán, que enfrentó a las fuerzas de seguridad pakistaníes con la insurgencia nacionalista baluchi. Durante el año se registró una intensificación del conflicto, con numerosos enfrentamientos que se repitieron durante todo el año y el uso de armamento pesado. Nuevamente la presencia en la provincia de actores económicos chinos fue uno de los ejes del conflicto y se produjeron ataques contra personal e instalaciones chinas en Pakistán. Además, persistieron las denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en la provincia, así como de impunidad por parte de actores criminales e inacción de las fuerzas de seguridad frente a esta criminalidad. Asimismo, los actores insurgentes baluchis estarían teniendo acceso al armamento que las fuerzas de seguridad afganas abandonaron tras la toma del poder por los talibanes, lo que habría incrementado su capacidad operativa. Por otra parte, Baluchistán resultó especialmente afectada por las graves inundaciones que se produjeron en el país en agosto, como consecuencia del impacto del cambio climático y más del 60% de las viviendas destruidas en el país se hallaban en esta provincia. De acuerdo con las cifras registradas por ACLED, durante 2022 se produjeron 705 muertes en la provincia de Baluchistán como consecuencia de la violencia. Por su parte, el Center for Research and Security Studies de Pakistán, señaló que durante 2022 hubo 254 víctimas mortales en Baluchistán como consecuencia de la violencia. No obstante, cabe señalar que parte de los eventos violentos que tuvieron lugar en Baluchistán fueron obra de actores armados como el grupo armado talibán TTP, que también opera en esta provincia. El grupo armado baluchi BLA continuó siendo la organización insurgente más activa de la provincia y durante 2022 llevó a cabo varias acciones destacadas que provocaron numerosas víctimas, fundamentalmente entre las filas de las fuerzas de seguridad pakistaníes. El año comenzaba con varios ataques simultáneos perpetrados por el BLA en varios distritos. Así, el 2 de febrero el grupo atacó un campamento militar en el distrito de Panigur, dando lugar a un enfrentamiento en el que murieron seis insurgentes y tres soldados y también llevó a cabo un ataque contra un puesto de control en el distrito de Nushki en el que murieron nueve insurgentes y cuatro soldados. En abril se

produjo el primer ataque suicida por parte de una mujer reivindicado por el BLA contra un centro cultural chino en la universidad de Karachi, en el que resultaron muertos tres profesores chinos. También en abril el BLA llevó a cabo otro atentado con bomba contra un convoy militar en Baluchistán en el que resultaron muertos cuatro soldados. El BLF se enfrentó a las fuerzas de seguridad en el distrito de Panjgur y afirmó haber causado la muerte a nueve soldados. Según recogió ACLED en el enfrentamiento se había usado misiles y otras armas pesadas. De nuevo se utilizaron misiles en otros ataques que llevó a cabo el BLA en mayo, contra un puesto de control y las oficinas de los servicios de inteligencia pakistaníes en la ciudad de Kharan en los que resultaron muertos cinco miembros de las fuerzas de seguridad. En julio el BLA secuestró a un teniente coronel y un familiar suyo y posteriormente ejecutaron al militar mientras se llevaba a cabo una operación para rescatarlo, en la que murieron nueve insurgentes y un soldado. En agosto se produjo un nuevo atentado que evidenció la intensificación del conflicto, cuando la coalición de grupos armados BRAS reivindicó haber derribado un helicóptero militar utilizando armamento antiaéreo en el distrito de Las Bela. No obstante, las Fuerzas Armadas negaron que se tratara de un ataque y señalaron que el helicóptero había tenido un accidente debido al mal tiempo. Seis miembros de las fuerzas de seguridad murieron como consecuencia del incidente.

En Filipinas, a finales de año murió por enfermedad Jose Maria Sison, el líder y fundador del Partido Comunista de Filipinas y del grupo armado NPA

Los numerosos enfrentamientos que siguieron registrándose en varias provincias del país entre las fuerzas de seguridad del Estado y el NPA provocaron la muerte de como mínimo 160 personas, pero a finales de 2022 el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas declararon la victoria estratégica del Estado sobre el movimiento insurgente comunista. Tal afirmación se basa en los datos difundidos en noviembre por parte del Gobierno, según los cuales el número de frentes militares activos del NPA se habría reducido en más de un 75% desde el año 2016. Así, si en julio de 2016 el NPA tenía -según el Gobierno- 89 frentes activos en todo el país, en septiembre de 2022 tenía solamente cinco efectivamente activos (principalmente en Northern Samat y South Cotobato), habiendo otros 19 frentes que el Estado consideraba sumamente debilitados y en proceso de ser desmantelados. Según estos mismos datos gubernamentales, el número de combatientes activos del NPA se había reducido hasta los 2.112, una cantidad claramente inferior a la de los últimos años y a la del cénit del movimiento comunista en los años ochenta, en los que se estima que el NPA tenía alrededor de 25.000 combatientes. Las Fuerzas Armadas declararon que en los últimos cinco años se había dado muerte, capturado o rendido 10.608 combatientes regulares del NPA y que más de 41.000 personas pertenecientes al movimiento, incluyendo algunas en la clandestinidad, habían dejado de prestar su apoyo al Partido Comunista de Filipinas y al NDF. En el mismo período (2016-2022), según Manila, se habrían “liberado” 2.890 municipios afectados por la violencia y 31.254 pueblos y 1.386 ciudades habrían declarado al NPA persona non grata. En la misma línea, a finales del año el Eastmincom (la estructura del Ejército en Mindanao oriental, una de las regiones con mayor presencia histórica del NPA), declaró que desde 2016 se han “neutralizado” a 4.797 miembros del NPA (rendición de 3.579; captura de 524 y muerte de 403), incluyendo 101 líderes de grupo. En la misma línea, el Eastmincom anunció en diciembre el desmantelamiento oficial de seis frentes guerrilleros del NPA, la mayoría en Davao y Bukidnon.

Por su parte, el Partido Comunista de Filipinas (PCF) negó con rotundidad los datos oficiales y las declaraciones del Gobierno sobre la derrota o el colapso inminente del movimiento insurgente comunista, aunque se negó a dar datos sobre la membresía actual del NPA. Así, durante la celebración del 53º aniversario de la fundación del partido a finales de marzo, el PCF celebró que el Estado no hubiera podido derrotar al movimiento antes de la finalización del mandato de Duterte, tal y como habían asegurado en varias ocasiones las Fuerzas Armadas y el Gobierno durante los últimos años, y a la vez instó al NPA a incrementar el reclutamiento de nuevos efectivos y a aumentar la actividad en las zonas urbanas. El PCF reconoció haber sufrido algunos reveses importantes últimamente y señaló que el Estado había

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

incrementado notablemente sus esfuerzos y operaciones de contrainsurgencia en los últimos años, incluyendo la neutralización de combatientes a través de las llamadas negociaciones de paz localizadas y el ofrecimiento de paquetes de ayudas a la reinserción. En este sentido, en mayo el Departamento de Defensa Nacional declaró que como mínimo 26.414 combatientes del NPA (que el Gobierno denomina oficialmente Grupo Terrorista Comunista) se habían rendido o entregado. En la misma línea, a mediados de año, el Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC, por sus siglas en inglés) recomendó al Gobierno la concesión de una amnistía a combatientes del NPA, una medida que podría beneficiar a entre 8.000 y 10.000 combatientes del NPA. Por su parte, tanto el NDF como el PCF se opusieron tajantemente a las negociaciones de paz localizadas por considerarlas una estrategia de contrainsurgencia destinada a dividir al movimiento revolucionario, a promover la guerra psicológica, a obtener información de inteligencia y a tener un mayor control sobre personas, familiares o comunidades con vínculos con el grupo insurgente. Finalmente, cabe señalar que a finales de año murió por enfermedad Jose Maria Sison, el líder y fundador del PCF y del NPA. Previamente, en el mes de agosto, un enfrentamiento bélico entre las Fuerzas Armadas y el NPA en la provincia de Samar podría haber provocado la muerte de Benito Tiamzon y Wilma Austria, líderes históricos del PCF y del NPA. Según algunas fuentes, en la actualidad ambos ocupaban la máxima dirección del PCF y del grupo armado. Tiamzon y Austria habían sido capturados en 2014, pero habían sido liberados por Duterte para incorporarse a la delegación negociadora del NDF, y tras el colapso de las mismas en 2017 volvieron a la clandestinidad. Sin embargo, a finales de año las Fuerzas Armadas reconocieron no haber podido corroborar la muerte de Tiamzon y Austria.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansar Khilafa, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF

con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

No trascendieron cifras de mortalidad sobre el conflicto que enfrenta al Estado filipino con varias insurgencias de signo islamista en Mindanao, pero varios análisis sugieren que la intensidad y letalidad de los enfrentamientos se redujo en comparación con el año anterior. En el mes de mayo, las Fuerzas Armadas declararon que desde principios de año habían muerto 41 combatientes del BIFF y otros cuatro de Abu Sayyaf. Los principales episodios de violencia se registraron en los meses de marzo, mayo y septiembre. En marzo, después de que el BIFF atacara varios destacamentos militares en Maguindanao, las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva de gran envergadura en 10 municipios que provocaron la muerte de 24 combatientes y el desplazamiento de más de 66.000 personas en la región de Datu Saudi Ampatuan. En mayo, cinco miembros del BIFF murieron durante la contraofensiva del Ejército para recuperar el mercado público de la localidad de Datu Paglas (provincia de Maguindanao), que el grupo ocupó durante varias horas poco después de que el presidente Rodrigo Duterte hubiera visitado un campamento militar cercano. Después de los enfrentamientos, que provocaron la evacuación temporal de parte de la población de Datu Paglas, el presidente instó a la Autoridad Transicional de Bangsamoro (el gobierno provisional de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada por el MILF) a controlar y combatir a los grupos armados que operan en la región para evitar la declaración de una ofensiva de alta intensidad por parte de las Fuerzas Armadas. En fechas parecidas, tres combatientes de Abu Sayyaf fueron abatidos por el Ejército en la localidad de Sumisip, en la isla de Basilan. En el mes de septiembre, 16 combatientes del BIFF (además de un soldado) murieron en varios enfrentamientos en la localidad de Shariff Saydona Mustapha, en la provincia de Maguindanao. Los combatientes formaban parte de la facción del BIFF liderada por Ustadz Karialan, una de las tres principales del grupo. Las otras dos facciones del grupo, lideradas respectivamente por Ismail Abubakar y Abu Turaiife, sí declararon su lealtad a Estado Islámico,

pero Karialan hasta el momento no lo ha hecho. El Ejército declaró que no estaba claro si el comandante Karialan se hallaba entre las personas que murieron. En este sentido, cabe señalar que durante el año murieron dos de los principales líderes del grupo Daula Islamiyah (también conocido como Grupo Maute), Usop Nasif – en abril, cerca de la ciudad de Marawi– y Salahuddin Hassan –en octubre, en la provincia de Maguindanao.

A pesar de todo lo mencionado, tanto el Gobierno como algunos analistas señalaron en varias ocasiones que los distintos grupos armados de signo islamista que operan en Mindanao cada vez están más debilitados. Según el Gobierno, tras los graves enfrentamientos entre el Estado y varios grupos armados que tomaron durante varios meses la ciudad de Marawi en 2017, el Estado ha incrementado de manera drástica y sostenida su presión militar contra dichos grupos, lo que habría comportado, entre otras cosas, el debilitamiento de sus fuentes de apoyo y financiación internacional, la reducción de las áreas de control o influencia de estos grupos, o el incremento en el número de desertiones, rendiciones o capturas de combatientes, lo que a su vez habría proporcionado valiosos datos de inteligencia sobre la actividad de los grupos. A finales de septiembre, el Gobierno declaró que unos 300 combatientes del BIFF se habían rendido desde principios de año. Además, en 2021 las Fuerzas Armadas tomaron algunos de los principales campamentos del BIFF o Abu Sayyaf. Según algunos medios de comunicación, en 2021 el BIFF atacó un mercado para abastecerse de alimentos, mientras que Abu Sayyaf habría atacado a población civil también para conseguir comida, un *modus operandi* que no era habitual tiempo atrás. Según estas mismas fuentes, el incremento de los ataques suicidas que se registró en la región desde el año 2019 podría guardar relación con este creciente debilitamiento de dichos grupos, al ser considerada una estrategia militar mucho más barata y efectiva que tratar de confrontar militarmente a las Fuerzas Armadas en pie de igualdad. En este sentido, en diciembre de 2021 el Gobierno detuvo a nueve mujeres presuntamente vinculadas a Abu Sayyaf (entre ellas tres hijas de Hatib Hajan Sawadjaan, líder de Abu Sayyaf que murió en julio de 2020) acusadas de querer perpetrar atentados suicidas. Además, otras fuentes sugieren que las medidas de restricción de la pandemia de la COVID-19 estarían dificultando la llegada de combatientes extranjeros a Mindanao, un flujo que se habría incrementado tras el debilitamiento de ISIS en Siria e Iraq.

Finalmente, algunos análisis señalan que el establecimiento de la Región Autónoma de Bagsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada de manera transitoria hasta 2025 por el líder del MILF, Ebrahim Murad, habría erosionado también la legitimidad y membresía de los grupos armados que se oponen al acuerdo de paz de 2014. De hecho, en febrero el propio Ebrahim Murad declaró públicamente estar en conversaciones

con dos de las tres principales facciones del BIFF para que unos 900 combatientes se unan nuevamente al MILF y apoyen los esfuerzos del gobierno de transición. El BIFF se escindió del MILF por su oposición a las conversaciones de paz que desembocaron en el acuerdo de paz de 2014. En mayo, sin embargo, la Autoridad de Transición de Bangsamoro declaró que el Gobierno no entablará negociaciones con las facciones del BIFF, Abu Sayyaf o Daula Islamiyah que ya han rechazado cualquier posibilidad de diálogo o cooperación con el Gobierno de Bangsamoro.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado se agudizó en Myanmar durante el año y se intensificaron los enfrentamientos tanto entre el Ejército y varios grupos armados étnicos, como entre las fuerzas armadas y las Fuerzas de Defensa Popular (PDF por sus siglas en inglés, grupos armados surgidos tras el golpe de Estado militar de 2021). Según ACLED, a lo largo del año murieron 19.324 personas como consecuencia de la violencia armada, una cifra considerablemente superior a la de 2021, cuando murieron 10.362 personas. Además, el número de eventos violentos pasó de 6.800 en 2021 a 9.282 en 2022. Naciones Unidas alertaba del grave deterioro en

la situación humanitaria del país como consecuencia de los desplazamientos forzados y la inseguridad alimentaria.⁸⁴ A finales de diciembre de 2022, la cifra de personas desplazadas internas en el país era de 1,5 millones de personas, lo que representaba más del doble del número de personas desplazadas un año antes, cuando había 660.000 personas desplazadas. Esta cifra incluía 330.400 personas que vivían en una situación de desplazamiento prolongado como consecuencia de conflictos anteriores, la mayoría de ellas en el estado Rakhine. El conflicto y la inflación tuvieron un importante impacto en la población civil, con más de 15 millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria moderada y severa, 13 millones más que el año anterior. Además, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar afirmó que desde el golpe de Estado las fuerzas de seguridad habían matado a más de 2.000 civiles y detenido a más de 14.000, incluyendo 1.400 niños y niñas.

El año se iniciaba con una escalada de la violencia en el estado Kayah, después de la masacre que había tenido lugar el 24 de diciembre de 2021 y en la que las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a más de 30 civiles. Los enfrentamientos entre el grupo armado KNDF y el Tatmadaw (Fuerzas Armadas del país) forzaron el desplazamiento de 60.000 personas (algunas fuentes señalaron que podrían haberse desplazado hasta 170.000 personas). También se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el KNDF en alianza con grupos de PDF (Fuerza de Defensa Popular, grupos armados surgidos tras el golpe de Estado militar). Estos enfrentamientos se repitieron durante todo el año. Otra de las zonas más afectadas por el conflicto y en la que se produjeron intensos enfrentamientos armados fue la región de Sagaing, epicentro de los enfrentamientos entre el Tatmadaw y las PDF con apoyo de grupos armados étnicos como el KNU. Miles de personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de las operaciones militares, que en muchas ocasiones provocaron la destrucción de hogares debido a los bombardeos aéreos y al fuego de mortero. Además, en esta zona – igual que en otras del noreste del país– se produjeron importantes restricciones de la movilidad, con puntos de control y bloqueos de carretera, que dificultaron en gran medida el acceso de ayuda humanitaria a la población afectada por la violencia armada, provocando situaciones de vulnerabilidad y aislamiento de la población civil. En el estado Rakhine y el sur del estado Chin se intensificaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición AA a partir del mes de agosto, tras la ruptura de un alto el fuego que se había alcanzado en 2020 después

Se intensificó el conflicto armado en Myanmar, con enfrentamientos armados entre el Ejército de la Junta Militar y los grupos armados étnicos y las Fuerzas de Defensa Popular, con graves consecuencias humanitarias

de años de intensos enfrentamientos. En esas áreas se produjeron intensos enfrentamientos que provocaron el desplazamiento de miles de personas –23.000 entre agosto y noviembre según los datos recogidos por OCHA– y el Tatmadaw llevó a cabo bombardeos aéreos en diversas zonas de los dos estados. Además, se desplegaron miles de efectivos militares adicionales en la zona, provocando grave inseguridad entre la población civil. No obstante, a finales de noviembre se logró alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego de carácter informal, que se mantenía vigente al finalizar el año, aunque su situación era de enorme fragilidad. La negativa del AA a unirse a las conversaciones con los grupos armados étnicos propuestas por la Junta militar, así como los contactos mantenidos con el Gobierno de Unidad Nacional –gobierno conformado por la oposición al régimen militar tras el golpe de Estado–, habrían motivado la escalada militar en agosto, tras meses de tensiones entre AA y Tatmadaw. El estado Kachin también se vio gravemente afectado por la violencia y desde el mes de octubre se produjo una importante

escalada en los enfrentamientos, después de que un bombardeo del Tatmadaw en Hpakant causara la muerte de al menos 60 personas, gran parte de ellas integrantes del grupo armado de oposición KIA, incluyendo varios de sus dirigentes. El ataque contra el grupo armado se produjo mientras este celebraba el 62º aniversario de su fundación y desembocó en una escalada de la violencia en los meses posteriores. Además, también se registraron enfrentamientos armados en los estados Kayin, Shan y Mon, que ocasionaron destrucción de infraestructuras básicas y desplazamiento de población civil.

En lo que respecta a la situación de derechos humanos y política en el país, **continuó la represión de la oposición política al régimen militar con miles de detenidos**. Al finalizar 2022 más de 13.000 presos políticos seguían detenidos en el país y 2.688 activistas y opositores políticos habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad, según los datos proporcionados por la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP). Se produjo el traslado a prisión y el confinamiento en aislamiento de Aung San Suu Kyi, que permanecía bajo arresto domiciliario tras su detención después del golpe de Estado perpetrado en febrero de 2021. Al finalizar el año, un tribunal militar amplió siete años más la pena impuesta a la dirigente birmana por cinco cargos de corrupción adicionales, lo que elevó a 33 años de prisión la condena total que cumple en la cárcel de Naypyitaw. El régimen militar anunció también la prórroga del estado emergencia hasta 2023. Tras el golpe de Estado de 2021, las autoridades militares impusieron el estado de emergencia y anunciaron elecciones para 2023, que podrían celebrarse en

84. OCHA, *Myanmar Humanitarian Update No.25*, 30 de diciembre de 2022.

agosto, sin que se concretase la fecha. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre el país con el voto favorable de 12 miembros y la abstención de China, Rusia e India. La resolución 2669 efectuaba un llamamiento al cese de la violencia en el país al tiempo que expresaba la preocupación de los integrantes del Consejo por las acciones del régimen militar de Myanmar. Se trata de la primera resolución sobre el país desde 1948, ya que el veto de China y Rusia había impedido en anteriores ocasiones que el Consejo de Seguridad se pronunciara sobre la situación en el país asiático. La resolución demandaba la puesta en libertad de todas las personas detenidas de forma arbitraria en el país.

Aunque el Gobierno tailandés sostiene que la notable reducción de la violencia en los últimos años se debe a su gestión del conflicto, algunas voces señalan que hay otros factores explicativos, como el impacto de la COVID-19 o las negociaciones de paz con el BRN

los que 7.344 personas murieron y 13.641 resultaron heridas en las tres provincias de Yala, Pattani y Narathiwat y en cuatro distritos de la provincia de Songkhla. El 52% de las víctimas eran budistas y el 45% musulmanas, y el 15% de las mismas eran mujeres. En términos comparativos, los niveles de violencia en el sur del país se han reducido drásticamente desde 2007, año en el que esta alcanzó su cénit (892 víctimas mortales y 1.670 heridos). En la última década, la violencia también ha experimentado un marcado descenso. Así, en 2012 se registraron 1.850 episodios de violencia (una media de más de 5 al día) en los que 507 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas. El descenso de la violencia se hizo todavía más pronunciado

desde el año 2020, en el que 116 personas murieron (en comparación con las 180 que lo hicieron a lo largo de 2019). Aunque el Gobierno sostiene que la evolución descendente de la violencia se debe principalmente a su gestión del conflicto, varios medios de comunicación también señalan que hay otros factores explicativos, como el impacto de la pandemia de la COVID-19 o bien el inicio de las negociaciones de paz directas entre el Gobierno y el BRN a principios de 2020. A lo largo de dicha negociación, una de las principales demandas del Ejecutivo al BRN habría sido la reducción de la violencia y la demostración de que las personas que representaban al grupo en la mesa de negociación tenían una incidencia real sobre las decisiones militares del grupo y sobre los niveles de violencia en el terreno. En este sentido, uno de los hechos más importantes del año 2022 en cuanto a las dinámicas del conflicto fue la tregua (denominada Iniciativa de Paz de Ramadán) que el Gobierno y el BRN acordaron del 3 de abril al 14 de mayo, y que en términos generales no observó violaciones significativas del alto el fuego. Posteriormente, en una nueva ronda de negociación a principios de agosto, el Gobierno propuso una nueva tregua de tres meses y medio (del 15 de agosto al 30 de noviembre), pero esta propuesta fue rechazada por el BRN.

Otro de los aspectos del conflicto armado más relevantes del año fue la reaparición del grupo armado PULO, una de las insurgencias históricas en el sur de Tailandia pero que no había protagonizado ninguna acción armada desde el 2016. El 15 de abril, precisamente cuando expiraba la tregua acordada entre Bangkok y el BRN, una persona murió y tres policías resultaron heridos tras estallar dos artefactos explosivos de manera simultánea en el distrito de Sai Buri (provincia de Pattani). Kasturi Mahkota, uno de los líderes del grupo, declaró que el atentado buscaba reivindicar que las conversaciones de paz deberían llevarse a cabo con otros grupos armados y no solamente con el BRN. PULO era uno de los grupos insurgentes que participó en MARA Patani, la organización paraguas de distintos grupos en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana que entre mediados de 2015 y finales de 2019 entabló

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En paralelo a la evolución positiva de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el BRN, y en paralelo a la reducción clara y sostenida de la violencia que ha experimentado el sur de Tailandia en los últimos años, en 2022 se redujeron sustancialmente el número de ataques y episodios armados. Aunque el Gobierno no ofreció cifras oficiales sobre las víctimas mortales derivadas del conflicto armado, el centro de investigación Deep South Watch señaló que entre enero y finales de marzo habían muerto 30 personas y otras 57 habían resultado heridas. Según datos de este mismo centro, desde enero de 2004 hasta marzo de 2022 se han registrado 21.485 incidentes violentos en

negociaciones con el Gobierno tailandés. Posteriormente, a principios de julio, las Fuerzas Armadas mataron en la provincia de Yala a dos combatientes y detuvieron a otros cinco miembros del PULO, que según Mahkota cuenta con cinco unidades en el sur de Tailandia. En cuanto al BRN, uno de los episodios de violencia que tuvo mayor repercusión política y mediática fue el ataque simultáneo a mediados de agosto contra 17 objetivos de las tres provincias sureñas fronterizas con Malasia -principalmente tiendas y gasolineras-, en el que una persona murió y otras siete resultaron heridas. El BRN reivindicó la autoría de los atentados, lamentó la pérdida de una vida y señaló que los comercios que habían sido atacados, que según algunos medios podrían ser regentados por sectores cercanos al Gobierno, dañaban a la economía local. Aunque algunos medios de comunicación calificaron los hechos como el ataque coordinado más importante de los últimos años en el sur de Tailandia, el jefe del panel negociador del Gobierno lamentó los hechos, pero señaló que estos no provocarían la interrupción de las negociaciones. A finales de noviembre, un policía murió y entre 31 y 45 personas resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo improvisado en un bloque de apartamentos que albergaba a policías y sus familias en el distrito de Muang (provincia de Narathiwat). Tras este atentado, el Gobierno renovó el decreto de emergencia en la mayor parte de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Rusia - Ucrania	
Inicio:	2022
Tipología:	Gobierno, Territorio Internacional
Actores:	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
Rusia bajo liderazgo de Vladimir Putin inició en febrero de 2022 una invasión militar contra Ucrania, que resultó en la ocupación militar de áreas del sur y este del país, y afectó a otras zonas también con bombardeos y ataques, y generó graves impactos en seguridad humana, como desplazamiento forzado masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violencia sexual, inseguridad alimentaria y energética, entre otros. La invasión de estuvo precedida de ciclos anteriores de conflicto y de diálogo fallidos: protestas antigubernamentales entre finales de 2013 y principios de 2014 que llevaron a la caída del gobierno del presidente Víktor Yanukóvich; anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014 y guerra en el este de Ucrania desde abril de 2014 entre milicias locales apoyadas por Rusia y el Ejército ucraniano. La invasión de 2022 y guerra interestatal transcurrió en torno a la soberanía e

integridad territorial de Ucrania, puesta en cuestión por Rusia con una invasión, contraria a derecho internacional. El antagonismo entre EEUU, la UE y la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro, y la fallida arquitectura de seguridad continental influían también sobre el contexto del conflicto y las perspectivas de resolución. Entre finales de febrero y abril de 2022 Rusia y Ucrania mantuvieron negociaciones político-militares, que resultaron fallidas. La invasión tuvo repercusiones globales multidimensionales, incluyendo entre otros en seguridad alimentaria de países de la región MENA y de África, así como en un orden internacional tensionado y mayor militarización del continente europeo.

Rusia lanzó una invasión militar contra Ucrania en febrero de 2022, que llevó a un conflicto armado interestatal y que causó una grave crisis humanitaria e impactos multidimensionales globales. La agresión, contraria a derecho internacional, desbordó el conflicto armado previo en el este de Ucrania –activo desde 2014– y desmanteló el proceso negociador anterior. Estuvo precedida del despliegue militar masivo de tropas rusas junto a la frontera con Ucrania, incluyendo en Belarús, en los últimos meses de 2021, así como de contactos diplomáticos entre finales de 2021 y principios de 2022 para abordar la crisis, pero que no lograron reconducirla.⁸⁵ El 21 de febrero Rusia decretó el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, acompañado de un discurso presidencial en que Vladimir Putin cuestionó la legitimidad histórica de Ucrania como país independiente. El 24 de febrero Rusia inició la invasión, con el anuncio de Putin de una “operación especial” y de perseguir objetivos de “desmilitarización” y “desnazificación” de Ucrania. Se dio paso a una invasión, guerra y ocupación militar, que al finalizar el 2022 seguía activa y sin perspectivas de resolución a corto plazo. La invasión pivotó en torno al cuestionamiento de Rusia de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Se añadía un contexto de disputa internacional entre Rusia y Occidente, entre otros elementos. En términos de actores, del lado de Rusia combatieron sus fuerzas armadas, incluyendo reservistas movilizadas por decreto, así como mercenarios de la organización rusa paramilitar Grupo Wagner. Ucrania desplegó a su Ejército, ampliado con la activación de las fuerzas de defensa territorial. La declaración de ley marcial por decreto presidencial en Ucrania prohibió la salida del país de los hombres entre 18 y 60 años. La invasión militar causó grave devastación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que entre el inicio de la invasión y el 18 de diciembre de 2022, al menos 8.231 civiles murieron y otros 13.734 resultaron heridos, y que las cifras reales podían ser significativamente más altas. Según ACNUDH, la mayoría de las víctimas civiles se debieron al uso de armas explosivas con efectos en zonas extensas, incluyendo ataques de artillería pesada, sistemas de lanzacohetes múltiples, misiles y ataques aéreos.⁸⁶ Algunas estimaciones situaron en decenas de miles los combatientes fallecidos o heridos en cada

85. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2023.

86. OHCHR, “Ukraine: civilian casualty update 19 December 2022”, OHCHR, 19 de diciembre de 2022.

una de las partes, o incluso superando el umbral de las 100.000 víctimas militares mortales o heridas en cada parte.⁸⁷ A mediados de diciembre, había 5,59 millones de personas desplazadas internas, 7,83 millones de personas refugiadas y 17,7 millones de personas requerían asistencia humanitaria, según datos de OCHA. Las consecuencias en seguridad humana incluían también trauma psicosocial, uso de la violencia sexual como arma de guerra bajo ocupación, incremento de los riesgos de violencia de género y más dificultades para hacerle frente, destrucción de infraestructura civil, como viviendas, la red energética o instalaciones médicas, entre otros impactos.

La invasión rusa se inició el 24 de febrero desde el norte, noreste, este y sur, por tierra, mar y aire. Ucrania respondió a la invasión con la defensa militar. Al inicio de la invasión, tropas rusas asediaron la capital, Kiev, así como otros núcleos, como Chernihiv, Járkov, Jersón y Mariúpol, y tomaron territorio en zonas del norte, este y sur, incluyendo la toma de la ciudad portuaria de Jersón el 2 de marzo. En esta y otras localidades se produjeron protestas ciudadanas contra la ocupación. Entre finales de marzo y principios de abril Rusia retiró sus tropas de la región de Kiev y de otras zonas del norte. Tras la retirada rusa del norte emergieron evidencias de graves vulneraciones de derechos humanos en localidades anteriormente ocupadas como Bucha e Irpin, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de civiles y tortura. En los meses siguientes, los frentes de guerra estuvieron focalizados en el este y sur, si bien Rusia llevó a cabo bombardeos también en otras zonas de Ucrania. En mayo las fuerzas rusas tomaron la ciudad portuaria de Mariúpol (sudeste), bajo asedio ruso desde el inicio de la invasión y que causó una grave crisis humanitaria. Según las autoridades ucranianas, 25.000 personas murieron durante el largo asedio y el 90% de los edificios quedaron destruidos. Su captura implicó para Rusia la conexión de los territorios ocupados del sur y este del país. Ese mes y tras la toma también de Lisichansk (Lugansk), Moscú afirmó tener el control sobre la provincia de Lugansk. En verano tropas rusas ampliaron, aunque de forma limitada, la toma de zonas del Donbás, y se produjeron ataques aéreos de Rusia en áreas alejadas de los frentes de guerra.

El Ejército ucraniano retomó en septiembre el control de la región de Járkov (noreste) en el marco de una contraofensiva militar que forzó la retirada de las tropas rusas de las áreas ocupadas, incluyendo de las localidades de Iziium y Kupiansk, localidades ejes de comunicación. Emergieron en la región nuevos testimonios y evidencias de ejecuciones y tortura de civiles bajo la ocupación y se halló una fosa común en Iziium con al menos 440 cuerpos, incluyendo personas con signos de tortura y

Rusia lanzó una invasión militar contra Ucrania en febrero de 2022, que llevó a un conflicto armado interestatal y que causó una grave crisis humanitaria e impactos multidimensionales globales

menores. Rusia decretó en septiembre la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporíyia y Jersón, tras la celebración de referéndums de independencia a finales de ese mes en las áreas de esas provincias bajo ocupación militar rusa. Además, ese mes anunció el reclutamiento parcial obligatorio de hombres rusos, lo que generó la salida de Rusia de miles de ciudadanos –centenares de miles, según Reuters– para evitar la medida. En octubre una explosión causó daños graves en parte del único puente que conecta la península de Crimea con Rusia, en una acción atribuida a Ucrania, y que fue seguida de ataques de Rusia con misiles contra la capital y localidades de al menos 12 provincias, incluyendo del centro y oeste, contra objetivos civiles como viviendas, oficinas y red energética, con una decena de fallecidos y un centenar de heridos. En noviembre el Ejército ucraniano retomó el control de la ciudad de Jersón. En los últimos meses del año se incrementaron las hostilidades en áreas de Lugansk y Donetsk, incluyendo en la localidad de Bajmut. Un ataque de Ucrania contra una escuela reconvertida en base militar rusa en Makiivka (Donetsk) en la madrugada del 1 de enero de 2023 causó la muerte de decenas de soldados rusos –89 según

Rusia, varios cientos según fuentes ucranianas. A lo largo de la invasión en 2022 Rusia llevó a cabo ataques con cifras elevadas de víctimas civiles, como un ataque en marzo contra un hospital maternoinfantil en Mariúpol, con tres personas fallecidas y 17 heridas, incluyendo menores; un ataque con misil contra la estación de tren de Kramatorsk (Donetsk) en abril, con 60 civiles fallecidos y un centenar de heridos; un ataque contra un centro comercial en Kremenchuk (Poltava) en junio, con al menos 20 civiles fallecidos y medio centenar de heridos; un ataque ruso con misiles a mediados de julio en Vinnitsia, que mató a 23 personas, incluyendo tres menores; un ataque ruso con misiles en septiembre contra un convoy civil cerca de la ciudad de Zaporíyia causó 31 víctimas mortales y más de 80 heridos, entre otros. Además, Rusia intensificó en el último trimestre del año los ataques aéreos contra la red energética, lo que agravó la situación de emergencia energética y humanitaria.

La guerra escaló en diversos momentos en torno a las amenazas de Rusia de uso de todos los medios a su alcance, aludiendo al uso de armas nucleares. Además, las hostilidades en torno a la central nuclear de Zaporíyia –la más grande de Europa y ocupada por Rusia al inicio de la invasión– generaron también riesgos de seguridad. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desplegó una misión permanente en la central y se involucró en diálogo con Rusia y con Ucrania para el establecimiento de una zona de seguridad en torno a la planta, sin que se lograra acuerdo. Por otra parte, Rusia

87. BBC, “Ukraine war: US estimates 200,000 military casualties on all sides”, BBC, 10 de noviembre de 2022.

y Ucrania mantuvieron negociaciones en el ámbito político-militar con apoyo de terceras partes desde el inicio de la invasión y hasta su bloqueo en abril de 2022. Desde entonces, Moscú y Kiev solo mantuvieron abierto el diálogo en el ámbito humanitario, de exportación de cereales y de protección de infraestructura nuclear, con apoyo de terceras partes. Entre los escasos logros, la consecución de un acuerdo en julio de exportaciones de cereales, con participación de la ONU y Turquía.⁸⁸

La invasión y guerra tuvieron dimensión internacionalizada, con la participación de actores internacionales en el suministro de armamento. Países occidentales proporcionaron apoyo militar masivo a Ucrania, incluyendo sistemas de lanzamisiles HIMARS y MLRS, sistemas antitanque Javelin, Stinger y NLAW, misiles antiaéreos, cañones, entre otros, y a finales de año EEUU anunció el envío de una batería de misiles antiaéreos Patriot. Por su parte, Ucrania acusó a Irán de suministrar armamento a Rusia durante la invasión, incluyendo drones de diversos modelos, usados ampliamente en ataques rusos, mientras Irán solo admitió suministros previos a la invasión. En conjunto la invasión fue acompañada de un incremento del militarismo en el escenario global y, específicamente, en países occidentales. En reacción a la invasión, Finlandia y Suecia solicitaron su ingreso en la OTAN -cuestión que a finales de año requería aún de la ratificación por parte de dos miembros de la OTAN, Hungría y Turquía. Ya en 2021 el gasto militar mundial había superado los dos billones de dólares por vez primera, y con una subida del 0,7% respecto al 2020, y las cien principales empresas de armas habían seguido creciendo.⁸⁹ En 2022 gobiernos occidentales anunciaron nuevas medidas de incremento de presupuestos militares y de militarización del continente, denunciadas por organizaciones de la sociedad civil.

La invasión fue respondida con la activación de sucesivos paquetes de sanciones por EEUU, la UE, Reino Unido y otros actores, que incluyeron sanciones selectivas –incluyendo, entre otros, contra Putin y otros altos cargos, empresarios, propietario y comandantes del Grupo Wagner, y también contra entidades como bancos y financieras, empresas militares y aviación-, así como sanciones económicas y de suspensión del acuerdo de facilitación de visados. Entre las sanciones económicas y comerciales se incluía la prohibición en la UE de importación de petróleo crudo ruso por vía marítima y prohibición a navieras y aseguradoras de transportar el crudo si su venta superaba un precio límite impuesto por la UE y el G7. No obstante, el año finalizó sin que las sanciones llevaran a Rusia a finalizar la invasión y sin que generasen impactos económicos de grave envergadura en el país, que se benefició del alza de precios de la energía y de mercados alternativos al occidental, si bien análisis apuntaron a posibles

escenarios de mayores impactos en la economía rusa en fases posteriores. La invasión y sus impactos globales de alza de precios de la energía y los alimentos, entre otros, tuvieron repercusiones en todo el mundo incluyendo en países de la región MENA y de África, agravando situaciones de desigualdad y falta de seguridad humana.

Desde el inicio de la invasión se produjeron iniciativas de respuesta a la crisis humanitaria, llamamientos al fin de la invasión, así como acción en el ámbito de la justicia internacional. La población ucraniana se movilizó masivamente en la respuesta social ante la invasión, involucrándose en el apoyo mutuo, asistencia en acceso a bienes básicos, evacuaciones, búsqueda de personas desaparecidas, entre muchas otras esferas. Activistas de derechos humanos y ciudadanía contraria a la guerra de Rusia y Belarús llevaron a cabo iniciativas contra la invasión y en denuncia de las políticas internas de vulneración de derechos humanos. En el ámbito de la justicia internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició en marzo de 2022 la recopilación de pruebas para una investigación sobre alegaciones pasadas y presentes de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en Ucrania desde 2013. En el ámbito multilateral, la Asamblea General de la ONU condenó la invasión y reclamó la retirada de tropas rusas con una resolución en marzo de 2022 (141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, Resolución A/ES-11/L.1). En otra resolución en noviembre, con menor apoyo, instó a Rusia a pagar reparaciones de guerra a Ucrania (94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones, A/RES/ES-11/1). Actores como China, India, Irán, Pakistán y Sudáfrica se abstuvieron. La invasión tuvo repercusiones en las relaciones internacionales en múltiples ámbitos, incluyendo mayor acercamiento y dependencia de Rusia hacia China y un orden internacional poliédrico más tensionado.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis:	El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistan, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad

88. Véase Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

89. SIPRI, *Resumen del Anuario SIPRI 2022*, Fundipau y SIPRI, 18 de octubre de 2022.

territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto armado entre Turquía y el PKK continuó activo en el sudeste de Turquía y, principalmente, en el norte de Iraq, donde el Ejército turco lanzó nuevas operaciones militares contra el grupo armado kurdo.

International Crisis Group cifró en 434 las víctimas mortales por el conflicto Turquía-PKK en territorio de Turquía y del norte de Iraq (323 miembros del PKK, 92 fuerzas de seguridad y 19 civiles), balance similar al del 2021 (420 fallecidos). **En Turquía, las provincias de Hakkari (77 fallecidos) y Sirnak (43), fueron las más afectadas en términos de víctimas mortales (con 77 y 43, respectivamente), seguidas Diyarbakir (12) y Mardin (11).** En esas y otras provincias (Tunceli, Sanliurfa, Bingöl, Mus, Hatay, Elazig) el Ejército llevó a cabo operaciones militares. Un ataque el 20 de abril con explosivo accionado por control remoto contra un autobús que transportaba guardias de prisión en Bursa (noroeste, cuarta ciudad más grande del país) causó la muerte de un guardia y heridas a otros cuatro. El ataque no fue reivindicado. Días antes Turquía había iniciado una nueva operación militar terrestre y área de Turquía contra el PKK en el norte de Iraq (Operación Garra de Bloqueo). También en esas fechas, Duran Kalkan, miembro del comité ejecutivo del PKK amenazó con una extensión de la guerra a las ciudades de Turquía. Durante el resto de año continuaron produciéndose algunos incidentes armados en áreas principalmente rurales. En diciembre, un atentado con coche bomba contra un minibús de la policía en la provincia de Diyarbakir hirió a ocho policías y a un civil. El ataque no fue reivindicado, mientras el Gobierno acusó al PKK. Por otra parte, durante el año las YPS y YPS-JIN (organizaciones vinculadas al PKK, cuya estrategia es de guerrilla urbana) se atribuyeron diversos ataques.

La mayor parte de los ataques del Ejército contra el PKK se produjeron en el norte de Iraq. En esa región se produjeron 389 de las 434 víctimas mortales de 2022 asociadas al conflicto Turquía-PKK, según ICG. Turquía llevó a cabo diversas ofensivas como la Operación Águila

de Invierno en febrero contra fuerzas kurdas tanto en Iraq (Sinjar y Majmur) y también en el norte de Siria; así como una ofensiva aérea y terrestre en abril contra el PKK en la gobernación de Duhok en el norte de Iraq (Operación Garra de Bloqueo) y que a finales de 2022 seguía activa. En el marco de esa operación, nueve turistas iraquíes murieron y una veintena resultaron heridos, incluyendo un menor fallecido y varios heridos, en un ataque con proyectiles de artillería de Turquía contra una zona vacacional en el distrito de Zakhō. El Gobierno de Iraq condenó el ataque y acusó a Turquía de violación de la soberanía iraquí.⁴⁷ También las autoridades kurdas de Iraq criticaron el ataque e instaron al cese de los enfrentamientos entre Turquía y el PKK. Durante el año también se produjeron hostilidades entre el Ejército turco y las fuerzas kurdas de Siria, YPG, con frecuentes ataques de Turquía en el norte de Siria, así como ataques de las YPG contra objetivos de Turquía en provincias turcas fronterizas con Siria. En noviembre Turquía acusó al PKK y a las YPG de un atentado que tuvo lugar en noviembre en Estambul en una céntrica avenida de la ciudad, que causó seis víctimas mortales y 81 heridos y en días posteriores llevó a cabo bombardeos contra áreas kurdas de Siria, incluyendo cerca de un complejo que alberga fuerzas estadounidenses. Tanto el PKK como las YPG negaron cualquier participación en el atentado de Estambul. En los últimos meses del año Turquía amenazó con una invasión terrestre contra áreas bajo control kurdo en Siria para establecer una franja de separación de 30 kilómetros. Turquía mantuvo sus ataques aéreos, pero no llegó a desplegar la invasión terrestre.⁹⁰

Por otra parte, Turquía mantuvo la persecución policial y judicial contra actores civiles kurdos, incluyendo políticos, periodistas y activistas kurdos, así como contra otros sectores de la oposición política y social y defensores de derechos humanos, con decenas de detenciones. En abril un tribunal condenó a cadena perpetua agravada al filántropo turco y defensor de la democracia y los derechos humanos Osman Kavala y a 18 años de cárcel a otras siete personas, sentencia fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos por considerarla motivada políticamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en junio a Turquía por no garantizar el cumplimiento del dictamen que el TEDH emitió en 2019 requiriendo la puesta en libertad inmediata de Kavala. Durante 2022, otros factores de crisis incluyeron el deterioro económico en el país y la tensión política preelectoral (elecciones parlamentarias y presidenciales en 2023), entre otros. Se produjeron movimientos geopolíticos, como el acercamiento de Turquía a actores rivales como Siria, Israel y Armenia. La guerra en Ucrania proporcionó mayor peso político internacional a Turquía, como actor mediador entre Rusia y Ucrania, así como por su capacidad de veto a la demanda de entrada a la OTAN de Suecia y Finlandia, a las que exigió medidas de mayor persecución contra actores kurdos.

90. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	<p>El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). A partir de 2014 el grupo ha aprovechado el clima de inestabilidad en el país para avanzar en sus objetivos y sus milicianos se han visto involucrados en choques con los al-houthistas, con las fuerzas gubernamentales, con tropas</p>

de EAU y milicias tribales. Desde el ataque de al-Qaeda al USS Cole en 2000, EEUU se ha visto implicado en periódicos ataques contra el grupo. El escenario de conflicto en Yemen también ha favorecido la actividad de ISIS en el territorio.

Durante 2022 **Yemen continuó afectado por un conflicto armado de alta intensidad, que se cobró la vida de al menos 6.721 personas, según los datos de la base de datos ACLED. Esta cifra de letalidad es, sin embargo, significativamente inferior a la observada en los últimos años**, en los que se contabilizaban más de 20.000 víctimas mortales anuales -22.000 en 2021, 20.000 en 2020 y 23.000 en 2019. El descenso en el número de muertes a causa de la violencia en el país se debió principalmente a las consecuencias del acuerdo de alto el fuego entre los principales actores en disputa. La tregua estuvo vigente durante seis meses (2 de abril a 2 de octubre de 2022) y supuso una significativa reducción en las hostilidades, una mayor libertad de movimientos para la población y mejoras en el acceso de combustibles y ayuda humanitaria. El conflicto armado continuó teniendo un gran impacto en la población civil. Según el recuento de la iniciativa Civilian Impact Monitoring Project, desde enero y hasta noviembre de 2022 al menos 716 civiles habían muerto a causa del conflicto armado, mientras que otras 1.602 personas habían resultado heridas. Durante los meses de vigencia de la tregua se observó una importante reducción en las bajas civiles, aunque se produjeron diversos incidentes relacionados con la presencia de armas explosivas en distintas zonas del país. A principios de 2022 se registraron los mayores niveles de violencia en el país. Las hostilidades ya se habían intensificado en los últimos meses de 2021, en el marco de la intensificación de la campaña de los al-houthistas para controlar la zona de Maarib (centro) y los consiguientes enfrentamientos con fuerzas alineadas con el gobierno yemení internacionalmente reconocido y grupos armados que cuentan con el apoyo principal de Emiratos Árabes Unidos (EAU).⁹¹ En enero de 2022, en represalia por los retrocesos en Maarib, los al-houthistas lanzaron ataques armados contra Arabia Saudita y EAU, que generaron una serie de ataques recíprocos, incluyendo numerosas ofensivas aéreas en territorio yemení. Estos hechos fueron interpretados como una señal de los riesgos de expansión regional del conflicto armado y volvieron a alentar duras críticas contra los actores armados involucrados en la contienda por las afectaciones de la violencia en población e infraestructuras civiles. De hecho, **enero fue el mes con mayor número de víctimas civiles en tres años** (234 personas muertas y 432 heridas) y las hostilidades causaron el desplazamiento de miles de personas. Uno de los ataques más cruentos fue

91. En 2022 se observó un mayor protagonismo de grupos como Giant Brigades, que forma parte de las Joint Forces respaldadas por EAU, con acciones en la zona de Hodeidah y Maarib. Durante el año también estuvieron activos grupos de reciente creación, como Happy Yemen Brigades, integradas por combatientes de tribus y salafistas que lanzaron operaciones contra los al-houthistas en las provincias septentrionales de Hajjah y Saada.

perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudita y afectó a un centro de detención en la capital yemení, Sanaa, causando la muerte de 91 detenidos y 236 heridos. En este contexto, en febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó -con las abstenciones de Brasil, Irlanda, México y Noruega- la resolución 2624, renovando las sanciones financieras y de viaje contra actores yemeníes, incluyendo a los al-houthistas como objeto de embargo de armas. EAU, que a partir de enero se incorporó como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, hizo lobby con diversos actores con la intención de designar a los al-houthistas como grupo terrorista.

En paralelo a las hostilidades, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, continuó con sus gestiones diplomáticas con diversos actores para intentar favorecer una salida política al conflicto.⁹² Fruto de esta iniciativa, a finales de marzo las principales partes contendientes acordaron iniciar un alto el fuego de alcance nacional -por primera vez desde 2016- a partir del 2 de abril, coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán. El pacto estableció cinco puntos, incluyendo un alto en todo tipo de ofensivas militares -terrestres, aéreas y marítimas- dentro y fuera de Yemen. Además, los actores armados se comprometían a mantenerse en sus posiciones hasta esa fecha. Así, en los meses siguientes no se produjeron ataques aéreos ni operaciones de gran escala, aunque continuaron registrándose algunos incidentes en las líneas de contacto de los diversos frentes de batalla.

En paralelo, se pusieron en marcha otros aspectos del acuerdo, como la entrada de combustible a través del puerto de Hodeidah, la reanudación de vuelos desde el aeropuerto de Sanaa con dos destinos específicos (Egipto y Jordania) y la continuación de los contactos con el enviado especial para intentar poner fin a la guerra. No se registraron mayores avances en uno de los puntos: las conversaciones para reabrir carreteras, incluyendo la de Taiz, objeto de años de asedio por parte de los al-houthistas. El acuerdo de alto el fuego fue suscrito inicialmente por dos meses y renovado en dos ocasiones, en junio y agosto, pero no en septiembre. El enviado especial de la ONU pretendía entonces que la tregua se extendiera por un plazo de seis meses e incluir una serie de medidas adicionales, incluyendo la liberación urgente de prisioneros y el fortalecimiento de los mecanismos de desescalada del Comité de Coordinación Militar (establecido tras el acuerdo de abril). Los al-houthistas fueron responsabilizados de

la no reedición del alto el fuego por incluir demandas adicionales para su renovación, en especial su pretensión de que sus fuerzas militares fueran incluidas en el pago a los funcionarios públicos. **Diversas voces lamentaron el fin formal de la tregua y destacaron sus impactos positivos**, como la reducción (en torno a un 60%) en el número de muertes por la violencia, la disminución en los niveles de desplazamiento forzado (a la mitad) y una reducción parcial de las personas afectadas por inseguridad alimentaria. Las consecuencias de la guerra de Ucrania y el aumento de precios a nivel global también afectaron a Yemen, importador de combustibles y de alimentos -el país compraba casi 50% del trigo a Ucrania y Rusia. Según OCHA, 17 millones de personas afrontaban inseguridad alimentaria al finalizar el año y más del 80% de la población tenía problemas para satisfacer necesidades básicas, incluyendo alimentación, agua potable y acceso a servicios de salud.

Pese al fin oficial de la tregua, hasta finales de 2022 no se habían reanudado los enfrentamientos de gran escala entre las partes y se seguían cumpliendo diversos aspectos del acuerdo. No obstante, se observaban crecientes hechos de violencia en diferentes frentes, como Maarib, Taiz, Al-Jawf, Lahj y Shabwa. Persistía un clima de incertidumbre por las posibilidades de una nueva escalada, en medio de informaciones sobre la preparación de las partes para nuevas hostilidades y señales de una mayor confrontación en otros ámbitos, como la guerra económica, que se materializó por ejemplo en ataques al-houthistas a infraestructuras petroleras bajo control gubernamental. Si bien las negociaciones auspiciadas por la ONU permanecieron mayormente bloqueadas en el último trimestre, hasta finalizar el año seguía activo el diálogo entre los al-houthistas y Arabia Saudita con facilitación de Omán. Los al-houthistas prefieren a Riad como interlocutor, mientras que Riad desearía encontrar una salida a un conflicto que le está suponiendo altos costes. En el plano político, cabe destacar que, durante 2022, tras el acuerdo de tregua, renunció el presidente yemení Abdo Rabbo Mansour Hadi. El hasta entonces mandatario transfirió sus poderes a un Consejo Presidencial de ocho miembros, representantes de distintas fuerzas que integran el bando anti al-houthista y que habrían sido seleccionados principalmente por Arabia Saudita y EAU.

Durante 2022, continuó en funciones la misión de la ONU en el país, UNMHA, que supervisa específicamente el cese el fuego en el puerto de Hodeidah tras el Acuerdo de Estocolmo de 2018.

En 2022 Yemen registró un significativo descenso en las hostilidades y el número de víctimas mortales de la violencia como resultado de la tregua que estuvo vigente durante seis meses

92. Para más información, véase el resumen sobre Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado que se concentra principalmente en el área del Sinaí en Egipto continuó desarrollándose con niveles de violencia de baja intensidad, similares a los registrados el año anterior. Como en períodos previos, persistieron las dificultades para establecer un balance de personas fallecidas a causa del conflicto debido a informaciones no precisas o contradictorias sobre el número de bajas en las hostilidades. Pese a ello, la base de datos ACLED registró **un total de 272 personas fallecidas en enfrentamientos, como resultado de detonaciones y ataques explosivos y en acciones contra civiles**. La disputa siguió estando protagonizada por miembros de la filial de Estado Islámico (ISIS) en la zona, autodenominada Provincia Sinaí y por efectivos de las fuerzas de seguridad egipcias apoyados por milicias progubernamentales. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos destacaron que estas **milicias integradas por clanes locales, como la Unión Tribal del Sinaí (UTS), se vieron crecientemente involucradas en las hostilidades en 2022**. A pesar de

que el presidente egipcio anunció en abril que las operaciones militares contra la insurgencia en el Sinaí estaban llegando a su fin, los incidentes persistieron a lo largo de todo el año. Las hostilidades se concentraron en el área norte y central del Sinaí, en localidades como Arish, Bir al-Abd, Sheikh Zuweid, Rafah, Al-Gafgafa, Maghara y en Jilbana, un área muy próxima al canal de Suez. A finales de año, en una acción fuera de lo habitual, ISIS también reivindicó un ataque contra policías en Ismailia, al oeste del canal de Suez.

Siguiendo el patrón de años previos, los hechos de violencia se materializaron en ofensivas aéreas, enfrentamientos, emboscadas, ataques con explosivos, atentados suicidas, asesinatos y secuestros, entre otros. **ISIS secuestró a varios civiles y asesinó a personas por su presunta colaboración con el Ejército**. Uno de los ataques más letales del grupo armado se produjo en mayo, cuando una ofensiva contra un puesto militar en la localidad de Qantara, al oeste de Bir al-Abd, acabó con la muerte de entre 11 y 17 soldados, la acción más cruenta reivindicada por ISIS en la zona en dos años. En septiembre, la filial de ISIS sufrió uno de sus mayores reveses del año, después de que una operación militar en colaboración con milicias tribales resultó en el fallecimiento de una decena de combatientes del grupo armado y, días después, en la muerte de dos altos cargos de la organización. Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) confirmó la autenticidad de videos que circulaban en las redes sociales en los que se mostraban al menos tres ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas a manos de milicias y miembros de las fuerzas de seguridad. HRW también denunció que, si bien las autoridades permitieron el retorno de algunas familias expulsadas de la zona en 2021 y 2022, Egipto continuaba incumpliendo sus obligaciones respecto a las personas desplazadas forzosamente del norte del Sinaí en el marco de una campaña masiva de demoliciones de viviendas entre 2013 y 2020, sin que se demostrara la necesidad militar de esta acción ni se estableciesen compensaciones para las familias desarraigadas. En octubre, el Parlamento extendió por otros seis meses el estado de emergencia en el norte del Sinaí.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes Unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

Durante 2022 Iraq continuó siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, con niveles de violencia ligeramente superiores a los observados el año anterior, aunque alejados de los períodos con los peores balances de letalidad a causa de las hostilidades (2003-2008 y 2014-2017). **Según los datos de Iraqi Body Count (IBC), en 2022 perdieron la vida 2.013 personas a causa de múltiples hechos de violencia, incluyendo 740 civiles** (74 menores de edad). La mayor parte de estas víctimas murieron en incidentes atribuidos a ISIS, pero otro grupo falleció en enfrentamientos y disputas entre clanes -un fenómeno creciente- y otra parte en acciones de fuerzas de seguridad y grupos armados afiliados. Según IBC, el total de combatientes fallecidos en 2022 fue de 1.273, incluyendo integrantes de ISIS, miembros del PKK y grupos afines, soldados iraquíes y turcos, miembros de las milicias shiíes Fuerzas o Unidades de Movilización Popular (UMP) y policías, entre otros. **La base de datos ACLED, en tanto, contabilizó un total de 4.477 personas fallecidas en 2022** en enfrentamientos, ataques explosivos, hechos de violencia contra civiles y manifestaciones violentas. El balance de víctimas mortales de 2021 fue de 1.610 y 2.511 según IBC y ACLED, respectivamente. Como en años previos, la violencia en el país estuvo protagonizada por múltiples actores y se vio influida por las tensiones políticas y luchas de poder a nivel interno y por dinámicas regionales e internacionales, que convirtieron al territorio iraquí en escenario de

las disputas entre Irán – EEUU/Israel y de incursiones constantes de Turquía e Irán contra grupos kurdos con bases en el norte del país.

ISIS continuó siendo un actor armado activo en Iraq y perpetró numerosos ataques contra soldados iraquíes, policías, fuerzas de seguridad kurdas (peshmergas) y civiles en diversos puntos del país, incluyendo Anbar, Bagdad, Kirkuk, Diyala, Nínive y Salah al-Din. Las fuerzas de EEUU -que formalmente acabaron su misión de combate en el país, pero que se mantienen con un rol de “asesoría” a fuerzas iraquíes y peshmergas, en especial en la lucha contra ISIS- fueron objeto de ataques con drones en enero, coincidiendo con el segundo aniversario del asesinato en Iraq del comandante iraní de la Fuerza Al-Quds, Qassem Soleimani, en una acción de EEUU. En marzo se produjeron nuevas ofensivas atribuidas a Irán contra instalaciones vinculadas a EEUU e Israel en Erbil, presuntamente como represalia de un ataque israelí en Siria. En mayo, nuevos ataques en Erbil fueron atribuidos a las milicias shiíes UMP. Durante el año también se produjeron enfrentamientos entre fuerzas iraquíes y la milicia yazidí Unidades de Resistencia de Sinjar (conocidas por la sigla YBS), a la que se atribuyen vínculos con el PKK. En lo que respecta a las acciones de Turquía en Iraq, en abril el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan anunció que ponía en marcha una nueva operación contra las posiciones del PKK en el norte de Iraq (denominada “Claw-Lock”). En julio, una ofensiva atribuida a Turquía en un recinto turístico de Duhok, en el Kurdistán iraquí, causó la muerte de nueve personas, hirió a otras treinta y derivó en tensiones diplomáticas entre Bagdad y Ankara. Turquía negó la autoría del ataque y lo atribuyó al PKK, mientras que el gobierno iraquí y el KRG denunciaron este y otros hechos como reiteradas violaciones a la soberanía del país y la región. En noviembre, tras un atentado en Estambul que Turquía atribuyó al PKK, el Gobierno de Erdogan lanzó una nueva ofensiva contra posiciones kurdas en el norte de Iraq y Siria -en el marco de una campaña bautizada como “Claw Sword”) y amenazó con una incursión terrestre.⁹³ En 2022 Teherán también intensificó sus acciones contra fuerzas kurdas iraníes ubicadas en el norte de Iraq, en especial tras el inicio de las protestas en Irán por la muerte en custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini. Los ataques se dirigieron principalmente contra el PDKI y Komala y causaron decenas de víctimas mortales.⁹⁴ EEUU derribó en septiembre uno de los aviones tripulados usados en estos ataques, asegurando que suponía una amenaza para las fuerzas estadounidenses ubicadas en la zona.

La violencia en el país también escaló, sobre todo a partir de mediados de año, como resultado del persistente bloqueo político y las luchas de poder que dificultaron durante meses la formación de un nuevo gobierno. Tras las elecciones de octubre de 2021, resultó vencedora la formación del clérigo shií Muqtada al-Sadr, que inició

93. Véase los resúmenes de Turquía (sudeste) y Siria en este capítulo.

94. Véase el resumen sobre Irán e Irán (noroeste) en el capítulo 2 (Tensiones).

gestiones para conformar un gobierno liderado por su partido. Las negociaciones en 2022 derivaron en una creciente fractura entre las fuerzas shiíes del país, ya que la coalición Shiite Coordination Framework (SCF), que aglutina a diversas fuerzas pro-iraníes y al partido del ex primer ministro Nouri al-Maliki, impulsó la formación de un gobierno alternativo. El cronograma para la designación de presidente, portavoz parlamentario y primer ministro, encargado de la formación del gobierno, se venció durante el primer trimestre sin que hubiera acuerdo en el nombramiento de los cargos. El hecho de que, por convención política, estos puestos se reparten tradicionalmente entre los diferentes grupos étnicos del país, añadió dificultades por las luchas de poder en torno a las designaciones.⁹⁵ Tras la formación de nuevas coaliciones -el bloque de al-Sadr se unió a otros grupos en la Coalition for Saving the Homeland-, varias votaciones fallidas por falta de quórum, e iniciativas de políticos independientes que no prosperaron, la crisis se agudizó. En junio al-Sadr ordenó a los más de 70 parlamentarios de su partido que renunciaran, siendo reemplazados por los segundos candidatos con más votos en la elección, la mayoría de ellos miembros de la SCF. Esta coalición propuso entonces el nombramiento como primer ministro de Mohamed Shia al-Sudani, considerado una figura próxima a al-Maliki, histórico rival de al-Sadr. A finales de julio, seguidores del clérigo shií iniciaron manifestaciones, asaltaron la fortificada Zona Verde de Bagdad y ocuparon el Parlamento para evitar la votación que ratificaría a al-Sudani. La movilización, que luego se trasladó a las afueras del edificio del Legislativo, se prolongó durante un mes, mientras al-Sadr exigía al Poder Judicial la disolución del Parlamento y una nueva convocatoria a elecciones. Esta demostración de fuerza coincidió con la difusión de informaciones que indicaban que al-Maliki estaba armando a grupos en el sur de Iraq para una confrontación con al-Sadr.

El primer ministro en funciones, Mustafá al-Kadhimi, convocó a un diálogo político en el que al-Sadr se negó a participar. Finalmente, tras unas declaraciones críticas del mentor espiritual de al-Sadr -en un movimiento supuestamente orquestado por Teherán- al-Sadr comunicó a finales de agosto su retiro de la política y el cierre de todas las entidades políticas vinculadas a su movimiento. El anuncio motivó nuevas protestas de sus seguidores y una escalada de violencia. **Los enfrentamientos entre las UMP y grupos alineados con la SCF, el ala militar del movimiento de al-Sadr (Saraya Salam) y las fuerzas de seguridad iraquíes, dejaron 30 personas muertas y más de 700 heridas, en los hechos de violencia más graves en Bagdad en varios años.** Grupos armados iraquíes se enfrentaron también en otras localidades del sur del país. La violencia se frenó ldespués de que al-Sadr instara a sus partidarios

a abandonar las calles. Según trascendió, el influyente clérigo chií iraquí Alí al-Sistani habría intervenido de forma discreta para que al-Sadr llamara públicamente a un cese de la violencia. Así, **un año después de los comicios, se conformó el nuevo gobierno**, con la designación del político kurdo Abdul Rashid como presidente -horas antes de su elección el Parlamento volvió a ser atacado con cohetes- y al-Sudani como primer ministro (el suní Mohamed al-Habousi, líder del partido Taqaddum, ya había sido elegido como portavoz parlamentario en enero). La representante especial de la ONU en Iraq y jefa de la misión en el país (UNAMI), que intentó facilitar el diálogo entre las partes, fue abiertamente crítica con los dirigentes iraquíes de todo el espectro político por su falta de voluntad política para poner por delante el interés nacional y por implicarse en luchas de poder que prolongaron el impasse. En noviembre, el nuevo primer ministro iraquí se reunió con el presidente de Irán en Teherán y anunciaron un compromiso para fortalecer la cooperación en seguridad. Al-Sudani también se mostró partidario del mantenimiento de las tropas de EEUU en el país para continuar la lucha contra ISIS.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁹⁶
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

95. Según esta convención política, el presidente es tradicionalmente un político kurdo; el portavoz parlamentario, un suní; y el primer ministro, un shií.

96. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como "internacional" y no como "interno" por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

A lo largo de 2022 la violencia asociada a las políticas de ocupación israelí, enfrentamientos entre israelíes y palestinos y ataques vinculados al conflicto provocaron la muerte de al menos 211 personas, según los datos de OCHA. La letalidad registrada en el último año es relativamente inferior a la de 2021, en el que se contabilizaron 350 muertes. Del total de muertes en 2022, siguiendo la tendencia de años precedentes, la gran mayoría de las personas fallecidas eran palestinas, 190, frente a 21 israelíes en el mismo período. Entre las personas heridas 10.345 eran palestinas y 251 eran israelíes. A diferencia de períodos previos en los que la mayor parte de víctimas mortales se registraba en Gaza, en el último año el mayor número de personas muertas y heridas se concentró en Cisjordania. De hecho, **Naciones Unidas destacó que 2022 se había convertido en el año con más víctimas mortales palestinas en Cisjordania** desde que inició un registro sistemático de las cifras de letalidad en 2005 (152 muertes y 9.909 personas heridas en 2022). Según los datos de la ONU, 2022 también fue el año con más víctimas civiles israelíes desde 2015. Entre las 16 muertes civiles israelíes en 2022 OCHA precisa que cuatro eran colonos, mientras que otras cinco eran integrantes de las fuerzas de seguridad.

El aumento de la violencia en Cisjordania se observó en un contexto de intensificación de las operaciones militares israelíes, prácticamente diarias y caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, y de crecientes acciones de los colonos. Durante 2022, y por sexto año consecutivo, se observó un nuevo incremento en los ataques perpetrados por colonos israelíes y **expertos de la ONU subrayaron que las evidencias de que las fuerzas israelíes facilitan, apoyan y participan en estos ataques dificultan discernir entre la violencia de los colonos y la del Estado israelí.**⁹⁷ La mayor parte de los palestinos y palestinas muertos por las fuerzas israelíes en 2022 se produjo en el marco de incursiones militares israelíes y enfrentamientos en las localidades de Jenín y Nablus (norte), en un contexto en que **también se ha observado un resurgimiento de la resistencia armada palestina.** La campaña militar que Israel ha bautizado como “Break the Wave / Breakwater” se intensificó a partir de marzo, tras una serie de ataques de palestinos en Israel, y ha estado orientada a perseguir a presuntos miembros de grupos armados como las Brigadas al-Quds, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y la Brigada de los Mártires de al-Aqsa, pero también de otras de formación más reciente (2021). Entre ellas las Brigadas de Jenín, que contarían con apoyo de PIJ, las Brigadas de Nablus y Tubas y el grupo denominado Lion’s Den (Nablus), que cobró notoriedad en 2022 y durante el año también protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad palestinas. **En Gaza los hechos de violencia letal más destacados se produjeron en agosto** como resultado de tres días de una ofensiva israelí que formaba parte de

esta misma campaña. 51 palestinos murieron en esta incursión, incluyendo 17 menores de edad. A lo largo del año también se produjeron reiterados incidentes en Jerusalén y Hebrón. En esta última ciudad, en noviembre, miles de colonos que celebraban un festival religioso accedieron a la zona de la ciudad bajo control palestino protagonizando ataques y daños. A finales de noviembre, un ataque en una parada de autobús en Jerusalén provocó la muerte de dos israelíes y dejó una veintena de personas heridas, en el primer ataque de este tipo desde 2016, según informaciones de prensa.

Cabe destacar que durante 2022 causó especial impacto internacional la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh mientras cubría una ofensiva militar israelí en un campo de refugiados de Jenín en mayo. Diversas investigaciones concluyeron que la periodista -de dilatada trayectoria y muy reconocida en Palestina- fue tiroteada en la cabeza por un soldado israelí a pesar de estar claramente identificada como reportera. Tras negar inicialmente cualquier responsabilidad en los hechos, Israel atribuyó la muerte de la periodista a un accidente y descartó iniciar una investigación criminal. La represión de las fuerzas israelíes durante el funeral de la periodista provocó consternación. **Durante el año también continuó la persecución a las organizaciones de derechos humanos palestinas que fueron declaradas como “terroristas” en 2021 por Israel** por sus presuntos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). En agosto, las oficinas de estas entidades fueron objeto de operaciones de rastreo y clausuradas. Expertos en derechos humanos de la ONU y varios países europeos denunciaron la criminalización de estas ONG alertando que Israel no había presentado evidencias creíbles que sustenten sus acusaciones.⁹⁸ Personas vinculadas a estas organizaciones también fueron objeto de persecución. Así, por ejemplo, el abogado franco-palestino Salah Hamouri de la ONG Adameer -especializada en la asistencia a prisioneros palestinos- fue encarcelado en marzo y expulsado a Francia en diciembre. En otro ámbito, y pese a que en 2016 la ONU aprobó una resolución orientada específicamente a detener los asentamientos israelíes en el territorio ocupado palestino (considerados contrarios al derecho internacional), durante 2022 **las autoridades israelíes también continuaron con su política de expansión y anunciaron nuevos planes de construcción de colonias. Israel también persistió en políticas de expulsión de población palestina y demoliciones de viviendas.** En uno de los casos más emblemáticos de 2022, en mayo la Corte de Justicia israelí rechazó las apelaciones contra las órdenes de expulsión de los residentes de la localidad palestina Masafer Yatta, designada a fines de la década de 1980 como zona de tiro por las fuerzas israelíes. La medida amenaza con expulsar a alrededor de 1.200 palestinos y palestinas, la mitad menores, en el que sería el mayor desplazamiento forzado en décadas desde una sola localidad. El enviado especial de la ONU

97. OHCHR, “Israel: UN experts condemn record year of Israeli violence in the occupied West Bank”, *OHCHR*; 15 de diciembre de 2022.

98. OHCHR, “Israel/Palestine: UN experts call on governments to resume funding for six Palestinian CSOs designated by Israel as ‘terrorist organisations’”, *OHCHR*, 25 de abril de 2022; RFI, “EU resumes funding for six Palestinian NGOs branded as terrorists by Israel”, *RFI*, 7 de agosto de 2022.

para Oriente Medio también insistió en su preocupación por las severas restricciones de movimiento impuestas por Israel a la población palestina. Durante el año Naciones Unidas también alertó sobre la situación de las personas detenidas. Hasta mediados de diciembre Israel había detenido a más de 6.000 palestinos, incluyendo 452 menores. Se trata del mayor número de personas arrestadas desde 2008, mientras que el número de personas que se encontraba en situación de detención administrativa se ha doblado en los últimos dos años.

Cabe destacar que a principios de año **Amnistía Internacional publicó un informe denunciando las políticas de apartheid de Israel contra la población palestina**, sumándose así a denuncias previas de organizaciones palestinas, entidades de derechos humanos israelíes y de Human Rights Watch.⁹⁹ A finales de año, la Asamblea General de la ONU (resolución 77/400) decidió solicitar opinión a la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí del territorio palestino, sus políticas de asentamientos y anexión, medidas para alterar la composición demográfica y leyes discriminatorias. Finalmente, cabe destacar que en 2022 los acontecimientos también estuvieron marcados por la disolución del gobierno israelí a mediados de año y una nueva convocatoria a elecciones, la quinta desde abril de 2019. La coalición de ocho partidos liderada por el primer ministro Neftalí Benet y el ministro de Exteriores Yair Lapid colapsó en junio, disolvió el Parlamento (Knesset) y convocó a comicios que se celebraron el 1 de noviembre y en los que resultó vencedor el partido Likud. **El retorno al poder de Benjamin Netanyahu derivó a finales de 2022 en la toma de posesión del gobierno más ultraderechista de la historia de Israel.** El nuevo gobierno incluye grupos nacionalistas judíos abiertamente supremacistas y que han incitado a una mayor violencia contra la población palestina. Netanyahu señaló que la expansión de los asentamientos sería la principal prioridad de su gobierno.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

99. Amnistía Internacional, *"Israel's Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity"*, AI, 1 de febrero de 2022.

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Aunque los niveles de letalidad del conflicto se han ido reduciendo en los últimos años, el país sigue siendo escenario de enfrentamientos que involucran a numerosos actores locales, regionales e internacionales y el balance de personas fallecidas a causa de la violencia continúa ubicando a Siria entre los conflictos armados de mayor intensidad a nivel mundial. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), **2022 fue el año con el balance de víctimas mortales más bajo desde el inicio del conflicto armado hace más de una década, con un total de 3.825 personas.** De este total, 1.627 eran civiles -incluyendo 321 menores y 159 mujeres- y 2.198 eran combatientes de los distintos grupos armados que operan en el país, entre ellos integrantes de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, de ISIS, de grupos armados opositores y/o islamistas, de milicias apoyadas por el gobierno, de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) lideradas por grupos kurdos, de milicias apoyadas por Irán, soldados turcos y miembros de Hezbollah, entre otros actores. **El recuento de la base de datos ACLED, en tanto, contabilizó un total de 5.649 personas muertas en Siria en 2022** a causa de diversos hechos de violencia, entre ellos enfrentamientos, explosiones y ataques contra población civil. En 2021 las cifras de letalidad del conflicto fueron muy similares -3.882 según SOHR y 5.737 de acuerdo con ACLED-, frente a cifras muy superiores observadas en períodos previos -cerca de 8.000 personas fallecidas en 2020, 15.000 en 2019, 30.000 en 2018.

Al finalizar 2022 el país continuaba dividido en varias zonas de influencia y seguía siendo objeto de incursiones aéreas continuas por parte de actores foráneos, principalmente de Rusia, Turquía e Israel. Entre los hechos de violencia más destacados, cabe mencionar que en enero ISIS protagonizó su mayor ataque desde

la derrota territorial que sufrió en 2019. **Miembros de ISIS lanzaron una ofensiva en el noreste del país, en la prisión de al-Sina'a, controlada por fuerzas kurdas, en un intento por liberar a combatientes detenidos. En los días siguientes, los enfrentamientos con miembros de las FDS y de la coalición internacional contra ISIS liderada por EEUU provocaron la muerte de más de 500 personas.** Estas hostilidades causaron también el desplazamiento forzado de más de 45.000 civiles. Durante el año, células de ISIS continuaron atacando, principalmente en Deraa, Dayr-al-Zawr, Hassakah, Homs y Hama, confirmando la resiliencia del grupo armado y su capacidad para actuar a través de distintas líneas divisorias.¹⁰⁰ A lo largo del año se mantuvo formalmente el alto el fuego en Idlib acordado en 2020, aunque se informó de periódicas vulneraciones y al finalizar 2022 la ONU alertaba de una escalada de hostilidades en todo el norte del país. Tanto en Idlib como el Aleppo continuaron los enfrentamientos entre fuerzas pro-gubernamentales y grupos armados de la oposición, incluyendo Hay'at Tahrir al-Sham y siguieron registrándose ataques aéreos rusos y del régimen con resultado de víctimas civiles. Turquía también prosiguió con sus periódicas intervenciones en el norte del país. Cabe destacar que, en noviembre, Ankara intensificó sus ofensivas contra fuerzas kurdas en el norte de Siria y de Iraq en el marco de una operación que bautizó como Claw Sword. Los ataques aéreos, acompañados de amenazas sobre una nueva incursión terrestre -que sería la cuarta en el norte de Siria- se incrementaron después de que un ataque explosivo en Estambul causara la muerte de seis personas. El gobierno turco responsabilizó del atentado al PKK y a las YPG, que descartaron la autoría. En el sur de Siria, a lo largo del año los incidentes se concentraron principalmente en las provincias de Deraa, Quneitra y Suwayda. En esta zona, controlada por el gobierno, continuaron registrándose numerosos asesinatos. Paralelamente, Israel prosiguió con sus ofensivas en distintos puntos de Siria, incluyendo un ataque contra el aeropuerto de Damasco que presuntamente pretendió evitar la entrega de armas a milicias apoyadas por Irán, entre ellas Hezbollah. EEUU también lanzó ataques contra milicias con presuntos vínculos con Teherán y siguió con incursiones contra ISIS, como la que acabó con la vida del líder del grupo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en febrero.

Durante 2022 la crisis humanitaria en Siria estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra, con elevadísimos índices de pobreza e inseguridad alimentaria

La población civil siria continuó viéndose gravemente afectada por el conflicto armado. En sus investigaciones e informes sobre Siria, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU subrayó que las partes contendientes no estaban adoptando las medidas necesarias para

evitar o minimizar las pérdidas de vidas civiles en ataques y enfrentamientos, que continuaron afectando zonas residenciales y destruyendo deliberadamente infraestructuras civiles. Las hostilidades también siguieron provocando una grave contaminación con explosivos por todo el territorio. La investigación de la comisión de investigación independiente sobre Siria de la ONU reiteró las denuncias sobre el uso sistemático de torturas y malos tratos en centros de detención. Al finalizar el año, el enviado especial de la ONU constataba que, en lo referente a las personas detenidas y desaparecidas, no había novedades tras la amnistía presidencial decretada por al-Assad el 30 de abril de 2022. El decreto, que llevó entonces a la liberación de unos cuantos centenares de presos, fue criticado por falta de transparencia. Familias de personas detenidas continuaban buscando noticias del paradero de sus familiares y, según informaciones de prensa, a fines de 2022 más de 136.000 personas permanecían en cárceles del régimen. **Durante 2022 se constató que la crisis humanitaria en el país estaba en su peor nivel desde el inicio de la guerra. La ONU alertaba en diciembre que los niveles de inseguridad alimentaria habían alcanzado cifras récord: 12 millones de personas. Las estimaciones apuntaban a que 15,3 millones de personas, equivalentes al 70% de la población, necesitaría ayuda humanitaria en 2023 y que el 90% de la población se encontraba por debajo**

del umbral de pobreza. El deterioro de la situación económica y humanitaria también se vio condicionada por el aumento en el precio de los alimentos y alentó protestas contra el régimen, especialmente en el sur del país. A esto se sumó una creciente preocupación por la expansión de una epidemia de cólera, con miles de casos registrados en todas las provincias del país. Los retos eran especialmente graves en el norte de Siria, debido a las dificultades de acceso a agua potable y a servicios de salud. En 2022, la ONU y organizaciones de derechos humanos también continuaron denunciando la preocupante situación de miles de personas detenidas en los campos de al-Hawl y al-Raj, que albergan principalmente a familias de combatientes de ISIS, incluyendo a unos 38.000 menores de edad. Junto al hacinamiento y la precariedad, llamó la atención la situación de inseguridad, con 42 asesinatos solo en al-Hawl en el último año, incluyendo 22 mujeres y cuatro menores.

En paralelo a la evolución del conflicto, cabe destacar que continuaron en marcha los esquemas diplomáticos formales para abordar la crisis, aunque sin que se produjeran progresos en la búsqueda de una salida política. El proceso de Ginebra auspiciado por la ONU quedó bloqueado a partir de mediados de año por las

100. International Crisis Group, *Containing a Resilient ISIS in Central and North-eastern Syria*, Middle East and North Africa Report No.236, 18 de julio de 2022.

reticencias de Rusia y Siria a continuar las conversaciones en esta ciudad, debido a que ya no consideraban a Suiza como un actor imparcial. Las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania también motivaron un mayor acercamiento entre Moscú y Teherán, que ampliaron su colaboración más allá de Siria -Irán transfirió aviones no tripulados a Rusia para sus operaciones en Ucrania. Informaciones de prensa también informaron del reclutamiento de fuerzas sirias para apoyar a las fuerzas rusas en Ucrania. Durante 2022 también se observó un acercamiento entre Turquía y Siria. El Gobierno de Ankara, principal apoyo de grupos armados y políticos de la oposición siria, se mostró dispuesto a un diálogo con Damasco y en diciembre se reunieron en Moscú los

ministros de Defensa y jefes de inteligencia de ambos países, en el primer encuentro de este tipo desde el inicio de la guerra. **El acercamiento entre Turquía y Siria que sería una prioridad para Moscú, causó preocupación en sectores de la oposición siria, en las fuerzas kurdas y en la población refugiada siria.** De cara a 2023 se temía una intensificación de los retornos forzados de población refugiada siria, un tema relevante para los cálculos electorales del presidente turco, que afrontaría comicios generales en mayo. Un informe de Human Rights Watch denunció que las autoridades turcas habían arrestado arbitrariamente, detenido y retornado forzosamente a cientos de hombres y niños refugiados sirios entre febrero y julio de 2022.¹⁰¹

101. Human Rights Watch, “Turkey: Hundreds of Refugees Deported to Syria”, *HRW*, 24 de octubre de 2022.